Il Direttore

IPALMO
Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi
dell'Africa, America Latina e Medio Oriente
Via del Tritone 62-B - 00187 Roma - tel. 6792734 - 6792311 - 6792321

Prot.n. 644-86 GP/ri/AMCEN

Roma, 31 de Julio 1986

Prof. Jordi Solé Tura
Decano
Faculdad de Derecho
Universidad de Barcelona
Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona

Muy estimado profesor,

Le agradezco en primer lugar por haber adherido a nuestra iniciativa sobre America Central y tengo el agrado de confirmarle por medio de esta carta que la Conferencia se celebrarà en Roma en la semana entre el 13 y el 18 de Octubre, en coincidencia con la visita en Italia del presidente de Guatemala Vinicio Cerezo. El programa preliminar que le envìo de nuevo queda confirmado. La fecha exacta le serà comunicada el màs pronto posible junto a los detalles de caràcter organizativo.

Tengo el agrado de comunicarle que su participaciòn en el 'panel' està prevista, como discussant, en la sesiòn dedicada al tema **seguridad-negociaciòn** , como puede veer en el esquema adjunto.

Le enviaremos en debido tiempo la ponencia de base en manera que pueda preparar su intervenciòn. Como ya le señalamos en nuestra carta anterior Usted serà nuestro huesped durante su permanencia en Roma.

En espera de sus noticias, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo muy cordial.

p. Giampaolo Calchi Novati
Giancarlo Pasquino

IPALMO
Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi
dell'Africa, America Latina e Medio Oriente
Via del Tritone 62-B - 00187 Roma - tel. 6792734 - 6792311 - 6792321

Conferencia internacional Ipalmo sobre Centroamérica

Programma preliminar

Localidad: Roma
Fecha: semana entre 13 y 18 de Octubre 1986

1) Objeto

La Conferencia se desarrollarà a nivel internacional y serà de caràcter cultural aunque con evidentes implicaciones polìticas. Su finalidad es el estudio de la situaciòn centroamericana bajo sus varios aspectos: transiciòn hacia la democracia, conflictos locales, papel de las potencias regionales y extraregionales. Italia - su gobierno y las varias fuerzas polìtico-culturales - desea contribuir a los esfuerzos hacia la normalizaciòn institucional y la bùsqueda de soluciones negociadas de los conflictos. En este sentido la Conferencia deberà ser lo suficientemente "abierta" como para permitir una comparaciòn entre tesis y posiciones distintas pero suficientemene "homogénea" como para ofrecer indicaciòn de soluciòn.

2) Organizaciòn

Ipalmo desea asegurar la presencia en la Conferencia de cuatro categorìas de interlocutores: a) representantes de paìses centroamericanos; b) representantes de paìses del Grupo de Contadora; c) representantes de Estados Unidos y de Cuba; d) representantes de la Cee y de los demàs paìses europeos, incluyendo naturalmente a representantes de Italia.

La Conferencia serà organizada, luego de una sesiòn introductiva, en sesiones de trabajo, cada una de ellas reservada a un tema especìfico. El "panel" de cada sesiòn serà compuesto por un ponente, que tendrà a su lado dos o màs "discussants", elegidos de la manera màs oportuna para permitir la màs amplia comparaciòn entre las varias opiniones y poner en luz las posiciones de cada una de las cuatro categorìas de interlocutores que han sido individuados. Las ponencias seràn asignadas a estudiosos y especialistas en la materia, mientras que estudiosos y personalidades polìticas ejerceràn el papel de "discussants". A las personalidades polìticas invitadas se les reserverà ademàs un espacio "programado" en la discusiòn. Se preveen enfìn cortas "comunicaciones" relativas a algunos aspectos especìficos que no hayan sido suficientemente analizados en las ponencias.

3) Temas

Luego de los discursos introductivos de dos altas personalidades polìticas de Italia y de un paìs centroamericano, y luego de la ponencia de presentaciòn de Ipalmo, que tratarà de los aspectos generales de la crìsis, vistos bajo la òptica italiana y europea, se realizaràn cuatro sesiones de trabajo, centradas en un nùmero anàlogo de nùcleos temàticos:

a) Polìtico-istitucionales

Ponencia: "Las mutaciones del sistema polìtico: hacia qué transiciòn democràtica en Centroamérica". **Panel: ponente:** especialista centroamericano; **"discussants":** un europeo y un italiano. Otras personalidades polìticas de Centroamérica.

Forma y substancia de la democracia: qué ha cambiado luego de la fase electoral. Los sujetos (militares, Iglesia, oligarquìa,partidos). Los sistemas de poder existentes actualmente en las varias naciones. Ideas e instrumentos de reconciliaciòn internos. ?Se està yendo hacia un asentamiento institucional estable o hacia una nueva radicalizaciòn?

b) Econòmico-social

Ponencia: "Los factores endògenos de los conflictos: crìsis econòmica y desequilibrios sociales". **Panel: ponente:** economista centroamericano; **"discussants":** un economista europeo, un representante de una organizaciòn internacional (Bid o Cepal). Tres personalidades polìticas (Contadora, Europa, Centroamérica).

Agotamiento del modelo agroexportador y escasa diferenciaciòn productiva. Paro de la industrializaciòn y atrofia del sector de los servicios. Tendencias recesivas persistentes: recesiòn, deuda, escasos recursos finacieros. El papel de la ayuda internacional. ?Como ha cambiado la estructura social? ? Es aùn vàlida la dicotomìa oligarquìa-emarginaciòn? ? Qué relevancia tienen las clases medias? ? Se pueden instituir nuevas alianzas sociales y para qué tipo de desarrollo?

c) Seguridad-negociaciòn

Ponencia: "Los factores exògenos de la crìsis, los problemas relativos a la seguridad, la acciòn del Grupo de Contadora". **Panel: ponente:** especialista de un paìs de Contadora (México); **"discussants":** un estudioso estadounidense; un representante centroamericano y uno cubano. Tres personalidades polìticas (Apoyo, Europa, Centroamérica).

Las causas de la instabilidad regional; ?un problema Este-Oeste o Norte-Sur? La polìtica de los Estados Unidos en Centroamérica. ?Existe un problema de seguridad para los Estados Unidos? El papel de Cuba y de la Uniòn Soviética. Las preocupaciones de las potencias regionales y la iniciativa de Contadora. ?Dònde y por qué se han paralizado las negociaciones que podìan conducir a un acuerdo? Posibles desarrollos: ?soluciòn polìtica regional o soluciòn militar?

d) El papel de Europa

Ponencia: "La contribuciòn de Europa a la estabilizaciòn polìtica y la cooperaciòn econòmica". **Panel: ponente:** especialista europeo; **"discussants":** un representante de Contadora y uno centroamericano. Tres representantes polìticos (Cee, Italia, España).

Europa ha pasado de una polìtica de bajo perfil a un compromiso màs activo. Los intereses europeos: democratizaciòn, estabilizaciòn polìtica, no intervenciòn. Posiciones diferenciadas entre los varios paìses, aunque todos se encuentran de acuerdo sobre la necesidad de apoyar a Contadora. La cooperaciòn econòmica luego de la reuniones de San José y de Luxemburgo. Las responsabilidades de Europa del punto de vista polìtico y econòmico.

Roma, 21 de Julio, 1986

GCP/ri/US

IPALMO
Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi
dell'Africa, America Latina e Medio Oriente
Via del Tritone 62-B - 00187 Roma - tel. 6792734 - 6792311 - 6792321

Conferenza internazionale Ipalmo
sull'America centrale

I Relazione politico-istituzionale

Relatore: Edelberto Torres Rivas, segretario generale Flacso, sociologo guatemalteco

Discussants: Laurence Whitehead (Inghilterra), Leonardo Morlino (Italia), Jorge Arturo Reyna (Honduras), Alain Rouquiè (Francia)

Comunicazioni: "La nuova costituzione del Nicaragua" (Fabrizio Clementi, Centro Riforma dello Stato, Italia)
"Nuove forme culturali" (Antonio Melis, Italia) (deve confermare)

II Relazione economico-sociale

Relatore: Ignacio Ellacuria, rettore Università centro-americana di San Salvador

Discussants: Dieter Benecke, Fondazione Adenauer (Rft) (deve confermare), Esperanza Duran (Messico), George Irvin (Olanda), Abraham Lowenthal (Usa)

Comunicazioni: "Riforme agrarie" (Fao)
"L'iniziativa statunitense sul Bacino dei Caraibi e gli aiuti internazionali" (da definire)

III Relazione sicurezza-negoziato

Relatore: Olga Pellicer (Colegio de Mexico, ambasciatrice del Messico in Grecia)

Discussants: William LeoGrande (Stati Uniti), José Miguel Insulsa (Cile-Messico), Jordi Solè Tura (Spagna), Sergio Marchisio (Italia)

Comunicazione: "Garanzie delle frontiere" Luigi Caligaris (Italia)

IV Relazione ruolo dell'Europa

Relatore: Wolf Grabendorff, direttore Irela (Istituto per le relazioni fra Europa e America latina, Madrid)

Discussants: Xabier Gorostiaga (Nicaragua), Daniel Oduber (Costa Rica), Mario Telò (Italia)

Comunicazioni: "La cooperazione italiana in Centro America" (Massimo Micarelli, Ipalmo)
"Le Ong europee in America centrale" (Ong italiane)

Roma, 21 luglio 1986
GP/ri/AMCENPROG

1955

ZCZC XGA093 BNA495 52R

ESXG CO ESBN 065

00187ROMA 65/58 26 1740



JORDI SOLE TURA DECANO FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSITAD DE BARCELONA

AVDA DIAGONAL DE 684

08034 BARCELONA

CONFERENCIA IPALMO CENTRO AMERICA TENDRA LUGAR ROMA 14/16

OCTUBRE EN AULETTA GRUPPI PARLAMENTARI EN LA CAMARA

DIPUTADOS VIA CAMPO MARZIO 74 STOP RESERVADO HABITATION

HOTEL COLOMNA PALACE EN PIAZZA MONTE CITORIO 12 STOP

REEMBORSARENOS BILLETE FAVOR COMUNICA VIA LLEGADA

STOP CORDIALMENTE

CLACHIONATI DIRECTOR

-5

IPALMO
Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi
dell'Africa, America Latina e Medio Oriente
Via del Tritone 62-B - 00187 Roma - tel. 6792734 - 6792311 - 6792321

CONFERENZA INTERNAZIONALE

AMERICA CENTRALE: CRISI O PACIFICAZIONE

(Roma, 14-16 ottobre 1986)

Auletta dei Gruppi parlamentari - Camera dei Deputati

Sessione: temi economico-sociali

Relazione : Ignacio Ellacuria, rettore dell'Universidad Centromaericana
di El Salvador

FACTORES ENDOGENOS DEL CONFLICTO CENTROAMERICANO:

CRISIS ECONOMICA Y DESEQUILIBRIOS SOCIALES

Es una opinión compartida que el conflicto centroamericano, tanto en su conjunto como en cada uno de los países, tiene como una de sus causas principales lo que pudiera llamarse crisis económica y desequilibrios sociales. Aunque resultaría ingenuo sostener que la única causa de los mismos haya de buscarse en la situación económico-social que vive el área centroamericana y aunque también sería ingenuo sostener que la crisis económica tenga tan sólo causas endógenas, no puede negarse la gran importancia que en sí mismos tienen la crisis económica y los desequilibrios sociales y también la incidencia innegable de los mismos en eso que ha venido en denominarse el volcán de Centroamérica. Cientos de miles de asesinados en los últimos veinticinco años y especialmente en los diez últimos, varios millones de desplazados y/o refugiados, otros muchos millones de hombres que no tienen ni siquiera lo suficiente para alimentarse, acciones bélicas en constante crecimiento..., estos y otros posibles señalamientos dependen en gran parte de las fuertes tensiones producidas por un bajísimo grado de desarrollo y sobre eso por una gran desigualdad en la distribución del ingreso nacional entre las distintas capas sociales.

Mostrar esto en detalle, aunque someramente -hay muchos y buenos estudios sobre este problema- será el propósito fundamental de mi ponencia, a la cual no se le pide tanto que proponga remedios explícitos y concretos para esta situación sino que ponga de relieve la importancia de los factores endógenos de la crisis centroamericana actual.

Para analizar inicialmente el problema comencemos por un breve análisis de cómo estaba la región a finales de los setenta, cuando el conflicto empieza a ahondarse y regionalizarse tanto por el triunfo de la revolución sandinista como por el rapídisimo y espectacular crecimiento del movimiento revolucionario salvadoreño, sin olvidar las tensiones de Guatemala y Honduras, sobre todo las de Guatemala sometida a una represión comparable con la que se ha sufrido en El Salvador.

..

Pues bien, a finales de los setenta, la región había pasado por más de veinte años de constante crecimiento. "La región en conjunto, logró mantener entre 1950 y 1978 un crecimiento promedio superior al 5.3% anual en el producto interno bruto medido a precios constantes. Ello significa que, hacia finales de los años setenta, el producto por habitante excedió en casi el 80% al observado en 1950, pese a que la población creció a una tasa de las más altas del mundo" tal como puede verse en el cuadro 1 (Rosenthal, 1982, 19):

Cuadro 1

Centroamérica: tasas reales de crecimiento del producto interno bruto total y por habitante

(Precios de 1970)

Países	1950-1980	1950-1955	1955-1960	1960-1965	1965-1970	1970-1978	1970-1980	Producto interno bruto por habitante			
								Dólares			Variación porcentual
								1950	1978	1980	1980-1950
Centroamérica	4.9	4.7	4.6	6.0	5.1	5.4	4.4	242	428	404	66.9
Costa Rica	6.5	8.3	6.0	6.5	7.0	6.1	5.6	322	758	767	138.2
El Salvador	4.4	4.6	4.7	6.8	4.5	5.2	3.0	203	347	295	45.3
Guatemala	5.0	2.2	5.3	5.2	5.8	5.6	5.6	255	450	450	76.5
Honduras	4.2	2.5	4.6	5.2	4.1	4.4	4.3	234	297	295	26.1
Nicaragua	4.5	8.3	2.3	10.2	4.2	4.0	1.2	223	409	324	45.3

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

El cuadro muestra ya un grave problema para el período 1978-1980, pero hasta el 78 mantiene aparentemente unos índices muy prometedores. Como advierten Feinberg y Pastor, "si la población hubiera permanecido estable, en vez de triplicarse (de 8.3 millones a 23 millones), el ingreso real per capita se hubiera quintuplicado (Feinberg, Pastor, 1986, 5). No obstante, aun respecto del crecimiento habría que hacer algunas observaciones. Si examinamos, por ejemplo, el caso de El Salvador en el período 1968-1978 y desglosamos el P.T.B. en distintos sectores económicos, nos encontramos con que gran parte del índice de crecimiento hay que atribuirlo al sector financiero y público y mucho menos al sector estrictamente productivo, especialmente al agropecuario, en el que el crecimiento se va relantizando y no responde de ninguna manera al crecimiento poblacional y menos a los requerimientos de las necesidades básicas de la mayor parte de la población (Cuadro 2).

Cuadro 2

El Salvador: Tasas de Crecimiento anual promedio de principales sectores (en %)

1968-1978

PERIODOS	P.T.B.	SECTORES ECONOMICOS				
		AGROPECUAR.	INDUSTRIAL	COMERCIO	FINANCIERO	PUBLICO
1968 - 1972	4.0	4.0	3.9	2.9	8.2	6.0
1972 - 1976	5.4	2.4	6.0	6.0	11.3	12.1
1976 - 1978	4.7	2.0	3.5	4.8	10.3	11.2

FUENTE: Elaborado en base a Revista Mensual del Banco Central de Reserva de El Salvador. Varios números.

Pero aun dado por bueno el índice de crecimiento, aun tendríamos un fenómeno que es básico para nuestro análisis: la situación de pobreza y extrema pobreza en la que vivía la mayor parte de la población centroamericana. Según estimaciones de la CEPAL (cuadro 3) a finales de los setenta, esto es, a finales del boom del desarrollo centroamericano, el 65.2% de la población centroamericana vivía en estado de pobreza y de este 65.2% un 42.1% vivía en estado de extrema pobreza. Por estado de "extrema pobreza" entiende la CEPAL que el ingreso familiar no cubre el costo de la canasta básica de alimentos, mientras que por "no satisfacción de necesidades básicas" entiende que el ingreso familiar cubre el costo de la canasta básica alimenticia, pero no el costo de los servicios básicos: vivienda, salud, educación, etc. Puesta la situación en números reales se puede decir que hacia 1980 más de 13 millones de centoramericanos vivían en estado de pobreza y de ellos más de 8 millones y medio vivía en extrema pobreza, esto es, ni siquiera tenían ingresos suficientes para mantener el mínimo indispensable desde el punto de vista biológico nutricional. Ciertamente no son números absolutos alarmantes, comparados con los números absolutos de poblaciones afectadas por hambrunas mortales, pero son números relativos que indican de momento la gran indigencia de una gran parte de la población centroamericana:

Cuadro 3

Istmo centroamericano: estimaciones de la incidencia de la pobreza hacia fines del decenio de 1970

(Estructura porcentual)

Concepto	Total			Costa Rica			El Salvador		
	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Estado de pobreza	65.2	53.9	74.2	24.5	13.6	34.2	68.1	50.9	76.4
Extrema pobreza	42.1	27.4	53.7	13.4	7.4	18.7	50.6	42.4	55.4
No satisfacción de necesidades básicas	23.1	26.5	20.5	11.1	6.2	15.5	17.5	18.5	21.0
No pobres	34.8	46.1	25.8	75.5	86.4	65.8	31.9	39.1	23.6
Concepto	Guatemala			Honduras			Nicaragua		
	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Estado de pobreza	79.0	75.0	82.0	60.9	40.0	75.0	88.5	40.5	80.0
Extrema pobreza	52.0	38.0	61.0	40.9	15.0	57.0	29.2	20.4	50.0
No satisfacción de necesidades básicas	27.0	37.0	21.0	20.0	25.0	18.0	29.5	20.4	30.0
No pobres	21.0	25.0	18.0	39.1	60.0	25.0	36.3	59.5	20.0

FUENTE: Estimaciones de la CEPAL, Proyecto de necesidades básicas en el Istmo centroamericano, sobre la base de informaciones de los países.

Obviamente es en el sector rural donde se concentraba por esas fechas más la extrema pobreza (53.7% para toda el área), pero es significativo que el estado de pobreza se daba más en Nicaragua (88.5%), Guatemala (79.0%) y El Salvador (68.1%), esto es, en los países en que han surgido los más poderosos movimientos revolucionarios, sin que esto implique necesariamente una causalidad unívoca entre los dos factores. No obstante, tenemos que en Costa Rica, mucho más calmada en este aspecto, el mismo renglón de pobreza es muchísimo más bajo (24.5%). En Honduras, aun siendo muy alto (60.9%), es bastante más bajo que el de Nicaragua y Guatemala y aun que el de El Salvador.

Este desigual aprovechamiento del crecimiento del PIB queda reflejado en las tablas correspondientes a la distribución del ingreso por estratos familiares, en las que se aprecia cómo, con excepción de Honduras, va disminuyendo el porcentaje de ingreso del 20% más pobre de la población (de 3.2% en el período 1965-1967 para El Salvador pasa a 2.8% en 1974; de 4.8% en 1976 para Guatemala a 3.6% en 1977). En El Salvador el 20% más rico ha visto subir sus ingresos de un 58.1% en 1965-1967 a un 66.4% en 1974, único caso en la región en que esto ocurre, pues en todos los demás es el 30% bajo y sobre la mediana el sector que sube en la proporción de los ingresos. Tenemos así que, además de existir una enorme población en extrema pobreza que va aumentando cuantitativamente cada año, esta población, especialmente en El Salvador y Guatemala, ve abrirse más y más la brecha con los sectores ricos y los sectores medios (Cuadro 4):

Cuadro 4

Centroamérica: Estimaciones diversas sobre distribución del ingreso por estratos familiares

Estrato	*Porcentajes del Ingreso*											
	Costa Rica			*El Salvador*				*Guatemala*		*Honduras*		*Nicaragua*
	1961[a]	*1971*[b]	*1977*[c]	*1961*[d]	*1965-1967*[e]	*1968*[e]	*1974*[f]	*1976*[g]	*1977*[h]	*1967-1968*[i]	*1976-1979*[j]	*1980*[k]
20% más pobre	6.0	5.4	3.2	5.5	3.2	3.7	2.8	4.8	3.6	2.3	4.8	3.8
30% bajo la mediana	10.4	15.4	42.1	10.5	12.0	14.9	9.6	12.5	13.5	8.5	18.7	14.2
30% sobre la mediana	23.6	28.5		22.6	26.7	38.6	22.8	23.8	27.8	21.4	25.2	27.4
20% más rico	60.0	50.6	54.7	63.3	58.1	56.8	66.4	58.8	55.1	67.8	53.3	54.5
5% más rico	35.0	22.8		32.9	28.5	20.6	15.4	35.0		38.4	21.8	24.3
10% más rico									38.7			38.0

FUENTES: [a] CEPAL, *Estudio económico de América Latina, 1968*. [b] Víctor Hugo Céspedes S., *Costa Rica: la distribución del Ingreso y el Consumo de algunos alimentos*, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones, 1973. [c] Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo y el Empleo, *Encuesta de ingresos, 1977*, San José, Costa Rica. Esta encuesta tiene cobertura nacional y presenta la información en quintiles. El porcentaje del ingreso total que corresponde al segundo, tercero y cuarto quintil, respectivamente, es de 8.1%, 12.9% y 21.1%. Por otra parte, en 1978 se llevó a cabo una encuesta de nutrición por el Sistema Nacional de Información, que arrojó los siguientes resultados: 22.5% más pobre, 5.1% del ingreso; 36.7% siguiente, 20.1%; 32.2% siguiente, 36.7%, y 8.6% más rico, 38.1%. [d] CEPAL, *La distribución del ingreso en América Latina*, Nueva York, Naciones Unidas, 1970. Unidad perceptora PEA. [e] Estimaciones de la SIECA sobre la base de INCAP, *Información básica de la encuesta sociocultural, 1965* (citado por Jan de Wrisa, en *La distribución del ingreso en los países centroamericanos*, GAFICA. El Salvador, San Salvador, 1976). [f] PREALC. *Situación y perspectiva del empleo en El Salvador*, tomo II, cuadro 18, 1975 (únicamente comprende el área metropolitana y la población económicamente activa). [g] Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, *Política distributiva*, versión preliminar, Guatemala, abril de 1975. [h] Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, *Encuesta de hogares sobre recursos humanos en el Departamento de Guatemala*, mayo de 1977 (sólo cubre ingresos salariales). [i] CEPAL, *Encuesta de ingresos y gastos familiares, 1967-1968* (F/CEPAL/L.115/11), abril de 1975. [j] Dirección General de Estadística, *Encuesta de ingresos y gastos, 1977-1978*, Tegucigalpa, Honduras, 1975 (corresponde únicamente a la ciudad de Tegucigalpa, y no se ponderan debidamente los resultados por factores de expansión). [k] Ministerio de Planificación e Instituto Nacional de Estadística, sobre la base de la *Encuesta de hogares urbanos de 1980*; dicha encuesta abarcó únicamente las principales zonas urbanas de Nicaragua; el cuadro muestra la distribución del ingreso familiar.

Vistos en términos reales y absolutos estos porcentajes relativos tenemos que hacia 1980 más de cuatro millones de centroamericanos sólo tenían una participación en el ingreso en torno al 3.5%, mientras que otros cuatro millones, los más ricos, recibían el 58% del ingreso nacional. Queda así comprobada la magnitud del problema en razón de las mayorías que están viviendo en estado de pobreza así como en razón de la contraposición entre quienes se aprovechan tan desporporcionadamente del ingreso.

No es que sea éste un problema específico del área centroamericana. Como repiten inecesantemente economistas, sociólogos, politólogos y moralistas, este proceso, para algunos agudamente descrito por Marx, se va dando tanto en el orden internacional como en el orden interno de cada país: la brecha entre ricos y pobres tiende a ensancharse de tal modo que cabe hablar de una acumulación de la riqueza por unos pocos y una acumulación de la pobreza por la mayor parte de países y la mayor parte de la población mundial. Así, la tendencia en Estados Unidos tras la segunda guerra mundial a declinar la desigualdad entre los más ricos y los más pobres, empezó a revertirse en 1978 y en 1984 el 40% de las familias más ricas se llevó el 67.3% del ingreso mientras que el 40% más pobre tan sólo logró el 15.7% (que es la menor cantidad desde 1947); el 20% que podría considerarse como la clase intermedia tuvo un 17% (Ehrenreich, 1986, 44). Pero de todos modos en el caso de Centroamérica no se trata de un 40% de la población entre los más ricos sino tan sólo de un porcentaje en torno al 5%, que además cuenta con un poder político asimismo desproporcionado.

Si las condiciones eran tan adversas para la mayor parte de la población cuando el PIB iba en aumento y cuando el número de los afectados por la pobreza era cuantitativa y relativamente menor, desde 1980 las cosas van a peor. De 1970 a 1974 el crecimiento del PIB por habitante podía estimarse satisfactorio en su conjunto (14.5), pero ya en el período 1975-1979 baja sensiblemente (6.0%), para entrar en barrena durante el período 1980-1984 (-18.1%), todos los porcentajes en tasas acumuladas. Véase cuadro 5 (González del Valle, 1986, 102):

Cuadro 5

Centroamérica: Producto Interno Bruto por habitante, 1970-1984
(tasas acumuladas)

	1970-74	1975-79	1980-84
Costa Rica	22.0	14.0	-16.6
El Salvador	13.0	8.0	-34.8
Guatemala	18.5	13.0	-15.6
Honduras	7.0	17.5	-13.4
Nicaragua	11.0	-35.5	2.0
Centroamérica	14.5%	6.0%	-18.1%

FUENTE: CEPAL y Estadísticas nacionales.

Las causas de este fenómeno tan grave no son todas de índole endógena, aunque llama la atención el comportamiento de Nicaragua, el único país con índice positivo (2.0%), frente al caso extremo de El Salvador (-34.8%), cuando en el período inmediatamente anterior (1975-1979), el comportamiento de Nicaragua fue llamativamente negativo (-35.5%), mientras que en El Salvador era todavía positivo (8.0%). Pero el que Costa Rica y Honduras se vean afectadas también por un severo incremento negativo, indica que no puede ponerse como causa principal la agudización de los conflictos y el hecho de la guerra civil. No se había aumentado el mercado interno para sostener el desarrollo hacia afuera y los 'schocks externos', tal como la inflación de costos importada, los tremendos cambios entre el encarecimiento de las importaciones y la baja del valor de las exportaciones, la crisis del Mercado común centroamericano, la gran recesión del comercio mundial (1981-1984)... todos eran factores que se conjugaban para un drástico empeoramiento de la situación económica con inevitables repercusiones en la intranquilidad social, sobre todo en aquellos países de acelerada concientización y politización. El capital criollo huye en cantidades cada vez mayores a los bancos extranjeros e incluso lo hace un buen número de capitalistas y aun de empresarios. Una gran parte de la

capacidad industrial instalada (a veces hasta el 60%) queda sin ser utilizada y lo mismo ocurre con grandes extensiones agrícolas, sobre todo en El Salvador, por los precios pocos remunerativos, por la inseguridad social y por la destrucción de la guerra.

Todo ello lleva a una dramática situación, hasta el punto de que, para poder alcanzar en 1990 los niveles de ingreso de 1980, tan notoriamente insuficientes en orden a satisfacer las necesidades básicas y poder fomentar un consenso social suficiente -o al menos en orden a sobrepasar una situación de conflicto, paralizante de cualquier desarrollo- se requeriría más de veinte mil millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera (Alan Stoga, 1986, 59). Véase cuadro 6:

Cuadro 6

Requerimientos financieros para conseguir en 1990 el PIB de 1980

Costa Rica	$ 5.1 millones
El Salvador	5.5 millones
Guatemala	4.5 millones
Honduras	2.3 millones
Nicaragua	3.4 millones
	$ 20.8 millones

Se trata de un requerimiento financiero neto acumulativo, es decir, sin contar la amortización de cualquier otra deuda. Pero aun siendo tan altos estos requerimientos y tan difíciles de conseguir porque ya están corriendo los años y sigue la destrucción sin que se planifique siquiera la llegada de esas cantidades, el Informe Kissinger advierte con razón; "Estas proyecciones pueden subestimar las necesidades financieras de la región, al suponer que la fuga de capitales se detiene después de 1983, los retrasos comerciales y financieros se capitalizan totalmente, la maduración de las deudas públicas y privadas se refinancia y la mayor parte de

los nuevos recursos se destina a la inversión en lugar del consumo. Ninguna de estos supuestos tiene posibilidad de cumplirse en su totalidad..." (Kissinger, 1986, 166). Esto sin tener en cuenta las deficiencias que en el análisis de la situación y de sus soluciones presenta el Informe (de Sebastián, 1984, 796; Holland, Anderson 1984; Feinberg 1986).

No es que la región haya dejado de recibir ayuda financiera importante. Ya el anterior crecimiento y desarrollo de los años 1962-1980 se había conseguido en cierta medida -sin olvidar otras condiciones objetivas- gracias a los altos aportes de Estados Unidos a la región y en general al financiamiento externo, de modo que en parte se debe a ese financiamiento el crecimiento económico de la región, no obstante los severos límites del mismo que ya notamos. Si atendemos a la ayuda norteamericana podemos apreciar su peso en el siguiente cuadro 7:

Cuadro 7

Ayuda multilateral y de los Estados Unidos a países centroamericanos

(1962-1980)
(millones de dólares)

Países	Ayuda Bilateral	Banco Mundial	BID	Total
Costa Rica	214.8	334.9	422.8	972.5
El Salvador	243.8	179.5	301.7	725.0
Guatemala	307.0	259.3	379.2	945.5
Honduras	301.7	388.8	435.1	1.125.6
Nicaragua	308.5	146.0	266.6	721.1
Total	1.375.8	1.308.5	1,805.4	4.489.7

FUENTE: US-AID Overseas Loans and Grants and Assistance from International Organization, Washington, D. C. Oficina de Planificación y Presupuesto, AID, 1981).

Por eso es más llamativo que el PIB haya bajado tan notablemente en el período 1980-1984, cuando no ha faltado la ayuda norteamericana y el financiamiento multilateral. Es un nuevo argumento para reflexionar sobre la relativa eficiencia de estos aportes, no ya para lograr una distribución equitativa del ingreso, sino simplemente para garantizar un crecimiento conti-

nuado. No es que se deje de ver algún signo positivo como resultado de las ayudas y del creciente endeudamiento externo. Así en El Salvador se aprecia un crecimiento en 1985 de un 1.5% y se espera para 1986 un crecimiento de 1.0% y se habla para Honduras de un 4.0%. Pero la situación no es halagueña, si es que reflexionamos, independientemente de los magros resultados, en el creciente endeudamiento en el que va cayendo la región, que hipoteca mucho más el ya de por sí dudoso desarrollo en el próximo futuro, como se aprecia en el cuadro 8.

Cuadro 8

Centro América: Deuda Externa Total Desembolsada

(saldos a fines del año, en millones de $)

País	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Costa Rica	2,233	3,183	3,360	3,497	3,848	4,113	4,240
El Salvador	939	1,176	1,471	1,710	1,891	1,968	2,100
Guatemala	934	1,053	1,385	1,802	2,019	2,189	2,450
Honduras	1,180	1,510	1,708	1,842	2,017	2,260	2,440
Nicaragua	1,136	1,588	2,200	2,730	3,324	3,900	4,370
Totales	6,422	8,510	10,124	11,581	13,099	14,430	15,600

FUENTE: CEPAL: "Balance Preliminar de la Economía Latinoamericana 1985. "Notas sobre la Economía y el Desarrollo.

Si partimos de 1979 como final del período anterior, en el período 1980-1985 Centroamérica se habría endeudado en 9,178 millones de dólares y, sin embargo, en ese mismo período habría un incremento negativo del PIB de un -18.1% Sólo en 1985 se habrían dado en algunos países ligeros signos de mejora. El país que más se ha endeudado absoluta y relativamente es Nicaragua, justamente desde la llegada del sandinismo al poder, aunque ya su deuda en 1979 era superior a la de los dos países más poderosos económicamente en el área, como son Guatemala y El Salvador. Costa Rica, por su parte, que no ha cargado con gastos de guerra, ni siquiera con gastos militares estrictamente tales, ha venido abusando de los préstamos extranjeros, lo cual muestra que su relativo bienestar es en parte un espejismo, que antes o después tendrá que des-

vanecerse con tal vez importantes consecuencias sociales.

No nos toca analizar aquí por qué los préstamos recibidos en América Latina no han producido los efectos positivos deseados y por qué se han convertido en una pesadísima carga para el ulterior desarrollo económico de toda la región y en un manifiesto peligro para los incipientes procesos de democratización. En los casos de Nicaragua y de El Salvador es muy verosímil que el poco resultado de los mismos en favor de la satisfacción de las necesidades básicas y del desarrollo económico en general se deba en parte a la guerra. Y eso en dos sentidos. Uno, porque buena cantidad de ellos, así como de los respectivos presupuestos nacionales, está siendo dirigida a llevar adelante la guerra; otro, porque la guerra misma implica una gran destrucción de recursos y posibilidades no empleadas de producción. Pero, no obstante eso, sobre todo en el caso de los demás países no tan afectados por la guerra, al menos directamente, este problema de la deuda externa que de momento ha podido servir para suavizar crisis a punto de estallar, puede llegar a convertirse en una explosión a la larga de incalculables consecuencias.

Acabamos de decir que la guerra en varios de los países centroamericanos perturba el desarrollo económico de cada uno de ellos y de todos ellos en sus relaciones mutuas. Esto es fácil de ver en el caso de Nicaragua, ahogada económicamente por las exigencias de una guerra, que ciertamente le ha sido impuesta desde fuera, cosa que no ocurre en el caso de El Salvador. Pero El Salvador ofrece características especiales en Latinoamérica, hasta el punto de ocupar durante los últimos años, no obstante su pequeñez territorial y poblacional, el primer lugar en la ayuda oficial de Estados Unidos a los países latinoamericanos. Veamos las cifras de esta ayuda en el período 1979-1985 según el cuadro 9:

Cuadro 9

Ayuda militar y económica de E.U.A. a El Salvador

(miles de $)

Año Fiscal	Económica	Militar	Total	Económica como % del total
1979	9,590	-	9,590	100 %
1980	58,549	6,200	64,749	90 %
1981	116,349	30,492	146,841	79.2%
1982	185,616	86,500	272,116	68.2%
1983	261,867	81,300	343,167	76.3%
1984	223,077	196,550	419,627	53.1%
1979-1985	1,287,279	547,292	1,834,571	70.2%

FUENTE: Agencia Internacional para el desarrollo.

Los resultados de esta ayuda pueden considerarse favorables a corta distancia en algunos puntos de importancia para Estados Unidos: (a) El Salvador no ha caído en la esfera de dominación de los países socialistas: (b) ha consolidado en algún modo un modelo de democracia formal en que se han respetado los resultados de unas elecciones restringidas; (c) se ha ido mejorando en el respeto de los derechos humanos, aunque todavía el respeto de estos deja mucho que desear, así como en el conjunto de estructuras económicas, sociales y judiciales, que pudieran asegurar un mínimo cumplimiento aceptable de los mismos. Pero sigue dándose una situación económica cada vez peor y en ese sentido sigue sin resolverse la causa principal de la guerra que es la injusticia estructural, afectante a la mayor parte de la población, ni el efecto principal de la injusticia estructural que es la guerra misma, la cual lejos de disminuir se acrecienta. Y es que no puede pretenderse por un lado destruir la economía tanto por omisión de recursos del presupuesto nacional derivados a la guerra como por comisión de acciones destructivas que son una verdadera economía a la guerra y por otro lado construir un desarrollo económico, que sería una base más segura para terminar con los conflictos sociales y para construir una verdadera paz. Porque en el fondo lo que predomina en la ayuda norteamericana es la ayuda militar, pues aun la ayuda que se nomina como económica tiene no sólo un sentido último de contrainsurgencia sino que es en gran parte estrictamente militar, aunque presentada con apariencias de no militar. Aun en casos como el de Honduras,

donde no se da una guerra y donde se podría hacer una gran inversión a futuro para que un justo desarrollo económico impidiera a tiempo los males de una guerra civil o los daños de una represión continuada, puede apreciarse que el interés fundamental de la ayuda está en lo militar y no en el desarrollo económico. Tan sólo Guatemala y Costa Rica se librarían de esta ley fundamental de la ayuda norteamericana, pero ello es debido a que no se aprecia en esos dos países -por muy distintas razones- un peligro inmediato de levantamiento insurreccional o revolucionario.

Esta preferencia por la ayuda militar que hasta cierto punto no se aprecia en el cuadro anterior pero que ha sido denunciada por serios analistas para el caso de toda Centroamérica (Cohen, Rogers, 1986, 42-44), queda mucho más de manifiesto en este nuevo cuadro presentado por congresistas norteamericanos que hacen una lectura muy distinta de las cifras presentadas oficialmente (cuadro 10).

Cuadro 10

Distribución de la ayuda E.U.A. para El Salvador

(en miles de $)

Categoría	8_1	8_2	8_3	8_4	8_5	Total 5 años	%
Indirecta guerra	68,879	140,332	147,396	216,043	194,073	766,723	44.1
Directa guerra	35,000	82,000	81,300	196,550	128,250	523,100	30.0
Reformas/Desarrollo	19,102	28,079	61,349	72,738	85,725	266,993	15.4
Ayuda en alimentos	26,277	27,200	39,000	46,000	44,000	182,477	10.5
Total para cada año fiscal	149,258	277,611	329,045	531,331	452,048	1739,293	100.0

FUENTE: Informe "Ayuda Norteamericana a El Salvador: una evaluación del pasado, una propuesta para el futuro", presentado en febrero de 1985 ante el Grupo de Control de Armamento y política exterior del Congreso, por los representantes Jim Leach (republicano de IOWA) y George Miller (demócrata de California) y el senador Mark O. Hatfield (republicano por Oregon).

Insistimos en el caso específico de El Salvador porque es el que presenta la administración Reagan como modelo de varios puntos esenciales de su estrategia para Centroamérica y para otros países del Tercer Mundo. Una ingerencia muy dominante por parte de Estados Unidos puede (a) frenar el expansionismo soviético, (b) establecer un orden democrático y (c) superar la injus-

ticia estructural que causa descontento popular, en el que se nutren los movimientos revolucionarios. El medio fundamental para mantener esa ingerencia y conseguir esos resultados es la prestación de una ayuda económica y militar, que se hace indispensable para que sus aliados naturales o de conveniencia no sean derrotados en cada país por los movimientos revolucionarios. Sin embargo, las cifras demuestran que el objetivo (c) deja mucho que desear, que consiguientemente el objetivo (b) tiene más de apariencia y de provisionalidad que de realidad y consistencia, con lo que sólo quedan robustecidas las condiciones para lograr el objetivo (a), mediante planteamientos que no sólo son inmediatistas sino que por su misma dinámica llevan a impedir los otros dos objetivos, cuya consecución evitaría de raíz el expansionismo soviético y consiguientemente la necesidad de recurrir a la guerra y a la represión. Quedaría así de manifiesto una vez más la contradicción en la que se cae al querer resolver con la ayuda económica el problema estructural de la injusticia, fomentadora de la revolución, mientras que con la ayuda militar y su consiguiente militarización de los problemas se prolonga una guerra que lleva, junto con otras causas, el agravamiento del problema estructural de la injusticia. Una economía de guerra y una guerra a la economía, llevada a cabo no sólo por los revolucionarios sino también por la FA y por el gobierno, no traen consigo, respecto de las causas endógenas del conflicto, más que nuevas dificultades, si lo que se quiere es resolver fundamentalmente un problema social de subsistencia y no un problema militar de seguridad.

Una ligera mirada sobre la evolución de las remuneraciones en lo que toca a los salarios mínimos puede ilustrar más que este planteamiento que venimos haciendo. Las cifras se refieren a El Salvador, pero son aplicables a los demás países. Habría, sin embargo, que controlar el caso de Nicaragua donde también el problema militar de la defensa nacional obliga a posponer indefinidamente la solución de los efectos de una injusticia estructural que viene de lejos (cuadro 11):

Cuadro 11

El Salvador: Evolución de las remuneraciones

	Indices (1970 = 100.0)					Tasas de crecimiento				
	1980	1981	1982	1983	1984	1980	1981	1982	1983	1984
Salarios mínimos nominales										
Trabajadores agropecuarios	231.1	231.1	231.1	231.1	231.1	10.2	-	-	-	-
Recolección de cosechas										
Café	529.7	527.7	529.7	529.7	529.7	36.2				
Caña de azúcar	425.8	444.4	444.4	444.4	444.4	86.8	4.4	-	-	-
Algodón	377.8	388.9	388.9	388.9	388.9	47.8	2.9	-	-	-
Industrias agrícolas de temporada										
Beneficio de Café	560.0	560.0	560.0	560.0	560.0	82.5	-	-	-	-
Ingenios Azucareros	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	24.2	-	-	-	-
Beneficio de algodón	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	20.7	-	-	-	-
Otras actividades en San Salvador										
Industrias y servicios	322.8	343.8	343.8	343.8	385.3	34.0	6.5	-	-	12.1
Comercio	295.1	314.3	314.3	314.3	352.3	27.5	6.5	-	-	12.1
Salarios mínimos reales.										
Trabajadores agropecuarios	82.9	72.2	64.6	64.6	57.9	-6.1	-12.9	-10.5	-11.7	-10.4
Recolección de cosechas										
Café	190.0	165.6	148.3	148.3	132.8	16.1	-12.8	-10.5	-11.7	-10.5
Caña de azúcar	152.7	138.9	124.4	124.4	111.3	59.1	-9.0	-10.5	-11.7	-10.5
Algodón	135.5	121.6	108.9	108.9	97.5	25.9	-10.3	-10.5	-11.7	-10.5
Industrias agrícolas de temporada										
Beneficio de café	200.9	175.1	156.8	156.8	140.4	55.5	-12.8	-10.5	-11.7	-10.5
Ingenios azucareros	114.8	100.0	89.5	89.5	80.2	5.8	-12.9	-10.5	-11.7	-10.5
Beneficio de algodón	114.8	100.0	89.5	89.5	80.2	2.8	-12.9	-10.5	-11.7	-10.5
Otras actividades en San Salvador										
Industrias y servicios	115.8	107.5	96.2	96.2	96.5	14.2	- 7.2	-10.5	-11.7	0.3
Comercio	105.8	98.2	87.9	87.9	88.2	8.6	- 7.2	-10.5	-11.7	0.3

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Si partimos de que los salarios mínimos en 1970 eran insuficientes y los tomamos como punto de partida con índice 100, los trabajadores agropecuarios han bajado en su poder adquisitivo real de 82.9 en 1980 a 57.9 en 1984, quedando por encima del índice 100 sólo salarios temporales en relación con ciertas cosechas (café y azúcar) o con industrias agrícolas también de temporada. Esto sin olvidar que por debajo del salario mínimo está el enorme ejército de los sin trabajo alguno, número que va en aumento. Por todo lo cual ha de concluirse que el efecto de marginación de la mayor parte del pueblo centroamericano, con excepción del caso de Costa Rica en lo positivo y el de la población indígena de Guatemala en lo negativo, sigue su curso inexorable, porque no se han encontrado causas que realmente frenen el proceso, cuanto menos que lo enderecen hacia metas positivas. No sólo son más los que viven cada día en condiciones inhumanas en razón del crecimiento demográfico, el cual a su vez está condicionada por el subdesarrollo integral de la población, sino que además cada día esos más viven todavía peor de lo que vivían en 1970 y aun en cualquier año anterior. Cada año hay más pobres y cada año los pobres son más pobres.

¿No ha sido corregida esta marginación, resultado en gran parte de la explotación y de la represión por las reformas estructurales, sobre todo por la reforma agraria? Ciertamente las reformas a tiempo que hizo Costa Rica en un momento de especial conjunción de ideas socialistas y de ideas cristianas lograron paliar un tanto el problema de la marginación (véase cuadro 3). Por su parte Honduras y Guatemala se resisten a iniciar el proceso de reformas, que iniciado a tiempo en el caso de Guatemala (Arbenz) y de El Salvador (1973, 1976 y 1979) tal vez hubiera llevado la historia de Centroamérica por otros derroteros más justos. Son Nicaragua y El Salvador los países que en los últimos años habrían entrado por el proceso de reformas estructurales tratando con ellas de superar el fenómeno de la marginación y de la pobreza extrema que oprimía a grandes masas campesinas. Pero por múltiples razones no se puede concluir que las reformas en Nicaragua y en El Salvador hayan podido conseguir los efectos apetecidos: la situación de guerra en que se encuentran ambos países, la poca preparación de toda índole a la hora de ponerlas en marcha, la mala situación de los mercados internacionales y el encarecimiento de los insumos, el gran problema de la deuda agraria en el caso concreto de El Salvador, etc., hacen que la efectividad social de

las reformas deje mucho que desear. Los casos de Nicaragua y de El Salvador son en este punto distintos, sobre todo por lo que toca a la superación de la marginación. No obstante, incluso en El Salvador puede decirse que un número considerable de campesinos, que ha de contarse por varios cientos de miles, ha cambiado su status social, no tanto en términos económicos, sino en términos sociales de propiedad cooperativa o no y en términos políticos de participación. Las vacilaciones de la UPD, su mayor radicalización y presencia en la arena política y social de El Salvador puede ser una de tantas muestras que podrían presentarse, (Thome, 1984, Olano, Orellana 1985, Solórzano 1986).

Veamos un poco en detalle, aunque sucintamente, lo que ha supuesto la reforma agraria en el cambio de estructura de la propiedad de la tierra en El Salvador (Montes, 1986).

Cuadro 11

Extensión (en Hectáreas) de las fases de la R.A. en El Salvador

	Tierra cultivada en El Salvador	Hectáreas afectadas	Derecho de reserva (1)	Derecho de reserva (2)	Hectáreas aplicables (1)	%	(2)	%
FASE I		223,217	25,750	50,470	197,467	13.7	172,747	11.8
FASE III		-.-	-.-	-.-	97,205	6.64	97,205	6.64
					294.672	20.34	269,952	18.44
FASE II (no aplicada)								
(1) Original.		345,764	219,375	-.-	126,389	8.63	-.-	-.-
(2) Const. 83		192,250	-.-	156,800	-.-	-.-	35,450	2.4

NOTA: Según el artículo 105 de la Constitución, para el 6 de diciembre de 1986 se concluirá la Fase II; pero si los propietarios se han desprendido del excedente, ya no habría Fase II.

FUENTES: Thome, 1984: 238. PERA, 1985: 2, 107, 109, 110, 159.

Aunque la Fase II no ha llegado al término que la Constitución exige para su cumplimiento, es presumible que los propietarios ya han ido desprendiéndose de buena parte de sus tierras afectadas por el Art. 105 de la Constitución. En su conjunto y desde 1980 a 1986 tendríamos que el 20.84% de la tierra cultivable ha sido traspasada de antiguos grandes o medianos propietarios a quienes trabajaban la tierra. Aunque no se trata de las mejores tierras por

el derecho de reserva que tienen los propietarios, por el cual se quedan con las partes elegidas por ellos dentro de los límites máximos permitidos, se trata relativamente de un cambio importante en la tenencia de la tierra, aunque no necesariamente de debilitamiento del gran capital, pues los empresarios agrícolas han podido reinvertir lo recibido por las expropiaciones.

Pero quizá lo más importante estriba en el número de miembros propietarios que han surgido por la nueva redistribución de la tierra, tal como se aprecia en el cuadro 13:

Cuadro 13

Beneficiarios de la Reforma Agraria

	Población rural (1982)	PEA rural	directos	% PEA	indirectos	% PR
FASE I		65,134	27,456	42.12	145,411	5.04
FASE III		180.682	63,668	16.67	382,008	13.24
TOTAL	2,885,347 (100%)	245,816	91,104	37.06	527,419	18.3

FUENTES: Thome, 1984: 238. PERA, 1985: 2, 107, 109, 110, 159.

Los beneficiarios directos de la Reforma Agraria supondrían en relación con la población rural económicamente activa hasta ahora -esto es no contabilizada la Fase II, que obliga a desprender el excedente comprendido entre 245 Has. y 500, pues el excedente de 500 ya ha sido repartido en la Fase I- el 37.06%. Si tomamos en cuenta que la población rural en 1982 se calculaba en 2,885,347 y que los beneficiarios indirectos de la Reforma Agraria son 527,419, tendríamos que un 18.27% de la población rural ha sido favorecida por los cambios. Esto es política y socialmente de gran importancia, aunque no lo sea tanto económicamente no sólo por la gran deuda agraria que han de enfrentar los campesinos a quienes se les ha vendido las tierras sino también por los pocos beneficios que sacan de ellas, como lo muestra el cuadro 14, puramente indicativo pues se trata tan sólo de una encuesta sobre diez cooperativas:

Cuadro 14

El Salvador: Ingresos y Gastos anuales promedios de los socios encuestados en colones 1984

Cooperativa No.	Ingresos/ Ventas 1/ (1)	Valor de la Retención 2/ (2)	Valor de la Producc. (3)= (1+2)	Gastos de Produc. 3/ (4)	Ingreso neto/Produc. (5) = (3-4)	Ingreso por Jornales (6)	Ingreso Disponible (7)= (5+6)
1	1,498.6	544.5	2,043.1	582.3	1,460.9	63.8	1,524.7
2	592.5	405.5	998.0	292.5	705.5	1,817.1	2,522.6
3	937.6	1,358.9	2,296.5	700.6	1,595.9	1,205.4	2,801.3
4	1,924.3	2,128.0	4,052.3	640.4	3,411.9	643.7	4,055.6
5	3,384.6	2,055.2	5,389.8	533.7	4,856.1	985.4	5,841.5
6	379.8	1,238.1	1,617.9	271.2	1,346.7	2,003.6	3,350.3
7	155.6	216.0	371.6	207.0	164.6	1,479.2	1,643.8
8	261.7	348.8	610.5	73.5	537.0	2,466.3	3,003.3
9	690.0	306.0	996.0	412.5	583.5	3,146.4	3,729.9
10	2,374.0	2,046.6	4,420.6	1,170.0	3,250.6	145.0	3,395.6
TOTAL	12,198.7	10,597.6	22,796.3	4,883.7	17,912.7	13,955.9	31,868.6
PROM. ANUAL	2,219.9	1,059.8	2,279.6	488.4	1,791.3	1,395.6	3,186.9
PROM. DIARIO	3.39	2.94	6.33	1.36	4.97	3.88	8.85

1/ Granos básicos, cerdos, aves, huevos, sandía y melón.
2/ Granos básicos para autoconsumo.
3/ Los gastos o costos de producción por asociado, serían igual a la sumatoria de la renta de la tierra (que pagan algunos socios), del costo de oportunidad del agricultor, del salario pagado a los mozos empleados (por algunos socios), del costo de desgaste de aperos utilizados en la producción, del alquiler de rastra (por algunos socios), del costo de transporte de los productos hacia el mercado (en algunos casos), y del costo de los insumos. Sin embargo, para efectos de este trabajo, los costos se calculan sumando el salario pagado a mozos, empleados, más el valor de los insumos por la dificultad que representó la medición de las demás variables (p. ej. no existen coeficientes que permitan calcular el costo de oportunidad del agricultor, el costo de desgaste de aperos de labranza y del transporte de los productos para su distribución).

FUENTE: Pérez Rivas, Guillermo: "La Reforma Agraria como mecanismo de redistribución en El Salvador fases I y III. Tesis de grado para Licenciatura en Economía, 1986.

Más que las reformas, a pesar de su importancia formal y real lo que ha contribuido a orillar conjuntamente el poder político de la oligarquía en varios de los países es la mayor ingerencia de Estados Unidos por las exigencias de una guerra de contrainsurgencia de baja intesidad. Aun dejando de lado el ca

so de la revolución nicaragüense que es a una lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo oligárquico nacional puede verse en los otros países un cambio económico y/o político que hace del Estado no un servidor principal de los intereses oligárquicos sino una institución que en parte está al servicio de intereses extranjeros, los cuales conllevan el que se atienda menos a los intereses oligárquicos nacionales. Todo esto es muy relativo y tiene distinta gradación en diferentes países, pero como fenómeno incipiente no deja de tener gran interés (de Sebastián, 1985; Ellacuría, 1985). Examinemos este punto, primero, desde la perspectiva de una mayor participación relativa de los distintos estados en el PIB según el cuadro 15:

Cuadro 15

Gastos totales de los gobiernos centrales
(como porcentaje del PIB)

	1970	1980	1981	1982	1983	1984
1. Guatemala	9.9	14.2	16.0	13.1	11.5	10.3
2. El Salvador	12.8	18.6	20.8	20.0	22.2	20.3
3. Honduras	15.4	23.3	21.7	23.5	24.3	26.6
4. Nicaragua	11.4	29.6	32.3	36.4	55.3	55.6
5. Costa Rica	12.8	20.9	16.6	16.0	20.3	20.9

FUENTE: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1985, p. 429.

Es en Nicaragua, como cabía esperar, donde los porcentajes son más llamativos al pasar de un 11.9% a 55.6%. También en Honduras se ha llegado a un 26.6%. Costa Rica y El Salvador han pasado exactamente del mismo 12.8% en 1970 al 20.9% en el caso tico y al 20.3% en el salvadoreño. Lo que sigue siendo llamativo es el caso de Guatemala donde apenas ha habido variación del 9.9% en 1970 al 10.3% en 1984. Se necesitan estudios ulteriores para ver qué puede significar esto en términos económicos respecto de los distintos sectores sociales, pero el hecho mismo del robustecimiento económico del estado, aunque tal vez mucha parte de él es más burocrático que productivo, es algo de nueva significación, si consideramos los tiempos no tan antiguos en los que no existía Banco Central en los países o el Banco Central estaba en manos de la banca privada.

El segundo punto de vista sobre este mismo fenómeno del debilitamiento del poder estrictamente oligárquico es su menor presencia en el aparato político del estado. Suele darse por asentado que hasta hace poco el aparato del estado con su estamento militar propio estaba al servicio primario no sólo del orden establecido o de un capitalismo más o menos progresista sino que era manejado fundamentalmente por los intereses oligárquicos y en favor de esos intereses. Esta situación va cambiando políticamente poco a poco. La presencia en el poder de los partidos demócrata cristiano, en El Salvador primero y en Guatemala después, es algo que hasta hace pocos años sería impensable, ya que su misma posibilidad incipiente era impedida por la fuerza militar. Hoy es algo distinto no tanto por debilitamiento de la oligarquía en términos absolutos sino porque los planes estratégicos norteamericanos de contrainsurgencia han decidido dejar a un lado no los intereses del capitalismo, pero sí el papel de la oligarquía como gerente principal de esos intereses o como fuerza principal en la conducción de los asuntos del estado. Hoy se dan oposiciones más o menos secundarias entre los representantes y/o servidores de la oligarquía y el aparato más o menos populista de algunos gobiernos. No significa esto que se hayan puesto en un primer plano los intereses de las mayorías, lo cual no es así, sino tan sólo que se ha puesto en primer plano la seguridad de Estados Unidos, la cual por fin se ve no estar bien defendida por oligarquías y dictaduras.

Sin embargo no conviene hacerse muchas ilusiones porque la dependencia de Estados Unidos se ha hecho mucho mayor sin que haya habido una real desconcentración de la riqueza y por tanto sin que haya habido una desactivación definitiva de un poder económico dominante. Hay ciertamente una cierta consolidación relativamente autónoma -en términos de política interior- del poder del estado, pero esto no es suficiente. Basta con reflexionar sobre la tremenda debilidad del poder judicial tan fácilmente corrompido por el dinero y el temor, sobre la persistencia de los escuadrones de la muerte y sobre la tentación permanente de que los militares se tomen directa o indirectamente el poder, para darse cuenta de la fragilidad de lo adquirido.

No puede decirse que ni en Guatemala ni en Honduras haya cambiado mucho la estructura económica más o menos oligárquica, si es que nos atenemos a la

concentración del capital. Sin afirmar que esa sea una de las razones principales del subdesarrollo del área ni la causa única del conflicto social y de la lucha armada, es motivo de preocupación y de reflexión el conocer, por ejemplo, cómo era la concentración de capital en 1979, cuando en El Salvador se desatan acontecimientos nuevos con pretensión de retrasar el diluvio.

En 1979 sesenta grupos familiares controlaban el 50% o más de las acciones del 57.2% de todas las empresas privadas organizadas en forma de sociedades, lo cual permitía a ese pequeño grupo de familias controlar el 84.5% del capital accionario. Los segmentos e individuos no pertenecientes a esos grupos familiares controlaban sólo el 42.8% de las empresas y el 15.5% del accionario (Sevilla, 1984). Si llamamos oligárquicos al primer grupo y no oligárquicos, aunque capitalistas, al segundo tenemos el siguiente cuadro:

Cuadro 16
Sociedades anónimas clasificadas por grupos familiares en control
1979

	No. de Sociedades	Sociedades %	Capital Social	Capital %
Familias oligárquicas	1.716	57.2	¢ 1,872.5	84.5
Familias no oligárquicas	1.284	42.8	" 343.8	15.5
Total	3.000	100.0	¢ 2.216.3	100.0

FUENTE: Ministerio de Hacienda. Estadísticas del impuesto de vialidad, DGCD, San Salvador, 1980. Documentos de circulación restringida.

Lo mismo se comprueba por la estructura de propiedad del capital en la economía salvadoreña de 1979, donde 76 propietarios, esto es tan sólo el 0.2%, lo son del 15.7% del capital total, mientras que 12.652 propietarios, que constituyen el 37.2% del total, no poseen más que el 4.53% del capital. El argumento es tanto más significativo cuanto que los grandes empresarios suelen hacer propaganda del gran número de empresas y empresarios que existen en El Salvador, ocultando tras esa afirmación equívoca la realidad que los hechos. No sólo no se respeta al asalariado, cuya participación en el ingreso ya hemos visto cuán baja es, sino que los pequeños empresarios pelean una batalla desigual con los pocos grandes propietarios que controlan la mayor parte del capital (cuadro 17).

Cuadro 17

Estructura de propiedad del capital en la economía salvadoreña

Tramos		Propietarios		Capital	
		Número	%	Monto en Millones	%
Menos de ¢50,000		12,652	37.2	¢ 451.7	4.53
¢ 50,000	100,000	8,420	24.8	595.6	6.0
100,000	200,000	5,179	15.2	729.1	7.3
200,000	300,000	2,144	6.3	524.8	5.3
300,000	400,000	1,155	3.4	402.6	4.0
400,000	500,000	862	2.5	384.5	3.8
500,000	600,000	574	1.7	314.1	3.1
600,000	700,000	438	1.3	283.3	2.8
700,000	800,000	308	0.9	230.1	2.3
800,000	900,000	264	0.8	223.2	2.2
900,000	1,000,000	216	0.6	205.3	2.0
1,000,000	5,000,000	1,517	4.5	2,991.1	30.0
5,000,000	10,000,000	160	0.5	1,067.2	10.7
Más de ¢10,000,000		76	0.2	1,562.5	15.7
Total		33,965	100.0	9,965.6	100.0

FUENTE: Ministerio de Hacienda, Estadísticas del Impuesto de Vialidad, DGCD, San Salvador, 1980. Documentos de circulación restringida.

No puede decirse que esta situación haya cambiado sustancialmente en términos económicos, no obstante la terrible convulsión que ha vivido El Salvador y sigue viviendo por más de siete años. Ni tampoco han cambiado las respectivas situaciones de Guatemala y de Honduras. De ahí que se pueda concluir que nada está resuelto definitivamente ni siquiera decisivamente, en el terreno del conflicto social de hondas raíces económicas o en el terreno del conflicto armado. Y es que el plan estratégico norteamericano a corto plazo tiene intrínsecas contradicciones fundamentales de las que puede sacar a corto plazo grandes ventajas para su problema de seguridad y para la imagen de la administración Reagan, pero de las que los centroamericanos no podemos sacar la solución de nuestros problemas (Ellacuría, 1985).

En el caso de Nicaragua, la administración Reagan no permite que se verifique la justeza o desajuste de un proyecto político y económico, que ha quebrado sin duda el poder oligárquicos y ha sometido a los intereses generales los intereses de las empresas capitalistas privadas. La administración Reagan ha sometido a Nicaragua a tremendas condiciones que hacen imposible probar que el modelo nicaragüense es bueno para un desarrollo económico dirigido principalmente en beneficio de las mayorías populares y para una redistribución del ingreso que equilibre el poder social y finalmente el poder político. Mediante una permanente presión militar y económica se le obliga a Nicaragua a unas cargas económicas, que no pueden menos de repercutir sobre la mayoría de la población a la que se pretende descontentar para que el gobierno sandinista se vea forzado a tomar medidas represivas. No sólo la administración Reagan trata de impedir toda ayuda económica al pueblo nicaragüense sino que positivamente trata de destruir la economía de Nicaragua con métodos que contradicen el derecho internacional y, por tanto, uno de los pilares fundamentales de todo comportamiento democrático. La administración Reagan pretende con medios absolutamente antidemocráticos conseguir una Nicaragua democrática. Una flagrante contradicción.

En el caso de El Salvador favorece importantes reformas estructurales y presta algunos recursos para que las mayorías populares empiecen a salir de su postración económica y política, pero por otro lado profundiza la guerra y pone graves obstáculos a una salida negociada, con lo que sigue deteriorándose la situación económica de la mayor parte de la población, sometida a una economía de guerra y a una guerra a la economía. Se dirá que su plan de desarrollo económico y político no puede tener efecto por la guerra que a él hace el FMLN. Pero a ello debe responderse que el FMLN es ante todo un fenómeno interno del país, apenas impulsado con ayuda externa y cuya justificación reside en haber sido y hasta cierto punto seguir siendo la fuerza mayor contra los excesos oligárquicos y los excesos imperialistas. Por otro lado, es bastante claro que Estados Unidos dejaría de presionar en favor de los cambios y de ayudar económicamente de una manera sustancial, en cuanto dejara de haber peligro militar por parte del FMLN, porque el peligro político lo volvería a dejar en manos de la represión, como ocurrió en el período 1980-1982 especialmente.

En el caso de Honduras la mayor preocupación norteamericana es asegurar, a través de lo que se puede calificar como una invasión militar conjunta de los norteamericanos y de los contras, unas bases firmes para atacar a Nicaragua y defender al gobierno de El Salvador, sin tocar para nada la estructura económica y política del país, confiados en que la habitual somnolencia política de Honduras no venga a representar un peligro revolucionario, tal como se podía esperar de unas condiciones objetivas deplorables. Ciertamente esa invasión armada, que pone en entredicho la soberanía nacional y contradice la legislación internacional, es pagada con aportes económicos y militares de alguna importancia, de los que no se favorecen directamente las mayorías populares. La contradicción está aquí en que se quiere curar un mal primordialmente económico y político con remedios militares, remedios dirigidos más a atacar militarmente a Nicaragua que a fortalecer internamente a Honduras, incluso cuando se le promete mantener la Fuerza aérea más fuerte de Centroamérica, sin preocuparse seriamente por promover un desarrollo económico mientras la relativa falta de violencia lo haría posible a tiempo. Como pequeña muestra de esta falta de atención a las necesidades básicas de la población está el hecho reciente de pretender rebajar el rubro de salud en el presupuesto nacional de este año a 97 millones de dólares, cundo el año pasado fue de 130.

Guatemala presenta menos y menores evidencias de la presencia norteamericana en cuanto administración pública por lado y lado, pero, además de estar sometida a las generalizadas presiones del FMI, no logra por las presiones del capital privado con alta participación norteamericana, llevar una política que redunde en beneficio de las mayorías populares en virtud de un sostenido desarrollo económico y de una justa distribución. Los nuevos intentos de reiniciar la problemática de la reforma agraria han supuesto grandísimas resistencias y amenazas. A pesar de contar con un gobierno civil demócrata-cristiano, que supone formalmente un grave avance sobre los anteriores gobiernos militares, no está en capacidad de hacer frente a las presiones del capital y de la extrema derecha. No puede decirse que haya empezado a debilitarse el sector oligárquico, al que se ha adherido la casta militar que ha detentado el poder en los últimos años. Ni en la democratización del capital, ni en la democratización del poder social, ni si-

quiera en la democratización política se ha podido hacer todavía algo de peso.

El único país del área centroamericana donde hay un desarrollo aceptable -se estima que en este momento el ingreso per capita es de 1.280 dólares, aunque antes de la crisis económica el Banco Mundial le atribuía 2.000 dólares per capita-es Costa Rica. Sin embargo, no todo es de color de rosa en lo que malamente se ha llamado la Suiza de Centroamérica. Ya dijimos que en los rubros de educación, asistencia social, relativa mejor distribución del ingreso y más pequeño porcentaje de pobreza y extrema pobreza, así como en el escaso peso de lo militar en el presupuesto y en la vida pública, hay logros de los que está muy lejos el resto de las naciones centroamericanas. Con todo, la enorme dependencia que en razón de la deuda externa tiene de Estados Unidos, le obliga a tomar posiciones que contradicen su tradicional espíritu tolerante y no antagónico, tal como el que ahora expresa con respecto a Nicaragua. De ello no son ajenos los sectores más derechistas del empresariado costarricense y unos medios de comunicación puestos a su servicio de modo total.

Todo ello se refleja en el caos de las relaciones mutuas, sobre todo económicas, entre los países centroamericanos. El Mercado Común Centroamericano fue uno de los mecanismos decisivos en el desarrollo de los sesenta. Cualesquiera fueran sus defectos económicos y políticos demostró efectividad a corto plazo; demostró que unas relaciones estrechas entre los distintos países centroamericanos podrían ser provechosas para todos ellos. El sistema empezó a entrar en crisis con la guerra entre El Salvador y Honduras, guerra disfrazada de pretextos nacionalistas, pero que ocultaba el profundo problema social y económico de Honduras y la necesidad de exportar una fuerza de trabajo a la que El Salvador no podía dar ocupación. Pero en el fondo de la ruptura, fuera de lo que puede haber de agotamiento del modelo, lo que se da es una enorme insolidaridad no directamente entre los pueblos sino entre intereses nacionalistas, que son en el fondo intereses empresariales y capitalistas. En el momento actual el problema se dificulta más por cuanto la administración Reagan no está dispuesta a aceptar un razonable pluralismo político en el área y quiere hacer una Centroamérica no sólo sin Nicaragua sino contra Nicaragua. Unicamente

Guatemala no se somete plenamente al esquema. Pero son también los sectores capitalistas de todas las naciones centroamericanas los que se ven amenazados por el modelo nicaragüense y ven por tanto con buenos ojos que, bajo el pretexto de democracia, se combata a la Nicaragua sandinista, a la espera de que triunfe un modelo político y económico, que no ponga en peligro no ya los intereses legítimos sino incluso los privilegios ancestrales del capital. Es aquí donde se introduce de lleno el plantamiento ideológico y estratégico que enfrenta los intereses del capitalismo con los intereses del socialismo, la pugna Este-Oeste, que sobredetermina la estructura primaria de las causas endógenas del conflicto centroamericano. Obviamente Centroamérica no es sólo el suelo nutricio donde más de veinte millones de hombres pretenden subsistir sino que es también una parte importante del escenario geopolítico que enfrenta a las superpotencias.

No obstante esto, lo que la población percibe como su problema fundamental no es el enfrentamiento ideológico entre capitalismo y socialismo, democracia burguesa o democracia social; ni es el enfrentamiento entre Este y Oeste; ni es siquiera el propio conflicto con sus secuelas de guerra, violencia, represión y violación de los derechos humanos. Lo que la población, por lo menos en El Salvador, siente como su problema, no importa el tremendo bombardeo ideológico y propagandístico al que es sometida, es la crisis económica con la que se enfrenta día a día, cada vez con menor esperanza de poder superarla, tal como se puede apreciar en recientísimas encuestas (Martín-Baró y Orellana, 1986 a) según los siguientes cuadros:

Cuadro 18

Opinión de la situación del país por Departamento
(En porcentajes)

Departamento	Situación del país					*Promedio escalar	
	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	X	DT
Ahuachapán	0.0	0.0	9.7	47.6	42.7	1.7	0.6
Cuscatlán	0.0	5.1	19.0	51.9	24.1	2.1	0.8
La Libertad	1.3	1.3	15.0	46.3	36.3	1.9	0.7
La Paz	0.0	3.7	11.0	46.3	39.0	1.8	0.8
San Miguel	0.0	0.0	11.2	26.5	62.2	1.5	0.7
San Salvador	0.0	1.1	17.0	39.9	42.0	1.8	0.8
Santa Ana	0.0	0.0	12.9	42.2	44.8	1.7	0.7
Sonsonate	2.2	1.1	14.3	42.9	39.6	1.8	0.9
T o d o s N	3	14	164	464	468	1.8	0.8
%	0.3	1.3	14.7	41.7	42.0		

FUENTE: (Martín-Baró y Orellana 1986, a.7).

* Promedio escalar.
Promedios y desviaciones típicas obtenidos al transformar las respuestas en una escala de 1 a 5 puntos, en la que 1 = muy mala y 5 = muy buena. Por tanto, cuanto más bajos los puntajes, más negativa es la opinión sobre la situación actual del país.

La muestra tomada entre sectores urbanos en ocho de las cabeceras departamentales, unas más sacudidas por la guerra que otras, indica a las claras una apreciación muy negativa de la situación: el 83.7% juzga que la situación es mala o muy mala, mientras que sólo el 1.6% la juzga buena o muy buena. Si a esto añadimos las expectativas de mejora o empeoramiento, puede valorarse el terrible pesimismo que se da en esa población, pesimismo del todo fundamentado en la realidad. Véase el cuadro 19:

Cuadro 19
Expectativa sobre el futuro de la situación del país por Departamento

(En porcentajes)

Futuro del país	Departamentos								Todos	
	Ahuachapán	Cuscatlán	La Libert.	La Paz	San Miguel	San Salv.	Sta. Ana	Sonsonate	N	%
Mejorará	50.7	23.7	34.2	39.7	47.2	32.4	40.4	26.6	339	36.5
Seguirá igual	11.6	28.9	14.0	14.7	11.2	20.8	15.6	22.3	162	17.4
Empeorará	37.7	47.4	51.8	45.6	41.6	46.8	44.0	51.1	428	46.1
No sabe	-	-	-	-	-	-	-	-	179	(16.0)

FUENTE: (Martín-Baró, Orellana, b, 22)

No es que el pueblo salvadoreño no haya sentido ciertas mejoras en el campo socio-político: ha bajado el nivel de la represión con lo cual ha disminuido el generalizado ambiente de terror vivido años atrás, ha sentido consiguientemente una mayor apertura política y una mayor libertad de expresión, el comportamiento habitual de los cuerpos de seguridad y de la FA ha mejorado, sobre todo en las zonas urbanas, etc. Entonces, ¿Por qué aparece este índice tan negativo en la apreciación de la situación? La respuesta no es difícil de encontrar si leemos otro cuadro sobre cuáles son los problemas que el pueblo salvdoreño 'siente' que más le afectan. Estos problemas son fundamentalmente de índole económica y, como venimos repitiendo en todo este trabajo, la situación económica viene empeorando, aun cuando pareciera en cada momento que no puede ser peor (Véase cuadro 20):

Cuadro 20

Problemas más graves del país por Departamento

(En porcentajes)*

Departamento	Problema más grave						
	Pobreza/ Injusticia	Falta de trabajo	Delinc./ Corrupción	Crisis económica	Guerra/ Violencia	Subversión guerrilla	Otros problemas
Ahuachapán	5.9	46.1	2.0	75.5	33.3	6.9	8.8
Cuscatlán	7.9	40.8	14.5	47.4	47.4	14.5	5.3
La Libertad	8.9	40.5	2.5	75.9	36.7	8.9	7.6
La Paz	3.7	50.0	7.3	72.0	37.8	12.2	4.9
San Miguel	8.2	27.8	2.1	64.9	61.9	14.4	6.2
San Salvador	10.3	33.6	7.9	66.6	42.0	9.6	13.1
Santa Ana	14.8	40.9	2.6	74.8	33.0	7.0	6.1
Sonsonate	5.5	31.9	5.5	75.8	31.9	14.3	7.7
T o d o s N	100	411	68	761	453	115	104
%	9.0	37.1	6.1	68.6	40.8	10.4	9.4

* Los porcentajes están calculados sobre el número de personas, es decir, qué porcentaje señaló un problema. Como cada individuo podía indicar dos problemas, los porcentajes totales se acercan al 200%.

FUENTE: Martín-Baró, Orellana, 1986, a, 9

Donde los encuestados se sienten más afectados es en los rubros 'falta de trabajo (37.1%) y el rubro más englobante de 'crisis económica' (68.6%), que, sin embargo, no son identificados con el rubro más interpretativo y hasta cierto punto ideológico de 'pobreza/injusticia'. Ciertamente la 'guerra/violencia' se presenta, como no podía ser menos, sobre todo en uno de los departamentos más afectados por ella, San Miguel, (61.9%) con un alto porcentaje (40.8%), que añadido al rubro relacionado con ella 'subversión de la guerrilla' (10.4%) sitúa el porcentaje en un 51.2% frente al acumulado de 105.7% que da el problema más estrictamente económico. Aunque el dar dos respuestas complica un tanto la valoración de los porcentajes, sin embargo la duplicación que supone lo económico sobre la guerra es un índice bastante constante en las investigaciones de opinión pública llevadas a cabo por la Universidad Centroamericana 'José Simeón Cañas' y es del todo comprensible porque lo económico pesa mucho más directamente sobre la mayor parte de la población que la guerra. Sería una constata-

ción indirecta no tanto de que lo económico es la causa fundamental del descontento y de la violencia, sino de que es apreciado como el problema principal de la mayor parte de la población, aun en el caso de un país tan dura y largamente afectado por la guerra, la represión y la violación de los derechos humanos.

La insistencia sobre el peso de lo económico en la causalidad endógena del conflicto centroamericano no debe desmerecer la incidencia de otros dos factores fundamentales: el político y el ideológico.

Aunque en otras ponencias se traten estos asuntos quisiera subrayar aquellos aspectos que los constituyen formalmente en factores endógenos de la crisis. Durante años, por no decir siempre, con la excepción del caso de Costa Rica, los pueblos centroamericanos han vivido en un regimen político disfrazado con ropajes de democracia, pero que no tenía nada de democrático. Estos regímenes, cuando se ha despertado la protesta sindical, la revuelta universitaria o la rebelión popular se han mostrado terriblemente represivos. El haber acudido -casos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador- a soluciones armadas de ·inte revolucionario marxista se explica en gran parte porque no había otro camino para terminar a una con la represión y la opresión, con la violencia institucionalizada y la injusticia estructural. El conflicto centroamericano debe mucho a este binomio opresión económica y represión gubernamental, pues aun siendo aquella el fundamental, el 'principal', ha sido ésta la que en buena parte ha encendido la chispa revolucionaria.

Por otro lado está el factor ideológico. Dirigentes y masas han sido fuertemente conmovidos por dos movimientos ideológicos de mucha incidencia en el área, sobre todo entre intelectuales, sindicalistas, campesinos y comunidades de base. Por una parte el fenómeno del marxismo presente de muy distintas formas en las dirigencias revolucionarias de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que ha servido de marco ideológico-ético y también de Manual de Organización. Por otra parte está el fenómeno de la teología de la liberación que se hace muy presente, sobre todo en El Salvador, a partir de 1968, tras las formulaciones de Medellín; este movimiento de la

teología de la liberación ha afectado poco a las dirigencias revolucionarias, pero mucho a sus bases populares, sin duda más alentadas por su fe revitalizada e historizada que por los análisis pseudo-científicos con los que eran bombardeados. La relación marxismo-cristianismo plantea teórica y prácticamente problemas singulares en el área centroamericana, pero no hay duda de que han constituido un factor ideológico importante en la denuncia y en el combate contra las formas habituales de opresión y represión (Ellacuría, 1986).

Podríamos formular todos estos datos y análisis en forma sintética y conclusiva en las siguientes hipótesis explicativas del conjunto de factores endógenos, generadores parciales, pero muy importantes, del conflicto social y de la lucha armada que se abaten sobre Centroamérica.

1. Toda la región centroamericana, aunque en distinto grado, ha vivido ancestralmente y sigue viviendo en una situación económica que no le permite a la mayor parte de la población satisfacer sus necesidades básicas. Aquí radica el principio básico de todos los problemas sin cuya solución los conflictos rebrotarán incesantemente.

2. Esta situación no es sin más resultado de un subdesarrollo neutro, debido a la incapacidad natural o histórica de los pobladores de Centroamérica. Sin desconocer el peso de factores históricos y aún biológicos y culturales, gran parte del subdesarrollo se debe al régimen económico imperante durante decenios en la zona, enlazado a su vez con el orden económico internacional, que, sin haber podido superar la pobreza antes bien profundizándola y extendiéndola, ha originado la creación de una mínima franja de la población que se ha aprovechado de manera absolutamente desigual de la distribución del ingreso y de la propiedad del capital en todas sus manifestaciones.

3. Esta injusta situación económica sólo ha podido ser mantenida mediante el establecimiento de una estructuración político/militar, que no ha estado al servicio de las mayorías oprimidas sino de las minorías privilegiadas. Aunque todos los países han contado desde muy temprano con constituciones políticas más o menos aceptables desde el punto de vista bur-

gués occidental y no han faltado procesos electorales, no puede decirse que se haya vivido una democracia con requisitos mínimos para ser tenida como tal con alguna excepción como la de Costa Rica o algunos breves períodos en otros países. El régimen político no ha sido por lo general democrático sino oligárquico, cuando no, además, militarista. El militarismo, sobre todo en nuestro siglo, no surge tanto de la necesidad de defenderse unos países de otros, sino de principios de seguridad interna, entendida ésta como necesidad de impedir cualquier levantamiento o simple protesta popular que pusiera en peligro el status quo. La incapacidad y corrupción tanto de los gobernantes como de los poderes legislativo, judicial y militar han sido notas determinantes de los regímenes centroamericanos.

4. A lo largo de la historia, tanto en el período colonial como el independiente, ha habido conatos de protesta y cambio de una situación que se hacía insostenible objetivamente, sea para determinados grupos sociales sea para el conjunto de la población. Sin embargo, la organización de la protesta en movimientos estrictamente revolucionarios que eligen la vía armada para lograr el cambio social, ha necesitado un proceso de concientización y politización primero de ciertos grupos más o menos elitistas y luego de gran parte de la población. Tres líneas pueden señalarse como más significativas en este proceso: a) una protesta contra formas dictatoriales y absolutistas de gobierno que surge de un sentimiento y aun de una ideología que podría denominarse liberal y democratizadora; b) una línea marxista que interpreta la historia y la situación presente desde un marco teórico y práctico de lucha de clases; c) una línea cristiana, primero moderadamente reformista a través de la doctrina social de la Iglesia y después más revolucionaria a través de la teología de la liberación, que concientiza a las masas sobre su vocación a la justicia y a la libertad a través de una estricta lucha de liberación. Se da entonces una gran polarización ideológica, fruto en parte y reflejo de los intereses objetivos encontrados, pero a su vez raiz fomentadora del conflicto como modo efectivo de resolver una situación injusta.

5. Se desata con todo ello una espiral de violencia. La violencia originaria es la injusticia estructural que mantiene violentamente -a través de estructuras económicas, sociales, políticas y culturales- a la mayor parte de la población en situación de permanente violación de sus derechos humanos. A esta violencia, una vez cerrados los demás caminos, responde el pueblo organizado, que toma las armas y empuña la revolución para superar la injusticia estructural que le oprime y la violencia que le domina. A su vez esta violencia revolucionaria tiende a ser contrarrestada por la violencia represiva del Estado y aun de las clases dominantes, no solo legalmente sino con prácticas estrictamente terroristas. En su última fase este conjunto de violencias entrelazadas da paso a un estado de guerra civil, que se refleja tanto en el enfrentamiento de dos poderes con dos ejércitos como en la polarización de los sectores. Cuando la situación se prolonga y se ve que la violencia revolucionaria y la represiva, así como la violencia de la guerra no alcanzan ni a conservar el status quo ni menos a resolver la violencia institucional, surge no sólo racionalmente sino en el ánimo de una gran parte de la población la necesidad del diálogo y de la negociación como camino para la paz.

6. La militarización de la violencia acentúa una de las causas del conflicto y uno de los impedimentos de la paz: el militarismo que impide la democratización. El excesivo peso del estamento militar en la vida política de los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica, hace que se convierta ese estamento, de por sí violento, poco capacitado y muy corrupto, en pieza clave del edificio nacional, que no sólo desvía para sí recursos más necesarios en otros campos sino que, amparado en la fuerza de las armas, desequilibra el peso político de la voluntad popular.

7. Esta situación de desequilibrio fundamental en lo social y de equilibrio dinámico en el enfrentamiento de las partes en conflicto deja a los países sin capacidad de autodeterminación y de defensa de su soberanía, la cual es asumida por quien desde fuera logra sostener a la parte que ocupa aparentemente el poder del estado. La voluntad popular queda así sustraida dos veces: una por quien ha asumido la alianza con el poder mi-

litar y otra por quien sostiene el aparato militar y económico, que se derrumbaría sin su ayuda. Todo ello se pretende encubrir con apariencias de democracia formal desmentidas una y otra vez por la cruda realidad de los hechos.

8. Esta lógica de la violencia no puede romperse más que atacando conjuntamente y a la vez la raíz profunda y el principio del proceso que no es otro que el subdesarrollo económico y la violencia/injusticia estructural/institucional, lo cual requiere el acuerdo de las partes en conflicto no sólo para terminar con la violencia armada y/o terrorista sino para lograr un cierto consenso social y político sobre el camino para salir del subdesarrollo. Asimismo se requiere una enorme ayuda financiera internacional de quienes dicen estar interesados en la seguridad y en el bienestar de la región y una gran presión internacional para que se respete en todo la voluntad popular por encima de las instancias militaristas, de las imposiciones empresariales y de las dictaduras de partido. Se precisa también una gran educación política pues los simplismos ideológicos-emocionales enturbian enormemente la posibilidad misma de un pluralismo político e incluso de una mínima apertura mental a las exigencias mínimas de la realidad.

9. La peculiaridad de la zona, el momento de su desarrollo económico y social, hace que no puedan ser impuestas en ella soluciones estereotipadas en lo económico y en lo político. No puede darse por asentado que la solución capitalista o la solución socialista sea la mejor en su aplicación a la peculiaridad de la zona; ni puede darse por asentado cuáles son las características esenciales de un proceso democrático para los países centroamericanos. Probablemente las grandes potencias debieran aceptar que el distinto grado de desarrollo social y político de los distintos países del área están exigiendo de momento un fuerte pluralismo, que diferencia unos de otros, lo cual no obsta para que entre ellos se den las mejores relaciones de respeto y las mejores relaciones de colaboración económica.

B I B L I O G R A F I A

1.- Cohen, J. y Rogers, J. Inequity and Intervention, The federal budget and Central America, Boston 1986.

2.- De Sebastián, L. "Una crítica a los aspectos económicos del Informe Kissinger". Revista Estudios Centroamericanos (ECA), Octubre-Noviembre, 1984, pp. 789-802.

3.- De Sebastián, L., "El modelo económico centroamericano: equilibrio inestable y represión", en Excma. Diputación Provincial de Córdoba (España), Centroamérica en la encrucijada internacional de nuestro tiempo, Córdoba 1985, pp. 29-42.

4.- Ehrenreich, B. "Is the middle dess doomed?" The New York Times Magazine, Sept. 7, 1986, sect. 6 pp. 44ss.

5.- Ellacuría, I. "Perspectiva política de la situación centroamericana", Estudios Centroamericanos (ECA), Septiembre-Octubre, 1985. pp.625-637.

6.- Ellacuría, I. "Respuestas políticas a los desafíos sociales centroamericanos" en Excma. Diputación Provincial de Córdoba (España), Centroamérica en la encrucijada internacional de nuestro tiempo, Córdoba 1985, pp. 109-117.

7.- Ellacuría, I., "Theologie der Befreing und Marxisms", Orientierung. 15 Jun 1986, pp. 127-131.

8.- Feinberg, E. R. "La comisión Kissinger: una crítica", Revista de la integración y el desarrollo de Centroamérica", No. 33, 1986, pp. 65-85 (tomado de World Development, vol. 12, No. 8, Agosto 84, pp. 867-876).

9.- Feinberg, E. R. y Pastor, A. R. "Lejos de ser imposible: un programa económico para la Centroamérica de la post-guerra en Revista de la integración y el desarrollo de Centroamérica, No. 33, Febr. 1986, pp. 3-34 (tomado de Central America: Anatomy of Conflict ed. por R. S. Leiken).

10.- Holland, St. y Anderson D. Kissinger's Kingdom. Nottingham 1984.

11.- Kissinger, H., Informe de la Comisión Bipartita sobre Centroamérica en Revista de la integración y el desarrollo de Centroamérica, No.33 Febr. 1986, pp. 89-292.

12.- Martín-Baró, I. y Orellana, A., "El pueblo salvadoreño ante el diálogo. Una encuesta de opinión pública", Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 4 sept. 1986.

13.- Martín Baró, I. y Orellana, A. a, "El pueblo salvadoreño ante el diálogo. Una encuesta de opinión pública (segundo sondeo)". Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 27 sept. 1986.

14.- Montes, S. "El Salvador: la tierra epicentro de la crisis". Boletín de Ciencias Económicas y Sociales. Julio-Agosto 1986 (en prensa)

15.- Olano G. y Orellana M., "Consideraciones sobre la situación financiera de las cooperativas de la fase I de la Reforma Agraria" en Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, Marzo-Abril 1985 pp. 77-94.

16.- Rosenthal, Gert, "Principales rasgos de la evolución de las economías centroamericanas desde la posguerra (1945-1978)" en CECADE CIDE. Centroamérica: crisis y política internacional. México 1982, pp. 19-38.

17.- Sevilla, M. "Visión global sobre la concentración económica en El Salvador". Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, Mayo-Junio 1984, pp. 155-190.

18.- Solórzano, J. J. "Análisis e interpretación de la deuda agraria y el crédito al sector reformado". Boletín de Ciencias Económicas y Sociales. En. Febr. 1986, pp. 51-58.

19.- Staga, A. "La crisis en Centroamérica: Problemas económicos, perspectivas y propuestas", en Revista de la Integración y el Desarrollo de Centroamérica. No. 33, 1986 pp. 35-64 (tomado de Foreign Policy and Defense Review, Vol. 5, No. 1).

20.- Thome, R. J. "Reforma Agraria en El Salvador", Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, Jul.-Ag. 1984, pp. 235-253.

IPALMO
Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi
dell'Africa, America Latina e Medio Oriente
Via del Tritone 62-B - 00187 Roma - tel. 6792734 - 6792311 - 6792321

CONFERENZA INTERNAZIONALE

AMERICA CENTRALE: CRISI O PACIFICAZIONE

(Roma, 14-16 ottobre 1986)

Auletta dei Gruppi parlamentari - Camera dei Deputati

Sessione: sicurezza-negoziato

Relazione: Olga Pellicer, ambasciatore del Messico a Atene

REFLEXIONES SOBRE LA ACCION DEL GRUPO CONTADORA

Olga Pellicer

Agradezco al IPALMO haberme invitado a participar en este seminario. Se trata de una buena ocasión para profundizar el diálogo entre Europa y América Latina sobre los problemas más urgentes que afectan la paz y el desarrollo económico latinoamericano. Asimismo, desde un plano personal, es una ocasión para reencontrar viejos amigos, profesores de aquí y de allá, con quienes por razones de mi trabajo reciente no he podido mantener la cercanía que hubiese deseado.

El tema que me propongo desarrollar es el de la contribución del Grupo Contadora a la búsqueda de una alternativa para el restablecimiento de la paz y seguridad en Centroamérica. Primeramente haré un breve recuento de los trabajos del Grupo, en segundo lugar señalaré algunos de los obstáculos principales que están entorpeciendo el éxito de sus propuestas y finalmente haré algunas reflexiones sobre las alternativas que se abren para el futuro en caso de anularse el esfuerzo diplomático y negociador encabezado por dicho Grupo.

I

Los Trabajos de Contadora.

La acción del Grupo Contadora ha tenido como transfondo,

./.

de una parte la profundización de la crisis centroamericana y, de la otra, la imposición de tendencias en el orden internacional que han contribuído a dificultar la acción de los llamados poderes regionales.

No es mi intención entrar en detalles sobre la crisis de Centroamérica; su análisis es el objetivo de todas las sesiones de este seminario. Sin embargo, cabe señalar rápidamente sus principales elementos, ya que estos han motivado la acción de Contadora y operan, en un interminable círculo vicioso, para retardar o hacer imposible el éxito de sus labores.

El primero de ellos es el proceso de polarización que, entre otras cosas, está provocando que la participación en enfrentamientos violentos sea el destino para numerosos miembros de las nuevas generaciones centroamericanas. Cierto que no puede hablarse formalmente de una guerra en Centroamérica; no hay declaración formal de beligerancia ni enfrentamientos entre los ejércitos de los diversos países. Sin embargo, sí puede afirmarse que se trata de una región en la que la palabra "bajas" y las noticias sobre los preparativos para azuzar y mantener un clima de violencia dominan el panorama. A quienes ha tocado ver de cerca el resultado de los enfrentamientos sorprende, dolorosamente, el entorno de pobreza en que ocurren y la presencia dominante de jóvenes

adolescentes, casi niños, que participan en ellos. Uno de los rasgos más inquietantes de la situación de Centroamérica es que grandes sectores de su juventud parezcan tener, como única opción, integrarse a una u otra de las facciones en lucha, cuyas diferencias son magnificadas por una verdadera guerra psicológica de propaganda e intolerancia.

El segundo elemento sobresaliente de la crisis centroamericana es el deterioro de la situación económica. Como se sabe, a partir de 1978 el ritmo de crecimiento de las economías centroamericanas disminuyó hasta llegar a tasas negativas en 1982. Los países del Istmo se enfrentan a una reducción en la demanda de los productos que tradicionalmente exportaban (lo que perdura a pesar de la recuperación en los países industrializados) persistente inflación, tasas de interés elevadas sobre sus deudas externas que absorben un alto porcentaje de sus ingresos por exportación y dificultades para acceder a financiamiento externo nuevo. Tal situación ocurre en un contexto en el que de un total de más de 20 millones de centroamericanos existentes en 1980, unos 13.2 millones (el 64%) vivían en estado de extrema pobreza entendida como la imposibilidad de cubrir con sus ingresos las necesidades básicas. Según viene señalando la CEPAL, a menos de tomar medidas urgentes para orientar por nuevos rumbos el desarrollo económico de la región, se puede anticipar un deterioro aún mayor de sus economías de consecuencias

./.

imprevisibles e inimaginables.

Por lo que toca a las tendencias en el ámbito internacional, cabe advertir que la existencia del Grupo Contadora ha coincidido con uno de los momentos más difíciles para la acción internacional de los países del tercer mundo. En efecto, el decenio de los ochentas se caracteriza por una erosión de condiciones políticas, institucionales y jurídicas que favorecieron, en otras épocas, la presión que éstos podían ejercer en el ámbito internacional. Citaré rápidamente, como señales de esa erosión, el debilitamiento del compromiso de los países avanzados con la cooperación internacional y el desarrollo, la crisis del multilateralismo y el debilitamiento de los principios de Derecho Internacional como "deber ser" de las relaciones entre los Estados.

En los años que siguieron al fin de la segunda guerra, aún en los momentos más álgidos de la guerra fría, había una corriente de opinión que destacaba siempre el valor de las instituciones internacionales y el Derecho como forma de encauzar, por vías pacíficas, las relaciones entre los Estados. Quienes se formaron en la disciplina de las relaciones internacionales es esa época no olvidan el gran número de reflexiones y propuestas a favor de un Orden Mundial, cuyo eje de sustentación serían las normas jurídicas internacionales. Se otorgaba entonces gran importancia a la trascendencia que

podían tener los órganos jurídicos de Naciones Unidas, tanto en la aplicación como en la creación del Derecho Internacional. Se reconocía, incluso, la aportación novedosa y positiva de los órganos políticos de la ONU en la creación de nuevas normas jurídicas internacionales.

Ese interés y respeto por el Derecho Internacional ha disminuído, al mismo tiempo que se ha ido imponiendo un discurso del poder, cuyas principales consideraciones son de carácter estratégico y cuyo único ideal parece ser asegurar zonas de influencia y superioridad tecnológica militar.

Con ese difícil transfondo adquiere relevancia el trabajo de Contadora; en parte porque se ha dirigido a ofrecer una alternativa a las nuevas generaciones centroamericanas que permita caminos distintos a la perniciosa integración a facciones enemigas; en parte porque es signo de la resistencia al embate de las hegemonías, de la voluntad de recuperar la validez de los grandes principios de la convivencia y de articular una propuesta latinoamericana para hacer frente a la compleja crisis económica, política y social que vive el Istmo.

a) Acta para la Paz.

Las acciones del Grupo han tenido diversas manifestaciones. La primera y la más conocida ha sido la elaboración de

./.

la llamada Acta para la Paz. Se trata de un documento que ofrece, al mismo tiempo, un diagnóstico de los problemas de la región y una visión integrada de la solución que podría dárseles. Como puede esperarse de un documento de conciliación, el Acta está basada en un sistema de concesiones recíprocas por medio de las cuales se pretende establecer un balance entre la seguridad en el área y la protección de los derechos legítimos de todos los Estados de la zona. Consta de unos 100 párrafos relativos a obligaciones específicas, cada uno con un valor en sí pero interrelacionado con los demás.

El preámbulo, que constituye el marco legal y conceptual dentro del cual los Estados de la región deben negociar sus diferencias, reconoce como tarea esencial el mantenimiento de la paz y la cooperación entre los Estados de la región, la creación de una atmósfera de confianza, y la necesidad del desarrollo económico y social. Afirma que ha ocurrido un grave deterioro en la estructura social y económica así como el desmoronamiento de la confianza política entre los Estados de la región. Subraya el peligro que representan los incidentes fronterizos y la presencia militar extranjera en todas sus formas, la cual, en vez de contribuir a la paz y al entendimiento, sólo incrementa la tensión y debilita las bases para la reconciliación y el diálogo en Centroamérica. Entre las principales soluciones posibles se refiere al desarrollo de

./.

sistemas democráticos, el establecimiento de condiciones políticas que favorezcan y garanticen la seguridad, y la adopción de acuerdos sobre seguridad y desarme.

Los compromisos sustantivos constituyen el corazón del Acta y son más de 70. En un primer apartado figuran los asuntos políticos, que van desde medidas de fomento a la confianza hasta la cooperación entre los órganos parlamentarios de los cinco países. En este capítulo, las cuestiones centrales se refieren al fortalecimiento de las instituciones y a los procedimientos democráticos que permitan una participación popular genuina en las decisiones gubernamentales, los espinosos temas relativos a la reconciliación nacional en aquellos países en donde se han producido profundas divisiones en la sociedad por causas internas, y el respeto a los derechos humanos en sus distintas categorías y vertientes.

La sección que corresponde a los asuntos de seguridad es la más complicada y la que ha merecido el mayor esfuerzo. Pueden distinguirse, en este capítulo dos grandes órdenes temáticos.

El primero tiene que ver con la presencia militar foránea, dado que en esa dimensión se localizan los principales núcleos de tensión, desconfianza e inseguridad. Su tratamiento no es sencillo ya que el Derecho Internacional no prohíbe

./.

una buena parte de las acciones y, por lo tanto, se requiere de la mejor voluntad y disposición negociadora de los Estados. En este rubro están comprendidas las maniobras o ejercicios militares; las bases, escuelas e instalaciones militares; los asesores militares.

En un segundo nivel aparecen temas fundamentales que no necesariamente suponen esa presencia internacional, aunque tampoco la descartan: las maniobras nacionales, la reducción y control de la carrera armamentista, el tráfico ilegal de armas. Por último, destacan otras cuestiones características de la crisis regional: acciones de desestabilización por fuerzas irregulares apoyadas desde el exterior; terrorismo, subversión y sabotaje. El mero listado reproduce, como un espejo, la situación que se vive en el área y en cada país, e ilustra con nitidez el propósito de alcanzar con precisión un régimen de concesiones recíprocas, sin perder de vista los otros capítulos, con el fin de asegurar el cabal equilibrio del documento.

El apartado económico y social es tan importante como cualquiera de los otros y corresponde a la premisa del Grupo de Contadora en el sentido de que en esas estructuras se localiza la razón última de la crisis actual. En esta sección se agrupan numerosos compromisos referentes al desarrollo económico y social, así como al estímulo de los procesos y

./.

mecanismos de integración subregional. El enfoque parte de los supuestos que los países en desarrollo han hecho a propósito del orden económico internacional pero también introduce medidas particulares, dirigidas al ámbito centroamericano, en el domino financiero y comercial. Luego de numerosos debates, en esta sección se ubicó el tema de los refugiados que simboliza en cierto grado la profundidad de las convulsiones del área.

Un tema fundamental, que fue objeto de consideración especial y de una solución creativa, se refiere a la contribución de terceros países. Se reconoce que los intereses y nexos, que no necesariamente derechos, de algunos países, son clave para la solución de los problemas. Al no existir posibilidades de que esos Estados participen directamente en la negociación, el planteamiento del Acta consiste en que a través de un Protocolo se asegure su concurso. Es verdad que muchos de los acuerdos que asumirían los países centroamericanos abarcan a aquéllos pero la hipótesis del Protocolo supone que haya la expresión evidente de un compromiso adicional de su parte. Otra premisa del Protocolo radica en que recoge el apoyo de la comunidad internacional y busca crear un espacio propio para que se canalice y exprese esta contribución.

Como todo instrumento internacional integral, el Acta dedica una sección a los procedimientos que harán posible el

./.

seguimiento y ejecución de los acuerdos. Para cada uno de los temas sustantivos, están diseñados una estructura y un funcionamiento específicos que permitirán que se cumpla lo pactado.

El Acta incluye una serie de disposiciones finales que le imprimen carácter obligatorio. Estas cláusulas contemplan asuntos de procedimiento importantes como la entrada en vigor, la vigencia y la duranción, y la solución de las controversias. Siendo aspectos aparentemente menores en relación con los compromisos sustantivos, la falta de acuerdo en cualquiera de ellos puede hacer nugatorio el esfuerzo diplomático en su conjunto.

Acompaña el Acta un anexo que contiene conceptos y terminología militar, de gran utilidad para interpretar el sentido de los compromisos contenidos en el capítulo de seguridad, lo que facilitará las tareas del mecanismo de verificación y control correspondiente.

b) Acciones paralelas a la elaboración del Acta para la Paz.

La acción del Grupo Contadora no se agota en la elaboración del Acta para la Paz. Igualmente importante ha sido su participación en otras formas de mediación, su presencia en el diálogo entre los países de la Comunidad Económica Europea y los países centroamericanos y finalmente, aunque no de me-

./.

nor importancia, su papel como aglutinador de un novedoso e interesante esfuerzo de coordinación política entre los países de América Latina.

Los países de Contadora han manifestado siempre la convicción de que debe alentarse la comunicación directa entre los Estados Unidos Y Nicaragua. El proceso de pacificación requiere de una red de negociaciones multilaterales, bilaterales o internas, válidas todas en la medida que contribuyan al gran objetivo de la pacificación y distensión. De allí que siempre se hayan alentado los encuentros entre representantes de los Gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua que tuvieron lugar en Manzanillo, México entre junio y diciembre de 1984. Al parecer, el intercambio de puntos de vista reflejó las profundas divergencias entre ambos. Desde la perspectiva nicaragüense, los planteamientos de la contraparte apuntaban una claudicación de su proyecto revolucionario y significaban una mengua de su soberanía nacional. En la óptica de la delegación estadounidense, los ofrecimientos sandinistas no daban garantía suficiente para su seguridad nacional. En todo caso, es claro que se trataba no de confirmar posiciones irreductibles sino de iniciar una auténtica negociación. Desgraciadamente, ésta no ocurrió en sentido estricto y el diálogo se interrumpió mediante un anuncio unilateral del Gobierno norteamericano. Desde entonces, tanto el Grupo Contadora como el Grupo de Apoyo han reiterado su llamado a la reanudación de

./.

ese diálogo.

El acuerdo para la inspección y supervisión de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, firmado en mayo de 1986, constituye otro ejemplo de los esfuerzos del Grupo Contadora por contribuir a la distensión. No hay duda de que acuerdos similares para la supervisión de zonas en las que tienen lugar enfrentamientos contribuiría a disminuir la desconfianza.

En otro orden de cosas, cabe referirse a la participación del Grupo Contadora en los dos encuentros entre Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Económica Europea y de los países centroamericanos, los cuales tuvieron lugar en San José de Costa Rica en septiembre de 1984 y en Luxemburgo a finales de 1985. Desde el punto de vista político, estas reuniones fueron un signo interesante y positivo de la decisión europea de tener una presencia en una zona en la que, tradicionalmente, sólo se reconocía la influencia norteamericana. El acuerdo de la reunión de Luxemburgo, según el cual los Ministros de la CEE, del Grupo Contadora y de los países centroamericanos se reunirán una vez al año para examinar la evolución de la situación económica y política del Istmo, marca un hito en la historia de las relaciones entre Europa y América Latina. La presencia de Contadora en esas reuniones institucionaliza a este mecanismo latinoamericano como elemento insoslayable de la correlación de

./.

fuerzas en el área centroamericana.

Ahora bien, el papel más significativo del Grupo Contadora para el devenir de las relaciones interamericanas es su potencial como mecanismo de concertación política entre los países de América Latina. Este tema de la concertación requiere de cierta perspectiva para apreciar todo su significado. Al recordarse el comportamiento latinoamericano ante las crisis políticas que sacudieron el hemisferio hasta 1979, parece válida la afirmación de algunos analistas según los cuales los países de la región eran un grupo subordinado, carente de voz propia al enfrentar crisis que involucraban problemas de seguridad importantes para la Gran Potencia del continente. Basta recordar el comportamiento latinoamericano en la Organización de Estados Americanos al discutirse los problemas de Guatemala en 1954, el problema de Cuba entre 1949 y 1954 o la invasión de Santo Domingo en 1965; en todos esos casos los Gobiernos latinoamericanos no respondieron de manera articulada, ni evidenciaron una voluntad de actuar conjunta y diferenciadamente de los Estados Unidos.

Esa situación llegó a un punto de inflexión en la reunión de consulta interamericana celebrada en Washington en 1979, para discutir la situación de Nicaragua. En aquella ocasión se manifestaron dos grandes tendencias: una, encabezada por Estados Unidos, buscaba que la OEA creara una fuerza

./.

de paz que garantizara el reemplazo del gobierno de Somoza por uno de reconciliación nacional; otra, fiel al principio de la no intervención, insistía en que correspondía únicamente al pueblo de Nicaragua, sin ninguna presencia extranjera, decidir cómo deseaba realizar sus aspiraciones democráticas y organizar su propia vida. El apoyo de América Latina a la segunda tendencia fue tan abrumador, que al final de las deliberaciones la propuesta estadounidense se retiró y la OEA se limitó a pedir el reemplazo de Somoza por un gobierno de carácter democrático, al mismo tiempo que insistía en el principio de no intervención. Por primera vez en la historia de la OEA, al discutirse una crisis política en el hemisferio, hubo un claro consenso latinoamericano.

La acción diferenciada de América Latina se volvió a manifestar en ocasión del conflicto de las Malvinas. Esta vez, las discusiones en la OEA colocaron en campos distintos a Estados Unidos y la notable mayoría de países latinoamericanos. El Tratado de Río no se invocó, como ocurría frecuentemente, para apoyar una acción estadounidense, sino para buscar el apoyo a un país latinoamericano en conflicto armado con un país de la OTAN, por el que Estados Unidos mostraba su preferencia. Es probable que se haya exagerado un poco el impacto que todo ello tuvo en la reformulación de las relaciones interamericanas; pero indiscutiblemente el problema de las Malvinas puso en evidencia que había cuestiones relativas

./.

al mantenimiento de la paz y seguridad en el continente, en las cuales los intereses de países latinoamericanos se definían de manera distinta a los de Estados Unidos. Esto, y la tendencia a la concertación volvieron a manifestarse con motivo de los conflictos de Centroamérica.

El mejor ejemplo de la voluntad de concertación ha sido la existencia misma de Contadora por un período ya largo de tiempo. En efecto, el consenso entre sus miembros no puede verse como algo automático; todos coinciden en la necesidad de evitar la guerra en Centroamérica, y participar en la construcción de un orden regional que evite la polarización y el armamentismo. Pero, la coordinación de posiciones ante situaciones de crisis no tiene antecedentes en América Latina y requiere, por lo tanto, de un proceso de aprendizaje. Los países de Contadora tienen experiencias y tradiciones distintas en su política exterior en temas como la competencia de la ONU a la OEA sobre asuntos relativos a la paz y seguridad en el continente americano, o como la creación de fuerzas de paz interameircanas. Por otra parte, tienen tradiciones distintas en su relación con los Estados Unidos y, por lo tanto, pueden resentir de manera distinta el costo que en sus relaciones con ese país tienen las acciones autónomas ante el problema de Centroamérica.

A pesar de ello, los países de Contadora han sabido

./.

limar sus diferencias; han producido uno de los documentos más acabados que se haya concebido para fijar normas de convivencia entre países de una región afectada por la crisis económica, la polarización y el intervencionismo; han mantenido una interpretación de los acontecimientos de Centroamérica que pone el acento sobre los problemas internos que les dieron origen, evitando el maniqueismo de la versión Este-Oeste y han involucrado en su esfuerzo a otros países latinoamericanos ampliando, así, la concertación política entre los países de la región.

El carácter de Contadora como mecanismo esencialmente latinoamericano cobró mayor densidad al constituirse, en agosto de 1985, el llamado Grupo de Apoyo formado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Según su primer comunicado, el Grupo es "una nueva expresión de la voluntad política y de la capacidad de concertación latinoamericana para atender, desde una perspectiva propia, los problemas regionales". Su objetivo es, a más del intercambio sistemático de información sobre la situación centroamericana, la coordinación de acciones y gestiones diplomáticas ante gobiernos y organismos internacionales a fin de propiciar la suscripción de los acuerdos propuestos por el Grupo Contadora.

El Documento más importante emanado conjuntamente del Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo ha sido la Declaración de

./.

Caraballeda. En dicho documento se propusieron una serie de acciones simultáneas y se identificaron los principios fundamentales de convivencia internacional que de respetarse crearían un ambiente de confianza y seguridad que posibilitaría la suscripción del Acta de Paz y Cooperación de Contadora.

Las acciones propuestas en el mensaje de Caraballeda comprenden compromisos en materia política, de seguridad y de cooperación económica y social. Así, se hizo un llamado urgente a la reanudación de las negociaciones pendientes del Acta de Paz y de forma simultánea, respecto a las cuestiones de seguridad, se exhortó al cese del apoyo externo a las fuerzas irregulares que operan en la región, así como a los movimientos insurreccionales de los países centroamericanos, al congelamiento de la adquisición de armamentos, a la suspensión de las maniobras militares internacionales y a la reducción progresiva de los asesores e instalaciones militares extranjeras. Por otra parte, se invitó a los cinco países de América Central a adquirir el compromiso de no agredir a otro Estado y a realizar los pasos necesarios para producir la reconciliación nacional y la plena vigencia de los derechos humanos. Asimismo, se instó a promover la cooperación regional e internacional para la solución de problemas económicos y sociales.

Para el logro efectivo de tales acciones el Mensaje de

./.

Caraballeda exige el respeto estricto a lo que se definió como bases permanentes para la paz, que consisten en la observancia de una serie de principios básicos de convivencia regional. Esto es: solución latinoamericana, autodeterminación, no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, integridad territorial, democracia pluralista, no presencia de armamento o bases militares, no realización de actos de agresión, no presencia de tropas o asesores extranjeros, no apoyo a grupos subversivos y respeto a los derechos humanos.

El Mensaje de Caraballeda dió especial importancia a la promoción de nuevas acciones de reconciliación nacional en los países donde se habían producido profundas divisiones dentro de la sociedad ya que, se afirmó, la estabilidad regional supone también la pacificación interna. Asimismo expresó la decisión de apoyar la iniciativa del entonces presidente electo de Guatemala para la constitución de un parlamento latinoamericano y, en otro orden de cosas, de impulsar la reanudación de las conversaciones entre los Gobiernos de los Estados Unidos y Nicaragua como condición para la distensión regional. A pesar del empeño latinoamericano en avanzar hacia la negociación, esta avanza penosamente, llegando en ocasiones a lo que parece un punto muerto ¿cuál es el motivo?

./.

II

En ciertos momentos, pareció que el obstáculo principal a las propuestas de Contadora eran la imposibilidad de conciliar los puntos de vista opuestos sobre los temas de maniobras militares extranjeras y control y reducción de armamentos que forman parte del capítulo de seguridad del Acta para la Paz.

Convendría quizá hacer un recuento de tales diferencias ya que en ellas se centraron las discusiones y se produjo frecuentemente el estancamiento del proceso negociador. En la primera versión del Acta dada a conocer en septiembre de 1984, se proscribían las maniobras militares internacionales, mientras que, en materia de armamentos, se adoptaba el compromiso de iniciar de inmediato negociaciones sobre control y reducción del inventario de armamentos así como del número de efectivos en armas; al presentarse a los cinco países centroamericanos para su consideración, el Gobierno de Nicaragua manifestó estar dispuesto a subscribirla. Sin embargo, Costa Rica, Honduras y El Salvador expresaron su desacuerdo por considerar que uno de los países del área tenía una supremacía militar que era peligrosa para la estabilidad de toda la región.

Se reiniciaron entonces negociaciones, en el marco de Contadora, con objeto de alcanzar un acuerdo sobre los puntos

./.

de controversia. Como resultado de tales negociaciones, en septiembre de 1985 se presentó una versión revisada del Acta de Paz. En esta segunda ocasión, las maniobras militares internacionales quedaron sujetas a una regulación, con miras a su proscripción -la que sería efectiva una vez que se alcanzaran los límites máximos de armamentos y efectivos en armas acordados por las Partes- y en relación al control y reducción de armamentos se señalaba la obligación de suspender toda adquisición de equipo bélico, así como la de no incrementar sus efectivos militares a partir de la fecha de firma del documento de paz. En esta ocasión, fue el Gobierno de Nicaragua el que no estuvo dispuesto a suscribir el Acta. Consideró que, tomando en cuenta las agresiones en su contra, la firma del Acta, tal y como se encontraba en su segunda versión, hubiera dejado al régimen Sandinista en un estado de indefensión de armamento bélico, mientras que las maniobras militares internacionales habrían continuado.

Finalmente, después de múltiples esfuerzos para elaborar un texto que pueda ser aprobado por consenso, la versión actual del proyecto del Acta de Paz presenta lo que quizá constituya ya la mejor opción para lograr una solución pacífica a la crisis centroamericana, sobre la base de restablecer la confianza haciendo concesiones recíprocas. Respecto a los dos temas del capítulo de seguridad que nos ocupa, se establece que para la adopción de medidas tendientes a detener la

./.

carrera armamentista en todas sus formas, deberán tomarse en cuenta los intereses de seguridad nacional de los Estados de la región con miras al establecimiento de un balance razonable de fuerzas, lo que obliga a la determinación de límites máximos en el desarrollo militar y la consiguiente reducción y control de armamentos, efectivos en armas e instalaciones militares, conforme a las necesidades de estabilidad y seguridad en el área. Para ello se establece una tabla de factorización y se distingue entre el armamento sujeto a control y el sujeto a reducción, entre otras cuestiones. En cuanto a la realización de las maniobras militares internacionales, se señala la obligación de suspenderlas durante un término de 90 días a partir de la entrada en vigor del Acta. Si después de este término no se acuerda prolongar tal suspensión, se señalan limitaciones para su realización.

Como puede verse en la versión final del Acta para la Paz, es posible superar desavenencias y encontrar formas de conciliación que satisfagan los intereses de los países de la región. El verdadero problema no es superar las desavenencias; el verdadero problema es el quiebre de la voluntad negociadora que se ha venido manifestando. A pesar de la indiscutible necesidad de los cinco países centroamericanos de alcanzar y preservar un orden de convivencia, base del interés y la propia seguridad nacional de cada uno de ellos, parecería que el proceso de negociación ha entrado a una fase de reite-

./.

ración de posiciones inflexibles, las cuales acaban convirtiéndose en visiones maniqueistas de la realidad o en cruzadas moralizadoras. Estas actitudes, lejos de beneficiar el diálogo y el entendimiento, podrían transformarse en un peligroso y franco intervencionismo que impediría, quizá de modo irreversible, la creación de un orden internacional seguro y confiable para todos. En vez de avanzar hacia ese orden, se está generalizando una interpretación de los acontecimientos según la cual no es posible la convivencia ni la solución pacífica; debe optarse, en consecuencia, por una solución de fuerza, extrajurídica y violadora de los principios de autodeterminación y no intervención. El apoyo a la contra es, en nuestra opinión, el ejemplo de un camino erróneo para aproximarse a la solución de la crisis centroamericana.

III

Llegados a este punto, cabe preguntarnos si existe todavía motivación para la acción pacificadora del Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo y qué ocurriría de precipitarse una solución de fuerza, contraria a las propuestas que estos Grupos han venido avanzando.

Existen diversos motivos que nos permiten afirmar que seguirán los esfuerzos, a diversos niveles y en diversos foros, para proseguir con el esfuerzo negociador. El primer mo

./.

tivo es la convicción de que dejar un vacío diplomático, cerrar el espacio para el diálogo entre los países centroamericanos y entre éstos y los países del resto de América Latina, precipitaría situaciones irreversibles de violencia, polarizaciones, desplazamientos y desestabilizaciones que afectarían, no sólo el futuro del Istmo, sino el de América Latina en su conjunto.

El segundo motivo es la certidumbre de que la solución que se dé al problema de la paz en Centroamérica afectará el futuro de todos los países latinoamericanos. En efecto, lo que se encuentra en juego es la institucionalización y defensa de los grandes principios de Derecho Internacional consagrados en los pactos internacionales, o bien, la instauración de un sistema de poder que, en nombre de la seguridad o la democracia, atentará contra las normas básicas de la convivencia internacional.

El tercer motivo es el interés de los países latinoamericanos que forman parte del Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo de participar en las decisiones internacionales que se refieren a los problemas de la paz y la seguridad en el continente americano. Como hemos señalado, en circunstancias y por motivos distintos, desde finales de los años setentas los países latinoamericanos han querido proyectar su voz respecto a cuestiones de seguridad, a partir de una interpretación pro

./.

pia, que se aleja del alineamiento automático con una gran potencia y se empeña, entre otras cosas, en evitar el maniqueismo de la versión Este-Oeste. En el reciente comunicado emitido en Nueva York por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Grupos de Contadora y de Apoyo ese anhelo latinoamericano de participación con voz propia en los asuntos de política internacional se refrendó al señalar:

> Como latinoamericanos demandamos espacio para actuar, espacio para ofrecer a unos y a otros una solución pacífica, justa y duradera, una solución que no es fácil de alcanzar pero que se nutre de una perspectiva propia, fundada en la comprensión de las bases sustanciales del conflicto y en la convicción de que los intereses fundamentales de América Latina están en juego en Centroamérica.

Que Contadora persista en su esfuerzos no garantiza que se pondrá fin a la dinámica del enfrentamiento. Este puede ser más agudo y generalizarse las acciones militares, lo que impondrá en Centroamérica un largo período de desestabilización, similar al que ha causado pérdida de generaciones enteras en otras regiones del mundo.

De ser así, las consecuencias serán diversas y difíciles de precisar. Una de ellas será romper la confianza de un grupo representativo de líderes latinoamericanos en la capacidad de los principales responsables del actual conflicto de enten

./.

der razones y aceptar normas básicas de la convivencia. Sin embargo, el Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo seguirán siendo un símbolo del esfuerzo por democratizar las relaciones internacionales, por hacer triunfar una visión de las soluciones negociadas en la que pluralismo quiere decir, entre otras cosas, compromiso con la democracia y el derecho inalienable de los pueblos a definir su propio camino para encontrarla.

Agradezco de nuevo al IPALMO la oportunidad que se me brindó de traer estas reflexiones al conocimiento del público europeo. Estoy segura que las fuerzas de la paz en Europa pueden contribuir grandemente a evitar una guerra en Centroamérica; ese es el objetivo que la mayoría de latinoamericanos desean.

Nicaragua: país sitiado

(Guerra de baja intensidad: agresión y sobrevivencia)

Raúl Vergara Meneses
José R. Castro
Deborah Barry

cuadernos de pensamiento propio

cuadernos de pensamiento propio

serie avances cuatro

una publicación
CRIES
junio de 1986
tiraje: 3,000 ejemplares
derechos reservados

Secretaría Ejecutiva de CRIES
Apartado Postal 3516
Managua, Nicaragua
teléfono: 22147
télex: 2296

Administración de Pensamiento Propio
apdo. 3516 télex:2296
Managua, Nicaragua.

Los cuadernos de pensamiento propio recogen las investigaciones de los centros afiliados a la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), así como de colaboradores comprometidos en la búsqueda de una Alternativa Regional para Centroamérica y El Caribe. Los Cuadernos se publican en cinco series: Debates, Ensayos, Avances, Documentos, y Bibliografías.

Manuscritos para publicación (mecanografiados a doble espacio) pueden enviarse a **cuadernos de pensamiento propio,** CRIES, Apartado 3516, Managua, Nicaragua.

coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales

Nicaragua: país sitiado

(Guerra de baja intensidad: agresión y sobrevivencia)

Raúl Vergara Meneses
José R. Castro
Deborah Barry

INDICE

Prefacio	1
Presentación	3
1. La Situación Regional	5
2. El Enfoque Norteamericano sobre el Conflicto en Centroamérica.	7
3. Nicaragua: Desarrollo de la Agresión.	15
4. Consecuencias: El Proyecto de Sobrevivencia	36
5. Conclusiones: Alternativas para la Paz	63

Prefacio

"*Nicaragua: país sitiado*", expresión usada por el ex-presidente de Costa Rica Don José Figueres en su discurso de agradecimiento, al recibir del gobierno nicaragüense la orden Augusto César Sandino el 24 de abril de 1986, refleja el conjunto de tensiones, contradicciones y contribuciones que están en juego en la difícil y apasionante coyuntura de Nicaragua 1986.

Posiblemente no hay ningún político centroamericano con más capacidad de ubicar la coyuntura de Nicaragua en términos más objetivos y honestos que "Don Pepe", anciano político costarricense, amigo siempre de Estados Unidos como él no se cansa de repetir, pero a la vez con un profundo sentido de la identidad y dignidad centroamericana.

Nicaragua: país sitiado pretende ser la primera aproximación a un tema difícil y nuevo en las ciencias sociales de la región: Ubicar la guerra y la creciente militarización de nuestros países dentro de la profunda crisis, transformaciones e inicios de construcción de una transición difícil a una nueva sociedad, un nuevo hombre y una nueva región centroamericana.

Indudablemente que la agresión, dirigida y financiada por la gran potencia vecina, y la defensa de su autodeterminación y sobrevivencia en un país pequeño y pobre, devastado por cuarenta y cinco años de dictadura, tres años de guerra insurreccional y cuatro de guerra contrarrevolucionaria, producen un conjunto de dramáticos efectos económicos y sociales y un casi infinito dolor social, en un país que ni la naturaleza ha dejado reposar en más de medio siglo.

La capacidad de resistencia y sobrevivencia, la creatividad y originalidad de un pueblo, también sus debilidades, requieren un estudio más acabado y completo que el que hoy presentamos. Este trabajo de CRIES pretende iniciar en Nicaragua un conjunto de estudios que colegas centroamericanos han realizado en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. El caso de Nicaragua es el más sencillo y a la vez el más complicado de analizarse, por conllevar la tensión entre lo nuevo que nace y lo viejo que se quiere reconstituir; entre las distorsiones y contradicciones producto de la agresión y, a la vez, las nuevas posibilidades de profundizar la participación y creatividad popular, en una lucha por la dignidad nacional y la sobrevivencia económica.

Esta *guerra por la legitimidad internacional*, es parte del conflicto que provoca la estrategia de las guerras de baja intensidad. Nicaragua ha tenido el coraje de llevar a la Corte Internacional el juicio sobre esta legitimidad para recibir el veredicto del máximo organismo

mundial. Pero quizás más importante y profunda es *la guerra por la legitimidad ante el corazón y la mente* de su propio pueblo, que debe discernir si su permanente drama es producto del "totalitarismo marxista-leninista del Sandinismo", o consecuencia del proyecto de recuperación de la hegemonía mundial de una potencia que pretende imponer un "globalismo unilateral" y, que por tanto, un proyecto de autodeterminación y de dignidad bolivariana en su propio patio trasero es un ejemplo peligroso. Peligroso, por representar las aspiraciones acumuladas de muchos pueblos pequeños de la periferia.

La conceptualización globalista de la Seguridad Nacional por la Doctrina Reagan, conlleva que los cambios en el Tercer Mundo para lograr la satisfacción de sus demandas básicas *pan, techo, trabajo y dignidad*, sean interpretados como amenaza para su proyecto de globalismo unilateral.

¿Será también *Nicaragua sitiada* un ejemplo de lo que sucederá a otros pueblos del Tercer Mundo que *necesitan cambiar* para lograr la satisfacción de sus demandas básicas de pan, techo, trabajo y dignidad?

¿No será el problema central *la carencia de una política exterior norteamericana hacia el Tercer Mundo*? Una política norteamericana hacia el Tercer Mundo que reconozca:

a) Que el cambio económico y político es necesario para la paz social y la creación de la democracia en el Tercer Mundo y en Estados Unidos, evitando así el peligro de su facistización.

b) Que el Tercer Mundo exige inexorablemente ser sujeto político activo en la comunidad internacional con igualdad de derechos.

c) Que la bipolaridad del mundo es peligrosa para la paz mundial en una era nuclear y que, por tanto, el no alineamiento y la multipolaridad son características esenciales para la convivencia pacífica al fin del siglo XX.

d) Que esta nueva relación con el Tercer Mundo por parte de Estados Unidos es esencial para eliminar el terrorismo internacional, los "conflictos regionales" y garantizar la *seguridad colectiva*.

e) Que frente al "unilateralismo global" de la Doctrina Reagan el pueblo norteamericano y los pueblos del Primer Mundo necesitan trabajar por una *sociedad solidaria basada en intereses mutuos y valores comunes*.

Estas reflexiones pretenden ubicar la militarización creciente de Centroamérica como alternativa de la administración Reagan dentro de un contexto más estructural. Lo que hoy sucede en Nicaragua y Centroamérica es un *test* para la autodeterminación, la democracia y la paz en América Latina y el mundo.

Este es el *reto para un proyecto común* entre los pueblos de Estados Unidos y Centroamérica.

Xabier Gorostiaga

Presentación

Contrastando con el dramático protagonismo de Nicaragua en la situación centroamericana, se percibía la ausencia en los Cuadernos de Pensamiento Propio de un trabajo integral sobre Nicaragua que, desde la perspectiva de la agresión, conjugara los distintos elementos, los efectos y reacciones que ésta desencadena en el proceso revolucionario sandinista. El presente trabajo pretende ser una primera respuesta de CRIES a este vacío.

Analizar lo que en síntesis podría catalogarse como la contradicción "agresión-supervivencia" es un trabajo que obviamente no puede agotarse -ni mucho menos- en un esfuerzo de difusión como el presente. Ello, por el sinnúmero de variables que intervienen, como por la dinámica arrolladora que caracteriza el actual proceso centroamericano, dentro del cual Nicaragua, sin proponérselo, se ha convertido en una suerte de pivote.

Las opiniones, actitudes, coincidencias y desacuerdos sobre el tema que se generan en las capitales latinoamericanas y europeas, en Washington y Toronto, hacen del cuadro general un caleidoscopio que cambia velozmente, sucediéndose situaciones nuevas cada día.

La inserción de Nicaragua en el cuadro general, como es sabido, se origina por el efecto dialéctico acción-reacción: Revolución Popular Sandinista-agresión imperialista; la articulación regional es la agresión.

Un equipo de investigadores de CRIES que trabaja en el proyecto *Conflictos y alternativas de paz en la región centroamericana* ha elaborado el presente trabajo de difusión ordenando su desarrollo en cinco partes:

Se inicia el documento con una introducción que, a manera de cuadro general, traza los elementos básicos que describen el fenómeno político-social más dramático de la región: la militarización.

La segunda parte constituye la referencia necesaria a la lógica que informa la agresión, esto es: el enfoque interpretativo que la "comunidad de la seguridad" norteamericana tiene sobre el conflicto en Centroamérica. De la lógica precedente -entre otras cosas- se deriva el emergente pensamiento militar norteamericano conocido con el

eufemismo de "guerra de baja intensidad", el cual ha hecho de Centroamérica en general y Nicaragua en particular, su laboratorio.

Definidos estos elementos, en la tercera parte se entra de lleno al análisis de la agresión en todas sus formas. La expresión más brutal de todas -la militar- se trata con mayor extensión, en sus distintas formas y fases. Punto especial en este capítulo lo constituye la guerra contrarrevolucionaria.

Como complemento necesario del análisis precedente, en el capítulo cuarto se estudian las consecuencias de la agresión que hacen que la revolución se readecúe en lo que llamamos "el proyecto de supervivencia".

Como en el caso anterior, se analizan los efectos en los distintos aspectos de la realidad nicaragüense. Esta parte se inicia con uno de los temas que causa mayor controversia: la militarización. Como fenómeno social, su proyección excede el campo propiamente militar, para afectar otras esferas. Desde esta perspectiva, se analiza las consecuencias políticas de la agresión, en sus múltiples manifestaciones, como asimismo los llamados "costos sociales".

Como una forma de completar la visión consecuencial de la agresión, la cuarta parte finaliza haciendo una revisión -más bien descriptiva- de los costos económicos, en el entendido que, una desagregación de los efectos como la presentada, es sólo útil para el análisis teórico, toda vez que para las víctimas de la agresion la carga es una sola.

Las conclusiones con que se cierra el presente trabajo, por su naturaleza no pueden sino ser preliminares a pesar de conocerse la causa de la crisis y la voluntad de perseverancia de los actores. Este carácter deriva no por falta de identificación de la causa de la crisis -cuestión muy clara para todos los nicaragüenses- ni porque existan dudas acerca de la voluntad de perseverancia en el proyecto revolucionario por parte del pueblo.

Las conclusiones de un trabajo como el que presentamos son preliminares porque la paz en Centroamérica lo es. Para su consolidación -o cancelación- se precisan definiciones y compromisos claros de la administración norteamericana -cuestión todavía no resuelta-, como también se requiere con urgencia una posición clara, resuelta y coherente por parte de los gobiernos latinoamericanos en defensa de los principios que todos dicen sostener: independencia, autodeterminación y no intervención. La unidad latinoamericana, única fuerza capaz de hacer vigentes estos principios y otros tantos anhelos postergados, aunque crecientes, es todavía preliminar.

Raúl Vergara Meneses

1. LA SITUACION REGIONAL

Durante los últimos seis años, Centroamérica se ha convertido en foco de atención y preocupación mundial por el aumento sin precedentes del nivel de armamentismo y de la militarización de esta zona. Los cinco pequeños países centroamericanos se han visto involucrados en la vorágine de una carrera armamentista, altamente peligrosa por la existencia de guerras locales que amenazan extenderse a toda la región.

Para tener una idea aproximada de la militarización, en cifras de Centroamérica, bastaría con citar el aumento de los efectivos de las fuerzas armadas de estos países entre 1980-1985, que pasan de 44.450 a 210.898, o sea, aumentan cinco veces en el período. (Ver cuadro 1)

Es ilustrativo decir que en comparación con los ejércitos del Brasil, que cuenta con 277.100 efectivos (1984-1985) y de México que alcanza los 250.000 (1984-1985), para poblaciones de 127.690.000 y 73 millones respectivamente (1), los ejércitos de Centroamérica, con su población cercana a los veinticinco millones, se erigen en una carga improductiva muy pesada para estos países; por lo cual, es elemental que sin el soporte de ayuda externa, o mediante la estrategia de combinar producción y defensa, sería imposible la existencia de estos enormes ejércitos en países con hambre endémica.

Por otra parte, según cálculos de diversas fuentes, no siempre coincidentes pero sí ilustrativos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua contarían con cerca de 1,211 unidades de guerra, -entre aviones, blindados y barcos- y, aún más importante, con la presencia siempre fluctuante de personal extranjero (asesores, etc.) en número de 5.785, que en períodos de maniobras militares ha llegado a más de treinta mil efectivos del ejército norteamericano, especialmente en suelo hondureño (2).

Es importante referirse a algunas cifras de ayuda extranjera a Centroamérica, para ver hacia dónde se dirige este "esfuerzo externo" en la región. De acuerdo a datos provenientes de NARMIC (3), durante los años 1980-1986, la ayuda norteamericana a El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, llego a la astronomica cifra de 4.557.8 millones de dólares: 1.008.2 "militar" y 3.549.6 "económica", división que es artificial y engañosa puesto que la mayor parte de la ayuda para el desarrollo (económico), tal y como ha sido verificado en El Salvador

CUADRO 1

AUMENTO EFECTIVOS MILITARES EJERCITOS CENTROAMERICANOS (1980 - 1985)

	Guatemala	El Salvador	Nicaragua	Honduras	Costa Rica
1980	14.900	13.250	25.000/8.300*	11.300	5.000
1985	51.600	56.500	61.800	25.500	15.498

NOTA:*

De acuerdo a datos oficiales de junio de 1979, citados en las fuentes siguientes, la Guardia Nacional contaba con 25,000 efectivos. A comienzos de 1980, el naciente Ejército Popular Sandinista contaba aproximadamente con 8,300 efectivos.

FUENTES:

1. "Aproximación al Conflicto Centroamericano desde la perspectiva de la guerra de baja intensidad", trabajo presentado en la Conferencia *Apreciación de cinco años de la política estadounidense hacia Centroamérica,* en la Universidad del Sur de California, febrero 1986.

2. *Inforpress Centroamericana,* núm. 345, 7 de junio, 1979, pág. IV.

3. Aguilera, Gabriel. "La dimensión militar en la crisis de Centro América". Ponencia a la Conferencia *La crisis centroamericana y sus implicaciones internacionales.* El Colegio de México-IISS, México, mayo 1985.

por el Informe Miller, va dirigida a apuntalar el esfuerzo militar. Además la cifra tiene que ser mayor pues los gastos reales han sido mayores que las cantidades aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. Aun cuando es de difícil certificación, el Departamento de Estado norteamericano afirma que la ayuda del "bloque soviético" a Nicaragua asciende a la suma de 1.095 millones de dólares: 350 millones (1980-1984) militar y 745 millones (1982-1984) económica (4).

A esto habría que agregar la ayuda militar abierta a la contra nicaragüense (es decir, lo aprobado por el Congreso), que llegó a totalizar de 1982 a 1985 los 105 millones de dólares; sin embargo, tomando en consideración la red de organismos privados de la nueva derecha norteamericana, los cuales mantienen un flujo constante de ayuda, proveyendo pertrechos, reclutando mercenarios, etc., la ayuda real es posiblemente diez veces mayor. Esta ayuda privada ha llegado a calcularse, por organismos privados, en la cantidad de mil millones de dólares entre 1983 y 1985 (5).

Finalmente, existe lo que podría denominarse los costos no contabilizados de la militarización de Centroamérica, tales como los costos de los vuelos permanentes de reconocimiento electrónico (vuelos es-

pías), los costos de suministros, encubiertos con maniobras militares de armas y equipo llevados a Honduras, Costa Rica y Panamá, los costos de esas maniobras y del movimiento de barcos de guerra en costas centroamericanas; en fin, los costos de las actividades de la inteligencia política y militar en aeropuertos de estos países y desde el Comando Sur en Panamá, incluida la vigilancia naval en el Golfo de Fonseca (compartido por El Salvador, Honduras y Nicaragua). (6)

En lo social, esta militarización del área profundiza los costos humanos sobre los habitantes de una región que es de las más pobres del mundo y en donde, según estimaciones de la CEPAL, para 1980 el 63.7% de su población se encontraba en estado de pobreza; el 41.8% se debatía en la extrema pobreza y un 21.9% en la insatisfacción de sus necesidades básicas, indicadores que a la altura de 1986 se habrán agravado aún más por la guerra (7).

Basten las anteriores cifras para presentar claramente el hecho de la militarización actual de Centroamerica y sus costos; sin embargo, a la mente de todos salta inmediatamente la pregunta: ¿quién es el causante de esta militarización que pone al borde de una conflagración de incalculables consecuencias a nuestros pueblos? El Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, vocero ideológico del gobierno norteamericano, Elliot Abrams responde: "Nicaragua está rodeada ahora de democracias y la mayor amenaza para la supervivencia de esas democracias es la subversion por Nicaragua.... Nicaragua es la oveja negra" (8).

Es decir que, de acuerdo a la opinión propagandística en blanco y negro del gobierno norteamericano, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica son democracias que enfrentan el peligro de la subversión sandinista, cuyo gobierno es una dictadura militarizada.

Para responder a la interrogante planteada un poco más allá del simplismo propagandístico de Elliot Abrams, profundicemos un poco en el marco de la visión norteamericana del conflicto centroamericano y sus posibles vías de solución.

2. EL ENFOQUE NORTEAMERICANO SOBRE EL CONFLICTO EN CENTROAMERICA

Centroamérica se ha convertido en los últimos cinco años, en el reto más importante, después de Vietnam, al consenso norteamericano para una política de contención y reversión en el Tercer Mundo.

La creciente diversidad de posiciones al interior de los centros de poder de los Estados Unidos sobre el qué hacer en El Salvador y Nicaragua precipitó la creación de la Comisión Bipartidista Nacional sobre Centroamérica, más conocida como Comisión Kissinger. Dos años después de la presentación de sus recomendaciones, la lógica y las propuestas concretas de su informe cobran vigencia en la realidad (9).

2.1. El Informe Kissinger

En gran medida, el fenómeno de la Comisión Kissinger fue un paso de

calidad pára la clarificación y sistematización de la política norteamericana hacia la región. Uno de los aportes principalmente de las propuestas es el haber definido un marco conceptual para una política integral y de largo plazo para el tratamiento y seguimiento del conflicto centroamericano desde la perspectiva de la seguridad norteamericana.

Antes de la propuesta Kissinger el manejo de la política hacia Centroamérica era fragmentaria en su concepción, descoordinada a nivel institucional, a veces contradictoria en la implementación de los aspectos militar y no militar de la política, y orientada por una visión corto placista de resolución del conflicto.

Al haber reconocido de partida los factores socio-económicos como causas importantes de las insurrecciones y movilizaciones populares en la región, el Informe sentó las bases para el diseño de una política mucho más coherente y comprensiva que la anterior, arguyendo la necesidad de que los Estados Unidos tenga mayor injerencia en los múltiples aspectos de la vida nacional de los países de toda la región. Esto se convirtió en la justificación de la necesidad de ampliar considerablemente los rubros de la ayuda no militar para cada país.

A la par de lo anterior, el informe cumple otra función central para los intereses de la administración Reagan. Articula el problema socioeconómico (causa de las revoluciones indígenas) con el factor externo (el expansionismo soviético) de tal suerte que termina elevando el conflicto al nivel de una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. Logra darle el status de conflicto geo-estratégico a los procesos de cambio nacional dentro de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Precisamente, al ubicar los procesos de liberación nacional y la consolidación de la Nicaragua Sandinista en el marco Este-Oeste en situación de ofensiva contra los Estados Unidos, justifica su prioridad y el consiguiente aumento considerable en la ayuda militar norteamericana para sus aliados de la región.

Entonces, el marco de la *seguridad nacional* de los Estados Unidos es lo que engloba y condiciona las cantidades y las formas de ayuda propuestas para cada uno de los países.

En relación a las formas de ayuda, el Informe recomienda descartar la participación significativa y directa de las fuerzas norteamericanas en la región, al presentar un costo muy elevado por razones domésticas y geopolíticas, y en su defecto propone "un marco regional de acuerdos", que supondría dejar a los mismos gobiernos y ejércitos de la región sustituir la presencia directa y masiva norteamericana (10).

La lógica del Informe se asienta sobre condicionamientos: condicionar los procesos de democratización de la región a la seguridad nacional, condicionar la ayuda económica a la aceptación de acuerdos políticos sobre la seguridad nacional y condicionar la participación extra-regional a un sistema de aporte económico y verificación de acuerdos en los que Estados Unidos tenga la última palabra (11).

En suma, se propone que los Estados Unidos extienda su proyecto de seguridad nacional a los gobiernos aliados del istmo, los cuales debe-

rían asumirlo como propio. De esta manera se lograría dar cobertura al creciente involucramiento en la región, montando a la par un proyecto de contrarrevolución regional.

Según su presentación formal las propuestas concretas de ayuda deberían ser aplicadas en su mayoría al campo económico-social, dejando la asignación menor a lo propiamente militar.

Lo que el Informe no dice y la asignación oficial oculta es que el gasto de la ayuda obedece a la lógica de una guerra contrainsurgente moderna, la cual subordina las medidas sociales, económicas y políticas a lo militar. En este sentido, muchos de los programas de apariencia socioeconómica, con títulos de "humanitarios", no sólo acompañan las actividades propiamente militares, sino que están intimamente relacionados con la formación y ejecución de una política represiva (12).

En una región con este tipo de guerra, la distinción entre lo militar y lo no militar tiende a diluirse u opacarse. La respuesta política antisubversiva es la prolongación de la guerra con medidas de desgaste económico, de operaciones sicológicas y de "reactivación económica". Fijar sus límites sólo es útil para fines del debate al interior de los Estados Unidos, en donde la opinión política tiende a asociar el incremento de gastos militares con políticas intervencionistas.

Es incuestionable que las recomendaciones del informe lograron neutralizar buena parte de la oposición, especialmente del Partido Demócrata. Despues del despliegue publicitario inicial el mismo manejo de las recomendaciones del informe les ha hecho desaparecer casi por completo del debate público y de la cobertura de la prensa y sigilosamente las ha incorporado casi íntegras a la política actual hacia la región. Es más, en el año 1984, el contenido conceptual del informe comenzó a dominar la formulación e implementación de la política norteamericana hacia toda la región centroamericana.

Según el Ex-embajador especial para Centroamérica, Harry W. Schlaudeman,

> Normalmente, un estudio de esta índole, a pesar de su valor, hubiera pasado al olvido. No ha sido ése el caso con el Informe de la Comisión Presidencial Bipartidista para Centroamérica. El Informe está en el seno (*"at the heart of"*) de la política de la Administración para la región; define no sólo las metas de largo plazo, sino también guía las decisiones cotidianas (13).

Además, el presidente Reagan decidió promover la implementación de todas las recomendaciones del Informe Kissinger (IK) al someter al Congreso, en febrero de 1984, el *Acta de Iniciativa de Democracia, Paz y Desarrollo para Centroamérica*. Según el mismo Schlaudeman, a partir del otoño de 1985 se había logrado pasar la legislación que autoriza "todos los programas recomendados con la singular excepción de la membresía estadounidense en un Banco Centroamericano para la Integración Económica, (ODCA)" (14).

A poco más de un año de su presentación el IK fue evaluado en un informe especial del Departamento de Estado, el cual reiteró lo que de-

berían ser los ejes centrales de la nueva política hacia Centroamérica: una "política comprensiva" basada en "una diplomacia activa en apoyo a la democracia, un aumento en lo económico para llevar a las raíces de las causas de pobreza y el descontento social, y la provisión de 'asistencia de seguridad' para proteger el desarrollo pacífico". Debería incluir, además "un aumento en la ayuda militar para permitir la aplicación de estrategias de contrainsurgencia moderna, las cuales requieren mayor movilidad, más entrenamiento, niveles más altos de fuerza y más equipo". (15)

Luego el Departamento de Estado indicó que los niveles de financiamiento propuestos en lo económico y lo militar han servido de hecho como guía para las cifras de ayuda alcanzadas en los años fiscales de 1984 y 1985. Lo comprensivo de la política es evidenciado en la práctica con la notable expansión de los programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) dentro de la región, no sólo en cuanto a cantidad de fondos disponibles, sino en la amplitud de áreas donde penetra la influencia estadounidense.

Esta ayuda, percibida como ayuda no militar, puede ser categorizada en tres grandes rubros: ayuda para la estabilización económica, la pacificación y el apoyo al sector privado. Los fondos canalizados para cualquiera de ellos son administrativos en su mayoría por la AID.

El caso de El Salvador demuestra el grado más extremo de la nueva penetración norteamericana: allí los programas directos de la AID y los fondos ESF (*Economic Support Funds*)(16) financian proyectos en las múltiples esferas de: la organización del sector privado para la exportación de productos no tradicionales, organización de cooperativas campesinas, asignación de crédito rural, reubicación de la población civil (personas desplazadas), construcción de viviendas, programas de asistencia médica, entrega de alimentos, administración de hospitales y provisión de becas para estudios en los Estados Unidos. También se han canalizado los fondos de AID hacia la tecnificación y asesoría electoral, legislativa y la reorganización de todo el sistema judicial (17).

Aunque en menor grado, se da la ampliación de los fondos, programas y asesoría norteamericana en los demás países de la region. En el caso de Guatemala, a pesar de que la ayuda propiamente militar sigue por debajo de los niveles en otros países, desde 1984 AID extendió múltiples programas de pacificación. Concentró la mayor parte de sus esfuerzos en el Altiplano, donde el control para la implementación de estos fondos esta en manos de los militares.

En los casos de Costa Rica y Honduras (donde no se enfrenta una oposición armada) los programas de pacificación se perciben como preventivos. A la vez se articulan geográficamente con el proyecto contrarrevolucionario nicaragüense, y se ubican en las zonas fronterizas. Los fondos invertidos en la ampliación de la infraestructura física (carreteras, pistas de aterrizaje, etc.) hasta programas de acción cívica, asistencia médica y desarrollo comunal con la población indígena y campesina de las zonas (18).

Las propuestas de apoyo al sector privado, primero conocidas con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), recibieron un impulso a

rían asumirlo como propio. De esta manera se lograría dar cobertura al creciente involucramiento en la región, montando a la par un proyecto de contrarrevolución regional.

Según su presentación formal las propuestas concretas de ayuda deberían ser aplicadas en su mayoría al campo económico-social, dejando la asignación menor a lo propiamente militar.

Lo que el Informe no dice y la asignación oficial oculta es que el gasto de la ayuda obedece a la lógica de una guerra contrainsurgente moderna, la cual subordina las medidas sociales, económicas y políticas a lo militar. En este sentido, muchos de los programas de apariencia socioeconómica, con títulos de "humanitarios", no sólo acompañan las actividades propiamente militares, sino que están intimamente relacionados con la formación y ejecución de una política represiva (12).

En una región con este tipo de guerra, la distinción entre lo militar y lo no militar tiende a diluirse u opacarse. La respuesta política antisubversiva es la prolongación de la guerra con medidas de desgaste económico, de operaciones sicológicas y de "reactivación económica". Fijar sus límites sólo es útil para fines del debate al interior de los Estados Unidos, en donde la opinión política tiende a asociar el incremento de gastos militares con políticas intervencionistas.

Es incuestionable que las recomendaciones del informe lograron neutralizar buena parte de la oposición, especialmente del Partido Demócrata. Despues del despliegue publicitario inicial el mismo manejo de las recomendaciones del informe les ha hecho desaparecer casi por completo del debate público y de la cobertura de la prensa y sigilosamente las ha incorporado casi íntegras a la política actual hacia la región. Es más, en el año 1984, el contenido conceptual del informe comenzó a dominar la formulación e implementación de la política norteamericana hacia toda la región centroamericana.

Según el Ex-embajador especial para Centroamérica, Harry W. Schlaudeman,

> Normalmente, un estudio de esta índole, a pesar de su valor, hubiera pasado al olvido. No ha sido ése el caso con el Informe de la Comisión Presidencial Bipartidista para Centroamérica. El Informe está en el seno (*"at the heart of"*) de la política de la Administración para la región; define no sólo las metas de largo plazo, sino también guía las decisiones cotidianas (13).

Además, el presidente Reagan decidió promover la implementación de todas las recomendaciones del Informe Kissinger (IK) al someter al Congreso, en febrero de 1984, el *Acta de Iniciativa de Democracia, Paz y Desarrollo para Centroamérica*. Según el mismo Schlaudeman, a partir del otoño de 1985 se había logrado pasar la legislación que autoriza "todos los programas recomendados con la singular excepción de la membresía estadounidense en un Banco Centroamericano para la Integración Económica, (ODCA)" (14).

A poco más de un año de su presentación el IK fue evaluado en un informe especial del Departamento de Estado, el cual reiteró lo que de-

berían ser los ejes centrales de la nueva política hacia Centroamérica: una "política comprensiva" basada en "una diplomacia activa en apoyo a la democracia, un aumento en lo económico para llevar a las raíces de las causas de pobreza y el descontento social, y la provisión de 'asistencia de seguridad' para proteger el desarrollo pacífico". Debería incluir, además "un aumento en la ayuda militar para permitir la aplicación de estrategias de contrainsurgencia moderna, las cuales requieren mayor movilidad, más entrenamiento, niveles más altos de fuerza y más equipo". (15)

Luego el Departamento de Estado indicó que los niveles de financiamiento propuestos en lo económico y lo militar han servido de hecho como guía para las cifras de ayuda alcanzadas en los años fiscales de 1984 y 1985. Lo comprensivo de la política es evidenciado en la práctica con la notable expansión de los programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) dentro de la región, no sólo en cuanto a cantidad de fondos disponibles, sino en la amplitud de áreas donde penetra la influencia estadounidense.

Esta ayuda, percibida como ayuda no militar, puede ser categorizada en tres grandes rubros: ayuda para la estabilización económica, la pacificación y el apoyo al sector privado. Los fondos canalizados para cualquiera de ellos son administrativos en su mayoría por la AID.

El caso de El Salvador demuestra el grado más extremo de la nueva penetración norteamericana: allí los programas directos de la AID y los fondos ESF (*Economic Support Funds*)(16) financian proyectos en las múltiples esferas de: la organización del sector privado para la exportación de productos no tradicionales, organización de cooperativas campesinas, asignación de crédito rural, reubicación de la población civil (personas desplazadas), construcción de viviendas, programas de asistencia médica, entrega de alimentos, administración de hospitales y provisión de becas para estudios en los Estados Unidos. También se han canalizado los fondos de AID hacia la tecnificación y asesoría electoral, legislativa y la reorganización de todo el sistema judicial (17).

Aunque en menor grado, se da la ampliación de los fondos, programas y asesoría norteamericana en los demás países de la region. En el caso de Guatemala, a pesar de que la ayuda propiamente militar sigue por debajo de los niveles en otros países, desde 1984 AID extendió múltiples programas de pacificación. Concentró la mayor parte de sus esfuerzos en el Altiplano, donde el control para la implementación de estos fondos esta en manos de los militares.

En los casos de Costa Rica y Honduras (donde no se enfrenta una oposición armada) los programas de pacificación se perciben como preventivos. A la vez se articulan geográficamente con el proyecto contrarrevolucionario nicaragüense, y se ubican en las zonas fronterizas. Los fondos invertidos en la ampliación de la infraestructura física (carreteras, pistas de aterrizaje, etc.) hasta programas de acción cívica, asistencia médica y desarrollo comunal con la población indígena y campesina de las zonas (18).

Las propuestas de apoyo al sector privado, primero conocidas con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), recibieron un impulso a

partir de la adopción de las recomendaciones del IK. El uso de los fondos gubernamentales norteamericanos para fortalecer al sector privado de ultramar, en una lógica contradictoria, ha sido ampliado para promover además la privatización del papel de los gobiernos locales.

Siguiendo la misma tendencia se ha empezado la expansión de los Cuerpos de Paz en los cuatro países del Itsmo en donde, según el IK, deberían añadirse mil quinientos voluntarios entre 1985 y 1989. Su inserción local, contrario al rol tradicional de trabajo con los sectores pobres, está ahora estrechamente vinculado con el sector de la empresa privada.

Otra de las recomendaciones del IK, originalmente controversial pero ya en vías de implementación, es la asignación de fondos para el entrenamiento de las fuerzas policíacas de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En diciembre de 1985 el presidente Reagan recibió autorización para canalizar cincuenta y cuatro millones de dólares entre los cuales veintidós millones han sido destinados para la policía salvadoreña. Esta medida rompe con la prohibición legal impuesta en los EEUU desde 1974 para el caso de El Salvador, y para América Latina desde los años sesenta basada en una larga historia de abusos no tolerados por la opinión pública norteamericana (19). Dentro del escenario actual del conflicto centroamericano este hecho indica la extensión de la asesoría contrainsurgente al plano urbano; en el caso de El Salvador se ha empezado la reestructuración y el equipamento de la Policía Nacional.

En el aspecto militar el IK recomendó específicamente que los Estados Unidos deberían dotar al gobierno de El Salvador un aumento en su movilidad aérea y terrestre; aumentar sus niveles de entrenamiento, darles apoyo para "niveles más altos de fuerza", mayor abastecimiento de equipo bélico, mejorar la condición de sus tropas y su capacidad de evacuar y proveer atención médica a los heridos.

Estas recomendaciones formaron la base para la propuesta de aumento en la ayuda militar de parte de la administración, la cual incluye dos enmiendas para ayuda suplementaria en 1984 y una *continuing resolution* con el total de $197 millones de dólares por encima de las propuestas normales de ayuda fiscal. Para el año fiscal 1985, el Congreso aprobó $128.25 millones de dólares. En los dos casos, según el mismo informe especial, los niveles de ayuda se acercan a las propuestas originales del IK.

Sin embargo, los costos efectivos de la implementación de la política regional de Reagan no han sido determinados de manera precisa. Tomando en cuenta toda la actividad de maniobras, combates, logística, inteligencia, guerra psicológica, etc. -a los que Kissinger se refiere como "la espada militar" detrás de la política de paz- el costo anual supera las cifras oficiales. Un estudio norteamericano por expertos en asuntos presupuestarios sostiene que "sólo en el año 1985 los costos de la implementación de la política para Centroamérica y el Caribe suman aproximadamente $9.5 mil millones. casi ocho veces más del $1.2 mil millones reconocido oficialmente (20).

En efecto, como estos autores puntualizan, se puede tomar el ejemplo del programa del Fondo de Apoyo Económico (*Economic Support Fund*,ESP).

Por razones de relaciones públicas -y discursos al congreso- la administración Reagan cuenta el dinero de este programa como asistencia económica, aun cuando el Informe del Servicio de Investigaciones del Congreso sobre la Asistencia a Centroamérica, de Jonathan E. Standford (marzo 1984), estableció que "el programa del Fondo de Apoyo Económico en Centroamérica es básicamente un programa militar de seguridad llevado a cabo para apuntalar los regímenes existentes y a las élites que los apoyan".

Aunque los resultados esperados de parte de la administración después del refuerzo y reorganización de la ayuda norteamericana para la región no han sido lo conseguido a estas alturas, ello no afecta nuestra tesis de que los programas y proyectos implementados son de orientación kissingeriana.

2.2 La guerra de baja intensidad (GBI)

La lógica del Informe Kissinger coincide plenamente con la doctrina de contrainsurgencia revitalizada por el pensamiento militar norteamericano actual bajo el eufemismo de *guerra de baja intensidad (GBI)*. Algunos teóricos de la GBI consideran a la politica elaborada para Centroamérica el mejor ejemplo de este nuevo abordaje a los múltiples conflictos en el Tercer Mundo. Al elaborar de manera sintética lo esencial de la GBI se revelan las concordancias.

Este término (británico en su origen) designa el nivel de fuerzas que debe emplearse en los diferentes tipos de conflictos: desde lo nuclear, que representa una alta intensidad, pasando por lo convencional, hasta terminar con los conflictos de baja intensidad.

Esto último registra desde la desobediencia civil, la subversión, la insurgencia hasta la guerra de guerrillas y movimientos revolucionarios que apuntan al derrocamiento de los regímenes aliados a los Estados Unidos. Son visualizados como conflictos que no deberían exigir una respuesta de fuerza militar masiva (en términos de la escala norteamericana) para enfrentarlos. El énfasis está en la ampliación y sincronización de los aspectos militares con los políticos, económicos, psicológicos y diplomáticos, profundizando la participación norteamericana en todos, aunque el fortalecimiento del elemento militar es fundamental para garantizar el funcionamiento de la política en su conjunto.

En los conflictos de baja intensidad, los aspectos no militares juegan un papel mucho más importante en todos los niveles, desde lo estratégico hasta lo táctico.

> La diferencia principal entre operaciones militares en los conflictos de baja intensidad y los de mediana y de alta intensidad, se refiere a la naturaleza del éxito militar. En los últimos, el éxito se mide en términos de ganar campañas y batallas. En los conflictos de baja intensidad es lograr el *cumplimiento de los objetivos nacionales de los EEUU sin recurrir al combate prolongado.* (énfasis nuestro). Así es que la dinamica del conflicto -la

interacción de factores que determinan el resultado- es más (mucho más) amplia. (21)

La tarea norteamericana es lograr un apoyo consensual para librar estas guerras, consideradas las más proliferas y probables a ser enfrentadas durante lo que resta del siglo. En su afán de convencer a la comunidad militar y civil del aparato de seguridad nacional estadounidense, el Secretario de Defensa, Caspar Weinberger insistió (enero 1986) que uno de cada cuatro países del mundo está en guerra, haciendo referencia a las GBI, y trató ampliamente por qué era necesario declarar la guerra contra los movimientos de liberación a nivel mundial (22).

El IK, además de haber elaborado el contenido de una política coherente a implementar en Centroamérica, jugó la función de ubicar a los conflictos locales (Nicaragua y El Salvador), por sí solos insignificantes para la seguridad imperial, dentro de un marco en la búsqueda de retribuciones geo-estratégicas para la política exterior en su conjunto. Un poco más tarde se puso en evidencia esto con la llamada "Doctrina Reagan", o sea el interés de legitimar en todo el Tercer Mundo "conflictivo" su apoyo abierto y decisivo a los grupos contrarrevolucionarios y gobiernos contraisurgentes, planteados en su conjunto como una ofensiva antisovietica.

Como línea estratégica las GBI no requieren el empleo masivo de equipo bélico, capacidad de fuego y especialmente de la movilización de tropas norteamericanas. Sin embargo, el calificativo de baja intensidad no es correcto para describir y explicar la naturaleza real de la guerra.

Por un lado, porque la "doctrina" (si se puede llamar así) de la GBI mide el grado de intensidad de la guerra en función de las fuerzas militares norteamericanas involucradas en el conflicto (lo cual puede dar impresión de baja intervención); y por otro lado, porque desde la perspectiva de los países en donde se desarrolla el conflicto, la guerra es de alta intensidad por los efectos políticos, sociales, militares, económicos y hasta sicológicos que produce.

El denominador común entre los expertos de la GBI es su reconocimiento de que esta clase de guerra es más política que militar, principio que debe orientar la actividad contrainsurgente en todos los campos (social, económico, político-diplomático, militar, etc.).

En esta perspectiva, el objetivo principal del esfuerzo contrainsurgente o contrarrevolucionario no es, como en las guerras convencionales, la simple eliminación física del enemigo (movimientos de liberación nacional o gobiernos revolucionarios), sino su socavamiento paulatino, su aislamiento interno y externo: en suma, su deslegitimación como alternativa política o su desestabilización como poder político.

En términos militares, este cambio en la doctrina contrainsurgente tiene un significado estratégico. Aun cuando este aspecto de la contrainsurgente ya había sido descubierto y practicado por los norteamericanos en la guerra de Vietnam, y en forma parcial y mecánica en América Latina, nunca había sido articulado en forma integral y y con tanta coherencia en las fuerzas armadas norteamericanas y en las

locales.

El cambio estriba en que la población civil se convierte en el objetivo estratégico de la guerra. Se tratará de disputar la lealtad de la población a la guerrilla o al gobierno enemigo y, en el mejor caso, ganarla activamente para su inserción en el proyecto *contra*.

Se tratarían de combinar, en esta visión, los métodos de persuasión y la motivación hacia la población civil para enrolarla en la contra o reintegrarlos a la sociedad, con una menor dosis de violencia. No es casual que el componente más relevante de la GBI en sus programas sean las operaciones sicológicas.

La naturaleza de la violencia, en esta perspectiva de la GBI, sería de más bajo perfil, o como dicen algunos analistas: "pasar de la *represión masiva*, que no logra hacer una distinción entre guerrilla y población civil, entre el cuadro político de un gobierno revolucionario y un ciudadano común, a la *represión selectiva*... " (23).

El grado de eficacia de la violencia selectiva estaría directamente relacionado con la utilización a todo nivel de medios tecnológicos más sofisticados, para incrementar la capacidad técnica de la inteligencia (integración de la inteligencia regional: vuelos espías para detectar movimientos de tropas, de guerrilleros, de población desplazada, etc.; sistemas de computarización de información del enemigo, mejoramiento de equipo de radio comunicaciones; formación de redes de inteligencia en sectores de conflicto, etc.).

La modalidad principal de la GBI es la *guerra de desgaste o de agotamiento*, tras la cual subyace también la idea de utilizar las tácticas insurgentes contra los mismos o contra los gobiernos enemigos. Este intento pretende el objetivo de agotar y desgastar la capacidad funcional y operativa del enemigo, pero a partir de los diferentes frentes de la guerra: el diplomatico, para neutralizar la solidaridad internacional y aislar las fuerzas y gobiernos revolucionarios; el militar, manteniendo en movimiento constante a la insurgencia para desgastarla y en permanente tensión al ejército de la revolución; el económico, para desestabilizar los planes de desarrollo y generar descontento en la población, etc.

Consecuencia lógica de esta estrategia de desgaste y agotamiento es la tendencia hacia la prolongación de los conflictos, hacia la permanencia de la militarización de la región ("la militarización llegó para quedarse"), hacia fases difíciles de definir teóricamente, pero fáciles de determinar prácticamente por la secuela de costos sociales y políticos de las guerras largas.

En resumen, algunos factores que pueden contribuir a una lectura del desarrollo de la guerra en su nueva modalidad, serían los siguientes: (1) como objetivo principal las fuerzas contrarrevolucionarias pretenden disputar la población civil, por lo cual intentan penetrar y debilitar las retaguardias (políticas, no territoriales) de la insurgencia y de los gobiernos revolucionarios; (2) se trata de ver el avance del montaje de una infraestructura para el sistema de seguridad regional, que implicaría cambios en el rol del Comando Sur, su rearticulación con bases militares en territorio norteamericano y el entrenamiento, equipamiento y fogueo de las *Special Forces* para sus funciones

regionales; y (3) a tono con esta "doctrina" conceptual, y operativa de las fuerzas armadas locales, la readecuación de éstas a su nuevo rol.

Todo ello conformaría lo que se llama en la jerga de la GBI "la preparación total del área en conflicto". Este esfuerzo significa el empleo de activos militares, normalmente equipos pequeños, que puedan orientar operativos sicológicos y de inteligencia, comunicaciones, logística, e ingeniería en apoyo a los esfuerzos indígenas y al empleo de equipos tanto a nivel regional como nacional. El énfasis está en garantizar un éxito táctico, creando "estabilidad" regional y desarrollando infraestructura de inteligencia, logística y sicológica que reemplazaría a las fuerzas norteamericanas.

3. NICARAGUA: DESARROLLO DE LA AGRESION

La historia reciente de Nicaragua demuestra que la revolución social en los países del Tercer Mundo no puede hacerse sólo en contra de la clase social dominante o de su expresión dinástica. La revolución necesita prepararse para recibir también los embates más violentos desde la propia retaguardia estratégica de los sistemas de dominación contemporáneos: los Estados Unidos de Norteamérica. Ello, porque en su avance, los movimientos populares enfrentan de hecho "a un bloque de poder hegemonizado por el imperialismo, que articula en su dominación a ciertos grupos y fracciones de las clases dominantes locales, y cuyas formas de dominación política consisten, salvo excepciones, en variantes del autoritarismo y del estado de excepción" (24).

Aun antes del triunfo sandinista, cuando la dictadura somocista perdía capacidad de maniobra y la iniciativa militar pasaba al lado de los rebeldes, la administración norteamericana de turno asumía ya un rol directo y agresivo en defensa del tambaleante sistema.

Después de la fallida insurrección de septiembre de 1978 el gobierno norteamericano, asumiendo las posibilidades reales de un triunfo militar del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), recurrió a un proceso de mediación a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). Basó la gestión en su fuerza negociadora y en el presupuesto que las fuerzas comprometidas con la insurrección habían salido militarmente debilitades después de la prueba de septiembre.

La comisión mediadora -impulsada por los Estados Unidos y compuesta por un representante de ese país, uno de Guatemala y un tercero de la República Dominicana- debía establecer con la burguesía nicaragüense lo que llegó a conocerse como "somocismo sin Somoza": esto es, una salida que mantenía básicamente inalterado el esquema de dominación.

Más adelante se dio otra maniobra norteamericana, expresada en la iniciativa nuevamente impulsada a través de la OEA, consistente en la formación de una Fuerza Interamericana de Paz que interviniera en Nicaragua. Diecisiete países latinoamericanos respondieron "No"; algunos, inclusive, llegaron a romper relaciones con Somoza para apoyar abiertamente al FSLN.

En los últimos días de la ofensiva final, cuando la balanza favorecía

claramente a las fuerzas revolucionarias, el gobierno norteamericano echó a andar un nuevo plan, esta vez propiciando una intervención con fuerzas de la OEA destinada a parar el "derramamiento de sangre nicaragüense". Nuevamente el plan fracasó por la oposición que encontró en el seno de la organización.

En marzo de 1979 Monseñor Miguel Obando (arzobispo de Managua) y monseñor Pablo A. Vega. (obispo de Juigalpa) y otras personalidades, crean el llamado Comité de Reflexión Patriótica, cuyo objetivo era impedir la llegada al poder de los sectores revolucionarios o abrir paso a una alternativa socialcristiana. Una institución ligada a la protección de los derechos humanos (Paz Christie) en un informe revela que "...la parte de la iglesia actualmente en la oposición se alió al FSLN por razones estratégicas y temporales con el fin de hacer pasar más adelante su proyecto cristiano-demócrata en el seno de las deliberaciones del 17 de julio de 1979 en Caracas" (25).

Es importante hacer notar que esta actitud se repite actualmente en sus visitas a Washington en apoyo abierto a la contra, para respaldar y afianzar la legitimidad del financiamiento millonario a la contrarrevolución.

Finalmente, a principios de julio de 1979, varios helicópteros del ejército de los Estados Unidos fueron trasladados al aeropuerto de Liberia, al sur de Costa Rica, con el objetivo de impedir el abastecimiento de material de guerra y la llegada de nuevo personal al Frente Sur. La protesta del pueblo costarricense obligó que las naves abandonaran el país.

3.1. La agresión militar

El concepto de guerra total que contiene la doctrina de la seguridad norteamericana asume la casuística centroamericana como un conflicto regional único. Esta unidad está básicamente determinada por el rol que asigna a Nicaragua en la crisis regional y por la estrategia con que se le enfrenta: acoso total, al límite de la intervención directa.

Para este efecto, la agresión se lleva a cabo desde sus tres bases articuladas: los propios Estados Unidos, centro rector ideológico y material; los países del área alineados a su política, y las fuerzas contrarrevolucionarias que se han formado para legitimar el esquema en su conjunto y ser un instrumento directo de agresión.

3.1.1. Las maniobras

Prácticamente desde que la presente administración asumió su primer período, se iniciaron maniobras militares por parte de las fuerzas de tierra, aire y mar de los Estados Unidos, en cantidad, extensión y frecuencia sin precedentes en la región (26).

Estos supuestos ejercicios bélicos, llevados a cabo principalmente con las fuerzas armadas de Honduras, han implicado el emplazamiento de grandes unidades de guerra en ambas costas nicaragüenses y en los sectores fronterizos con Honduras y Costa Rica. En una actitud de abierta beligerancia, estas fuerzas han jugado un rol "disuasivo" permanente y se han constituido en pieza importante dentro del es-

quema de presiones militares contra Nicaragua.

El programa de maniobras militares está diseñado para obtener varios objetivos simultáneos, en concordancia con la actual política norteamericana.

En primer lugar, se trata de mantener abierta la opción de la intervención directa en Centroamérica, en particular contra Nicaragua, país objetivo de casi todos los ejercicios.

La estrategia explícita en la doctrina de guerra de baja intensidad (GBI) pareciera excluir el compromiso directo y masivo de fuerzas propias.

Efectivamente, la división del trabajo de la seguridad hemisférica otorga a los ejércitos locales la tarea de combatir las insurgencias que se desarrollan en sus países, mientras las fuerzas de Estados Unidos estarían para enfrentar las amenazas externas a ellos, ya sea con el uso unilateral o multilateral de fuerzas militares (TIAR).

La supuesta amenaza que Nicaragua constituye para la región (incluso para los propios Estados Unidos) denunciada insistentemente en la retórica de la actual administración, deja pie para interpretar a Nicaragua como una amenaza exterior, toda vez que representa la cabeza de playa del expansionismo soviético-cubano en el área. Si bien en la actualidad, el caso Nicaragua es tratado (combatido) con fuerzas locales (la contrarrevolución), la opción de tratarlo como amenaza externa, que justifique el uso directo de fuerzas norteamericanas sigue abierta, y las maniobras son la expresión material de esa preparación. En esa perspectiva, desde 1981 hasta la fecha, más de 75,000 efectivos norteamericanos han pasado por la región, cumpliendo un cuidadoso programa de familiarización con el terreno, clima y condiciones generales del área.

Esta rotación facilitada por las maniobras, ha permitido al Pentágono (aun contradiciendo al Congreso), completar la construcción en Honduras de una importante infraestructura militar permanente apta para la recepción, mantenimiento y base de operaciones para fuerzas norteamericanas (27).

Junto a lo anterior, las maniobras han permitido un permanente flujo de equipos y material de guerra para sus fuerzas aliadas de la región, y muy especialmente para el ejército contrarrevolucionario que lucha contra las fuerzas nicaragüenses.

Estos ejercicios suponen también el entrenamiento de las fuerzas locales, pero por su objetivo último de servir de preparación a las propias fuerzas de los Estados Unidos, se ejecutan en detrimento del ejército hondureño. Esta utilización ha provocado una crisis permanente dentro de este ejército, que se ha expresado en la destitución, por presión interna, de sus dos últimos jefes (28).

Una forma más sutil (aunque a veces descarada) de agresión con efectos tanto militares como sicológicos, son las violaciones aéreas de los Estados Unidos contra Nicaragua.

Vuelos recolectores de datos de inteligencia barren el territorio

nicaragüense con frecuencia suficiente como para mantener actualizada tanto la información táctica útil para las fuerzas contrarrevolucionarias como la estratética, para los planes de intervención. Para este fin se utilizan aviones C-130 especialmente equipados con aparatos electrónicos, que vuelan desde las bases del Comando Sur en Panamá.

Aunque con fines más políticos y sicológicos que prácticos, en abierta provocación, Estados Unidos ha llegado a emplear sus más avanzados aviones espías, los SR-71, utilizados sólo en momentos de grandes crisis internacionales. En 1984, ocho veces la población nicaragüense fue sobrecogida por la explosión del *boom* sónico originado por el vuelo de este avión sobre las principales ciudades del país.

3.1.2. La agresión regional

La alineación de los gobiernos y ejércitos del área con la política norteamericana ha sido evidente desde el mismo triunfo de la revolución. Esto es particularmente efectivo con Honduras, país que recibió y albergó al grueso de la guardia nacional de Somoza después de su derrota militar, brindándole ayuda efectiva para su reorganización y equipamiento militar.

Esta actitud hostil encabezada por Honduras y El Salvador -y a la que termina por sumarse Costa Rica, aunque en forma ambigua- no es solo diplomática, sino que constituye un compromiso activo con los planes agresivos de la administración norteamericana.

Por ser la opción militar la estrategia prioritaria contra la revolución sandinista, el compromiso de los países aliados con las políticas del Pentágono se expresa en este terreno aun a expensas de la autoproclamada neutralidad del gobierno costarricense, el cual, violentando su norma constitucional del año 1949 de no tener ejércitos, comienza un rápido proceso de militarización (29).

En este terreno dos son las áreas principales de acción. El otorgamiento de ayuda material, facilidades físicas y de todo tipo a las fuerzas contrarrevolucionarias (cuestión que se trata más adelante) y su propia preparación militar orientada a la "defensa" contra la agresión o amenaza nicaragüense.

Para este efecto, los esfuerzos colectivos se han centrado en la revitalización del CONDECA (Consejo de Defensa Centroamericano), alianza militar de la región fundada bajo los auspicios del Pentágono en 1964, con el objetivo explícito de "defender Centroamérica de la infiltración totalitaria". A raíz del conflicto armado entre El Salvador y Honduras en julio de 1969 (la "guerra del fútbol") esta organización había prácticamente sucumbido. Posteriormente, la caída de Somoza, principal sostén militar de la alianza, también había afectado su existencia.

Los primeros esfuerzos oficiales para revitalizar el CONDECA se realizaron en octubre de 1981, ocasión en que, con este objetivo, se reunieron el presidente de Guatemala, Lucas García, con los jefes de los Estados Mayores de Honduras y El Salvador. En esa ocasión, -a pesar de ser Nicaragua miembro fundador de la alianza- se plantearon abiertamente las posibilidades de crear, bajo los auspicios de esa

organización, una fuerza militar que sirviera de contención y eventualmente de agresión contra Nicaragua, basada en la unificación de los tres ejércitos.

Un mes más tarde, en noviembre, se reunieron oficiales de El Salvador, Honduras y Guatemala para la primera discusión de trabajo sobre aspectos orgánicos y de coordinación.

El impulso que significó esto para los planes agresivos regionales se manifestó públicamente en septiembre de 1982, cuando el entonces Ministro de Defensa de El Salvador, José Guillermo García anunció públicamente que su ejército tenía planes de contingencia para invadir Nicaragua, en conjunto con Guatemala y Honduras.

El primero de octubre de 1983, el CONDECA fue oficialmente reactivado, y expresamente se señaló su papel frente a la "amenaza sandinista". Asistió a esta reunión el General Paul Gorman, jefe del Comando Sur (30).

Sin embargo, aun manteniendo su vigencia como alianza y su presencia como eventual fuerza militar regional contra Nicaragua, el CONDECA no ha podido hacer avances organizativos sustantivos. Las difíciles relaciones entre Washington y los gobiernos militares guatemaltecos -por una parte- y el nunca superado recelo y desconfianza entre El Salvador y Honduras, han impedido avances sustantivos en su materialización.

Las dificultades militares internas, principalmente en El Salvador y Guatemala, también son escollos objetivos para el compromiso de efectivos militares en otras direcciones que no sea la propia.

A pesar de estas dificultades, la sóla existencia de esta alianza dirigida expresamente contra Nicaragua tiene connotaciones importantes. La principal de ella es el problema del cómputo de potenciales militares (correlación de fuerzas) que debe considerar la región para eventuales tratados sobre nivel de armamento.

Este es un punto nodal en la negociación que se viene desarrollando bajo los auspicios de Contadora. En el documento "Posición del Gobierno de Nicaragua en relación al nuevo borrador de tratados de Contadora del 12 de septiembre de 1985" (31), se explicita en los comentarios al punto: "2. Compromisos en relación a tropas y armamentos" lo siguiente:

> Naturalmente, Nicaragua está preocupada por la participación de países de Centro América, bajo la influencia de los Estados Unidos en aparentes acuerdos militares dirigidos contra la Revolución Nicaragüense.

y agrega más adelante:

> Nicargua aspira, por supuesto, el el alcanzar un balance (de fuerzas) razonable que pueda garantizar

nuestra seguridad, no sólo en relación a posibles acciones de cualquiera de nuestros vecinos, sino aun *vis-a-vis* una posible combinación de varios de ellos en acciones contra Nicaragua -como ha estado ocurriendo recientemente (32).

3.2 La agresión diplomática

Amargado y herido en su orgullo, después de conocer la derrota política parcial tras el rechazo de su pedido de cien millones a la contra nicaragüense en la Cámara Baja, Ronald Reagan develó la esencia de la ofensiva político-diplomática que en forma personal ha llevado en el congreso norteamericano contra Nicaragua Sandinista, al decir que "...hasta que estos hombres (los contrarrevolucionarios) **no *tengan éxito en su lucha por la libertad no habrá Paz en Centroamérica*** y no habrá paz en nuestros espíritus". (subrayado nuestro) (33)

Ello significa, en pocas palabras, que la ofensiva diplomática reaganiana tiene alcances regionales y hasta continentales, si se toma en consideración que la política actual de los Estados Unidos hacia Centroamérica es rechazada por la casi totalidad de los países de América Latina (con la excepción del Paraguay y Chile, y sus aliados regionales: El Salvador, Honduras y Costa Rica).

Pero, además de su significación general, esta ofensiva diplomática busca presentar como inviable o con pocos éxitos de estabilidad política, social y económica la opción revolucionaria que implique el rompimiento de los ancestrales lazos de dependencia con los Estados Unidos, que es precisamente el ejemplo que "exporta" la revolución sandinista.

Sin embargo, es preciso entrar al análisis de los detalles de esta ofensiva norteamericana contra la Nicaragua revolucionaria, en el escenario de la lucha político diplomática por la negociación de la mejor forma de matar este proyecto de redención de los oprimidos, para establecer luego su significación continental.

Los ataques en contra de la opción revolucionaria en Centroamérica, datan de la misma fecha en que estas alternativas tomaron fuerza en la región, con el ascenso al poder de los sandinistas en Nicaragua y la ascendente lucha de los pueblos salvadoreño y guatemalteco.

Ya en 1980, a fines de su gestión, el gobierno Carter reforzó la ayuda militar a El Salvador y cortó la ayuda económica para la reconstrucción de Nicaragua. La administración Reagan profundizó esta política en 1981, iniciando una escalada militar cuyos esfuerzos se concentraron en la destrucción militar del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y en la construcción de un ejército contrarrevolucionario con los restos de la guardia somocista, establecido en Honduras.

En noviembre-diciembre de ese año (1981) el Consejo Nacional de Seguridad norteamericana dio su autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para emprender acciones encubiertas en Centroamérica y construir el ejército contra por intermedio de militares argentinos.

Este acuerdo se erosionó con la guerra de las Malvinas en 1982, por lo cual los norteamericanos tuvieron que tomar en sus manos, en forma directa, la tarea de crear la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) con los antiguos oficiales somocistas (34).

El año de 1983 es decisivo para las maniobras político diplomáticas que pretendían mantener una guerra encubierta que se pone cada vez más al desnudo, especialmente por los fracasos de las fuerzas contrarrevolucionarias en conseguir sus objetivos comprometiendo los métodos sucios de la guerra encubierta. De esta época data la enmienda Boland que prohibe el financiamiento de estas operaciones.

Esto obliga a la administración norteamericana a reconocer por boca de Reagan, el 4 de mayo de 1983, que su gobierno estaba apoyando a "los paladines de la libertad" (como Reagan los llama) con el objetivo de destruir la revolución sandinista. Unos días antes Reagan se había dirigido a ambas cámaras, y había presionado a los congresistas opuestos a la ayuda a la contra, acusándolos de "culpables de la posible pérdida de Centroamérica en manos comunistas".

Como consecuencia de estas presiones, en noviembre de ese mismo año se dio un compromiso de ambas cámaras del congreso estadounidense, para proveer veinticuatro millones de dólares para la guerra "encubierta-descubierta" (Reagan pedía cincuenta millones).

Las maniobras políticas, la presión y amenaza y una campaña publicitaria muy bien montada por la administración Reagan, fueron involucrado al congreso norteamericano en la "danza de los millones" para la contrarrevolución. El reconocimiento público de Reagan a los contras pretende conseguir su legitimidad como fuerza política, lo cual es obtenido de hecho en el congreso, que ya no discute la naturaleza de esta fuerza, sino las cantidades, mecanismos de ayuda, quién dirige el esfuerzo militar, etc.

Después de la victoria política de la administración norteamericana con la invasión a Grenada, la oposición en el congreso se debilitó aún más, por lo cual 1984 fue el año cuando la ofensiva norteamericana contra Centroamérica alcanzó puntos álgidos, cuando el peligro de guerra regional estuvo a la orden del día.

La reelección para un segundo mandato de la administración republicana, aun cuando fue una victoria para los sectores más belicistas y fascistas de la contrarrevolución, se enfrenta a un gobierno sandinista legitimado interna y externamente por elecciones presidenciales y de diputados.

Sin embargo, la administración Reagan persiste con renovados esfuerzos en su cruzada por la legitimidad y representatividad política de sus pupilos nicaragüenses. Aún cuando en abril de 1985 el congreso no aprobó una partida de catorce millones, pocos meses después se otorgaron veintisiete millones amparados bajo el eufemismo de "ayuda humanitaria para los contras", que políticamente fue un paso más en la búsqueda del consenso bipartidista para la política Reagan hacia Centroamérica.

Con este refrendo de su política regional, en 1985 los norteamericanos profundizaron aún más la militarización de estos países: se involucró

cada vez mas a Honduras en apoyo a la contrarrevolución, se introdujeron los cohetes tierra-aire (que derribaron un helicóptero de la FAS), se militarizó a la guardia rural y se construyó la base militar del Murciélago en Costa Rica (a trece kilómetros de la frontera de Nicaragua), se incrementaron las maniobras militares, etc.

El año 1986 se inicia con dos visiones enfrentadas con respecto al conflicto centroamericano; por un lado, la administración Reagan trata de consolidar su estrategia militarista hacia la región y, por el otro, Latinoamerica representada por Contadora y el Grupo de Apoyo, haciendo esfuerzos por resolver el conflicto por la vía del diálogo y la negociación: su carta de presentación es la "Declaración de Caraballeda" del doce de enero de este año, aceptada por los cinco cancilleres centroamericanos en la toma de posesión de Vinicio Cerezo.

Prácticamente, una diplomacia que se apoya en la presión económica y militar, no puede sino entrar en contradicción con una diplomacia latinoamericana sustentada en el antimilitarismo, después de haber sido prisionera de las dictaduras militares pro-norteamericanas durante varios lustros.

En este sentido la "inmoral discusión" (como ha sido calificada por los sandinistas) de los cien millones en el Congreso, representa políticamente un enfrentamiento no sólo con Nicaragua sino, fundamentalmente, con la opción latinoamericana que rechaza la imposición monroista, para que prevalezca una posición bolivariana latinoamericanista.

Esto explica que frente a la iniciativa de Caraballeda y el voto negativo de la Cámara Baja a los cien millones, la administración norteamericana haya recurrido a una ofensiva diplomática, nombrando y enviando a su más exitoso diplomático como embajador itinerante en Centroamérica (el señor Philip Habib), y apelando con Napoleón Duarte a la táctica de la simetría, ofreciendo reactivar el diálogo con el FMLN si los sandinistas conversan con la contra, rematándolo con el descongelamiento de las conversaciones de Manzanillo.

Sin embargo, esta ofensiva diplomática es la cobertura del proyecto reaganiano que, en primer lugar, trata de legitimar a la contra en la Cámara Baja y en el seno del grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo (legitimar a los contra como interlocutores válidos en un proceso de negociación con el gobierno sandinista).

En segundo término, la ofensiva pretende ir remontando las trabas políticas del congreso, para el escalamiento de su presencia la cual eventualmente, creadas las condiciones puede desembocar en la invasión directa de Centroamérica con tropas norteamericanas.

Por otra parte, se pretende levantar la moral de la contrarrevolución regional, que no ha logrado destruir ni a los movimientos populares en Guatemala y El Salvador, y lejos de avanzar política y militarmente contra el sandinismo, se encuentra en un declive estratégico de sus fuerzas.

En este contexto se enmarcó la reciente maniobra montada por Estados Unidos alrededor de la publicitada "invasión" del ejército sandinista a territorio hondureño. Se trataría no sólo de presionar al congreso

para negociar la votación del quince de abril, alrededor de los cien millones, sino principalmente se pretendía involucrar al gobierno y ejército de Honduras en una participación más activa y directa de apoyo a la contrarrevolución, lo cual significa una mayor injerencia norteamericana en la dirección operativa de acciones de la contra.

Con esta maniobra Reagan logró que el Senado aprobara más fácilmente los cien millones, consiguió avanzar en el consenso al lograr un acuerdo de veinte millones en ayuda militar de emergencia para Honduras y fundamentalmente que este país reconociera su territorio como santuario de los contras, lo cual facilitará un apoyo más descubierto a estas fuerzas en el futuro.

Sin embargo, Reagan también logró aumentar la tensión en Centroamérica, reavivando el temor de una inminente regionalización del conflicto, y complicando con ello las gestiones pacificadoras de Latinoamérica, lo cual tendría su impacto negativo sobre cualquier posibilidad de acercamiento entre los gobiernos centroamericanos.

Y por si alguna duda cabe sobre la naturaleza anti-latinoamericana de la política estadounidense, basta leer lo que los Departamentos de Estado y Defensa de los Estados Unidos dicen en su más reciente documento sobre Centroamérica -"nosotros los estadounidenses debemos estar orgullosos de lo que estamos tratando de hacer en la América Central y orgullosos de lo que podemos hacer...., demostrémosle, al mundo que no permitiremos colonias comunistas hostiles aquí en la América del Sur, Centro y Norte" (35)- lo cual, sin complicar más el análisis, significa una declaración de guerra a Latinoamérica, pero cuyo frente de batalla más visible es Nicaragua.

3.3. La agresión económica

El arma económica ha sido una de las herramientas principales -si bien no muy conocida- del arsenal norteamericano en su empeño por deslegitimar el proyecto sandinista.

Desde sus inicios, esta agresión ha estado dirigida -junto a la guerra militar- a destruir las bases materiales de la revolución popular sandinista y con ellas, el original modelo de cambios sociales impulsado por ésta. Pero sobre todo y en última instancia, esta guerra se orienta a quebrar la voluntad de resistencia y perseverancia en el proyecto original de dirigentes y dirigidos, a saber, la mantención de la economía mixta, el estímulo al pluralismo político y los derechos humanos y el no alineamiento en la política internacional.

La técnica de desestabilizar vía el caos económico se había mostrado altamente eficaz en la experiencia chilena, en donde el proceso de cambios iniciado por el gobierno de Salvador Allende culminó con su derrocamiento y asesinato. Los sectores medios -fundamentalmente- incapaces de comprender y asumir el proceso histórico, se sintieron golpeados por el desabastecimiento, el boicot y el bloqueo, incitados al acaparamiento y la especulación y, finalmente, a sumarse al proceso sedicioso que, prometiendo la vuelta "al orden", desembocó en un cruento golpe y dictadura militar.

Para los estrategas de Washington, aquella experiencia les parece más que promisoria, toda vez que ahora se trata de un país pequeño,

desgastado por una costosa guerra de liberación y acosado por todos sus flancos y en todos sus frentes.

La guerra de liberación contra Anastacio Somoza, además del alto número de víctimas, dejó daños a la infraestructura económica nicaragüense que alcanzan, según estimaciones de CEPAL (Comisión Económica para la América Latina) un valor de $480.7 millones (36); ello, sin considerar la masiva fuga de capitales que tuvo lugar, en forma progresiva, durante los últimos años de la dictadura.

La difícil situación heredada de la guerra en sí es agravada por el relativamente alto endeudamiento externo dejado por el régimen derrocado. Efectivamente, tras su huida, los vencedores se encuentran enfrentando una deuda que asciende hasta los mil seiscientos millones de dólares, y que el gobierno de Nicaragua se ve forzado a reconocer como un compromiso nacional, a pesar del uso fraudulento que hiciera de esos recursos el gobierno precedente (37).

La singular campaña de agresión norteamericana ha adquirido múltiples formas. En rigor, Estados Unidos no ha escatimado oportunidad ni métodos para infringir a Nicaragua los máximos daños en el campo económico.

Esta agresión, que se comenzó prácticamente desde los inicios de la revolución, ha comprendido: la suspensión de toda ayuda bilateral procedente de Estados Unidos (acción que culminó con el embargo comercial total); la reducción de cuotas de importación; el veto, cuando no la presión directa y el chantaje en los organismos financieros multinacionales; presión en gobiernos y otras instancias para cortar el crédito y la ayuda a Nicaragua.

En el mismo renglón deben inscribirse las acciones militares encubiertas contra objetivos netamente económicos, como ha sido el minado de los puertos, la voladura de puentes y en general las acciones de las fuerzas contrarrevolucionarias, que en su mayoría están dirigidas a disrumpir pequeñas unidades económicas, evitando el enfrentamiento con las fuerzas de choque del Ejército Popular Sandinista. Esta característica permite adelantar que la guerra militar contra Nicaragua, más que destruir al ejército, está destinada, en el largo plazo, a desgastar y drenar los ya escasos recursos de la economía nicaragüense.

CUADRO 2
ATAQUES CONTRA REVOLUCIONARIOS A OBJETIVOS ECONOMICOS

CONCEPTO	1981	1982	1983	1984	1985*	(1981-1985)
Sabotajes a objetivos económicos	19	55	199	236	131	640

* primer semestre

FUENTE: *La Contrarrevolución: Desarrollo y Consecuencias.* Centro de Comunicación Internacional, Managua, julio 1985.

Como se mencionara en párrafos anteriores, el embargo comercial total no es sino la culminación de un escalamiento en la agresión económica por parte de Estados Unidos, que inició su fase de hostilidad abierta en 1981. Desde entonces la ayuda oficial bilateral fue cancelada, incluyendo aquélla que se encontraba en camino. Subsecuentemente fueron cortadas las garantías que otorgaba el Export Import Bank para financiar las exportaciones a Nicaragua.

Nicaragua fue expresamente eliminada del programa "Iniciativa para la Cuenca del Caribe", el plan de emergencia económica que Reagan lanzó en 1982 para ayudar a los países de Centroamérica y El Caribe (38).

El gobierno norteamericano ejerce sostenida presión en los bancos internacionales instalados en los Estados Unidos para evitar que éstos efectúen préstamos a Nicaragua (39).

También, desde 1981, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido una efectiva campaña para politizar las políticas de préstamos hacia Centroamérica en las instituciones financieras internacionales. En noviembre de ese año, arguyendo "problemas técnicos" se logró bloquear un préstamo por treinta millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, destinados a un proyecto pesquero. Este camino ha continuado hasta la intervención y amenazas mas directas, ello a pesar de las acusaciones que aun el propio congreso norteamericano ha reconocido, al "encontrar que Estados Unidos ha violado frecuentemente su anunciada postura de mantener la política fuera del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones financieras" (40).

Así y todo, el Secretario de Estado George Schultz, en carta dirigida al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, en enero de 1985, le expresó: (41)

> Le escribo para expresar la fuerte preocupación de mi gobierno por la posibilidad de una pronta consideración en el Panel Ejecutivo de un propuesto préstamo de $58 millones de crédito agrícola para Nicaragua. Entiendo que el préstamo propuesto saldría de los recursos ordinarios de capital del Banco y serían usados para apoyar la expansión de la producción de café, algodón, granos, azúcar y otras cosechas.
>
> Los Estados Unidos se oponen a una renovación de préstamos a Nicaragua por el BID en este período, por varias razones.

Después de presentar argumentos relacionados con técnicas financieras y la validez y eficacia de las políticas macroeconómicas del gobierno de Nicaragua, se esgrime que el alivio financiero que el préstamo significaría para el gobierno nicaragüense liberaría otros recursos para "consolidar el régimen marxista y financiar la agresión de Nicaragua contra sus vecinos, quienes son miembros solventes del Banco".

Y si la argumentación fuera insuficiente, se recurre a la amenaza abierta, al mencionar las posibilidades de cortar los aportes norteamericanos a dicha institución, dicho esto en términos diplomáticos:

> Existen pocas dudas que la aprobación por la Junta Ejecutiva del propuesto préstamo para créditos agrícolas a Nicaragua haría nuestros esfuerzos aún más difíciles. En un sentido más amplio, nuestro compartido objetivo de largo plazo de fortalecer al Banco Interamericano de Desarrollo y expandir su base de recursos sería *afectado* por la aprobación en la Junta de este propuesto préstamo. (42)

Como resultado de esta presión abierta, sin precedentes, se vieron frustadas las esperanzas y aspiraciones de aproximadamente cincuenta mil pequeños agricultores privados nicaragüenses, que esperaban modernizar sus granjas y duplicar su producción de maíz, frijol y granos.

Sin lugar a dudas, la medida que pretendía ser política y prácticamente más efectiva, por su espectacularidad y carácter, fue el embargo comercial total a Nicaragua, ordenado por el presidente Reagan el primero de mayo de 1985, invocando para ello nada menos que el Acta de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (*International Emergency Economic Powers Act*).

Estas sanciones incluyen, además del cese total de todo comercio con Nicaragua, la cancelación del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Nicaragua, y la suspensión de los servicios a los Estados Unidos de las aerolíneas nicaragüenses.

Los efectos, que por la gran dependencia económica de Centroamérica con el comercio norteamericano pudieron haber sido significativos, se vieron aminorados por las medidas punitivas previas que en ese terreno había tomado el gobierno norteamericano con Nicaragua.

Efectivamente, en mayo de 1983, y sin aviso previo, Estados Unidos había rebajado su cuota de importación de azúcar de Nicaragua en un noventa por ciento afectando con ello a cerca del cincuenta por ciento de las exportaciones de ese producto.

Cuestión similar había pasado el año anterior. En octubre de 1982, la Standard Fruit Co. había cancelado abruptamente sus operaciones en Nicaragua. Nicaragua exportaba el cien por ciento de sus bananos a Estados Unidos.

El cierre unilateral por parte de los Estados Unidos de todos los consulados nicaragüenses establecidos en su territorio, en junio de 1983, como represalia por la expulsión de diplomáticos norteamericanos en Managua sorprendidos en un complot para asesinar al canciller Miguel D'Escoto, también sirvió para dificultar las relaciones comerciales entre ambos países.

Esta incesante campaña que, como anotábamos al comienzo, comprende también acciones militares directas contra objetivos económicos, las que tratamos en el capítulo correspondiente, han significado un elevadísimo precio no tanto en el proyecto en sí mismo, como en el bienestar y disponibilidad de recursos del pueblo nicaragüense en su conjunto.

El efecto más evidente se expresa en la severa falta de divisas que sufre el gobierno sandinista, situación que se revierte a todos los

sectores del país, especialmente aquéllos dependientes de bienes y/o insumos importados.

El gobierno revolucionario ha respondido a la crisis económica generada por la agresión con flexibilidad y medidas redistributivas, cuidando en todo momento, dentro de las posibilidades y restricciones aumentar los servicios sociales, como salud y educación.

La diversificación del comercio exterior ha sido la otra forma de respuesta a la presión norteamericana en el campo económico.

Así como la comprensión de los resultados militares de la agresión pasa por la consideración del robusto apoyo político que tiene la Revolución, así también comprender la capacidad de maniobra -reducida, es cierto- para enfrentar la severa crisis económica generada por la agresión, pasa por el hecho de que los sandinistas gozan de un relativamente alto y bien organizado movimiento de masas como base de apoyo social. A través del tiempo y precisamente por el acoso abierto de los Estados Unidos, este apoyo ha ido derivando desde una simpatía meramente emocional hacia una adhesión militante, capaz de comprender y asimilar las dificultades crecientes que enfrenta la revolución tanto por la guerra como por la agresión económica.

El permanente descontento de las clases medias y de los estratos profesionales que, en el caso de Nicaragua, constituyen un sector relativamente pequeño, tiene una incidencia muchísimo menor que en el caso de Chile. El apoyo popular que goza la revolución popular sandinista, en última instancia, ha revertido los resultados esperados por los estrategas de la agresión, al convertirse ésta en un incentivo más de movilización y combatividad.

3.4. La guerra contrarrevolucionaria

La guerra contrarrevolucionaria articulada para derrotar el proyecto sandinista ha tenido un desarrollo acorde con dos variables. La primera, constituida por la definición o grado de consenso cada vez más preciso de los objetivos perseguidos por la administración y la comunidad de la seguridad norteamericana, y el rol que dentro de éstos se asigna a las fuerzas contrarrevolucionarias.

Y la segunda, la ineficacia de esta fuerza -en cada momento- para lograr los objetivos planteados.

Aunque desde la propia campaña eleccionaria, el equipo Reagan postulaba una política exterior agresiva (*roll-back*) (43), la obtención de un consenso operativo en torno a las fomas de su aplicación ha sido y todavía es una tarea inconclusa.

De allí que la justificación de la contrarrevolución haya recorrido desde "la interferencia a los envíos de armas de los sandinistas a las guerrillas de El Salvador"; "la presión para que los sandinistas cambien de actitud y moderen sus relaciones con Cuba y la URSS", hasta "el derrocamiento del gobierno sandinista".

En este proceso de desarrollo es posible distinguir dos etapas marcadas por el carácter de las fuerzas contrarrevolucionarias y por la intensidad de las acciones militares. La primera va desde 1979 hasta

comienzos de 1983, y la segunda, desde 1983 hasta la fecha.

3.4.1. Los primeros pasos (1979-1983)

Recuperados del impacto provocado por el triunfo de las fuerzas guerrilleras, los ex-miembros -oficiales y clases- de la guardia nacional de Somoza que habían alcanzado territorio hondureño comenzaron, desde sus campamentos de refugiados, a incursionar sobre territorio nicaragüense en pequeñas bandas.

A pesar de carecer de una organización definida y de objetivos precisos y de estar mal equipados, estas bandas somocistas estaban alentadas por su certeza de que los "chavalos sandino comunistas" no podrían constituir gobierno estable. Así, pequeños grupos cruzaban la frontera para hostilizar a los destacamentos milicianos y sobre todo contactar a sus parientes, pues muchos de los guardias eran originarios de las zonas norte del país.

Alientan estas actividades los miembros del ejército hondureño, (que se sienten amenazados por la nueva fuerza político-militar que surge en la nación vecina) y, sobre todo, la actitud abiertamente hostil hacia los sandinistas que muestran los ejércitos de El Salvador y Honduras. A comienzos de 1980 ya eran frecuentes las violaciones del espacio aéreo nicaragüense por parte de aeronaves hondureñas, así como el ingreso al territorio nicaragüense de destacamentos hondureños. El hostigamiento a las noveles tropas guarda-frontera del Ejército Popular Sandinista por grupos armados de veinte a treinta personas comienza a hacerse cada vez más frecuente.

Este accionar creciente con el abierto consentimiento de las autoridades hondureñas comenzó a cobrar sus primeras víctimas. El treinta de julio de 1980, una emboscada a una lancha transportando alfabetizadores en el departamento de Jinotega, provocó la muerte de tres civiles y otros tantos heridos. Esta acción dio origen a la primera de una interminable serie de notas de protesta al gobierno hondureño, en las que se denuncia su tolerancia con este tipo de hechos (44).

Además de los campos militares con que los ex-guardias disponen en territorio hondureño, se hacen públicas las denuncias de la existencia de campos de entrenamiento en Florida (Estados Unidos) y Guatemala. En marzo de 1981, el Departamento de Justicia de Washington desechó la solicitud de investigar los campos de entrenamiento militar que usan los refugiados somocistas en Estados Unidos.

Después de la ofensiva desarrollada por el FMLN en 1981, en El Salvador, la administración Reagan tomó la decisión de -entre otras medidas- expandir la presencia militar de los Estados Unidos en toda la cuenca del Caribe a través de grandes maniobras militares; acrecentar la capacidad de recolección de inteligencia de la CIA en Centroamérica; preparar los planes de contingencia para acciones militares directas en la región e iniciar las operaciones paramilitares encubiertas contra Nicaragua.

De las propuestas presentadas por la CIA en diciembre de 1981, el presidente autorizó a esa entidad a realizar operaciones encubiertas contra Nicaragua, como asimismo crear una fuerza que asistiera con personal y medios a la misión del ejército argentino que organizaba

un ejército contrarrevolucionario con los refugiados de la ex-guardia nacional nicaragüense en Honduras (45).

Con estos esfuerzos y financiamiento se logró unificar las distintas organizaciones que se habían dado los diferentes estamentos del ejército de Somoza que estaban en Honduras (ver cuadro 3). Surge así la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que incorpora también a la organización miskita MISURA, dirigida por Stedhman Fagoth.

CUADRO 3
ESTRUCTURA Y DESARROLLO ORGANIZATIVO DE LA CONTRARREVOLUCION NICARAGUENSE

Organización de las fuerzas Contrarrevolucionarias	COMPOSICION	AÑO
1. Ejército de liberación nacional (ELN)	Ex-miembros de la guardia Nacional (GN), sin grados.	1980
2. Alianza Democrática Revolucionaria Nicaragüense	Ex-Oficiales de la GN	1980
3. Legión 15 de Septiembre	Ex-Oficiales Cúpula de la GN	1980
4. Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN)	Alianza de las tres anteriores	1981
5. M I S U R A	Indígenas en posición contrarrevolucionaria	1981
6. Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE)	Fuerzas contrarrevolucionarias lidereadas por Pastora.	1982
7. MISURASATA	Indígenas en posición contrarrevolucionaria	1982
8. Unión Nacional Opositora (*UNO*)	Alianza fracción de *ARDE*, *FDN*, KISAN y otros.	1985
9. Unión de Indígenas Costeños de Nicaragua (Kisan guerrerista)*	Indígenas en posición contrarrevolucionaria y representantes MISURA y MISURASATA	1985

FUENTES

1. Centro de Comunicación Internacional, *op. cit.*
2. "La contra: Corrupción y grietas". *Pensamiento Propio*, (INIES/CRIES, Managua), núm. 22 1985, pág. 33.
3. *Barricada Internacional*, Managua, 21 de noviembre, 1985, pág. 5.
4. *Barricada Internacional*, Managua, 28 de noviembre, 1985, pág. 7.

La primera campaña político militar diseñada para estas fuerzas es la que se conoce como *Plan Navidad Roja*. Este plan, que debía ponerse en marcha en diciembre de 1981, pretendía, a través de una ofensiva generalizada lanzada desde Honduras por fuerzas contrarrevolucionarias, realizar un levantamiento masivo en la población indígena de la Costa Atlántica. El objetivo: establecer una cabeza de playa que posibilitara la creación de un gobierno provisional, y la consiguiente ayuda militar internacional (de Honduras y los Estados Unidos).

Para mediados de 1982, el FDN se había transformado en un pegueño ejército bien equipado y profesionalmente entrenado de alrededor de cuatro mil quinientos hombres (ver cuadro 4).

Durante los años 1980 a 1982, las fuerzas contrarrevolucionarias concentran su accionar en las zonas fronterizas del norte del país, desde donde intentan incursionar esporádicamente hacia el interior del territorio.

También el sureste del país comenzó a verse afectado por la presencia contrarrevolucionaria. En 1982 se conformó la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) con sede en la región norte de Costa Rica. A ella se sumó la organización miskita MISURASATA, jefeada por Brooklin Rivera. A estas fuerzas, a finales de 1982, se le atribuía una dotación aproximada entre mil y mil quinientos hombres. Su entrenamiento era pobre y su instrucción militar muy primaria.

En este período se evidenció la participación directa de la CIA, no sólo en la formación, instrucción, equipamiento y dirección de las fuerzas contrarrevolucionarias. Operaciones de sabotaje sofisticado, como la voladura de los puentes de Río Negro y Ocotal, comprueban la participación directa de sus efectivos en acciones dentro de Nicaragua.

Contando con el apoyo oficial del gobierno norteamericano y con recursos de importancia, las campañas desarrolladas por la contrarrevolución en este período se fundamentaron en ataques a poblados menores, emboscadas e intimidación a través del asesinato, a los agitadores y dirigentes campesinos de las zonas rurales. La imposibilidad de liberar algún poblado, y mucho menos de encender una insurrección en contra del FSLN, exigió un replanteo por parte de los analistas de Washington. Era preciso apurar la marcha.

3.1.2. La guerra encubierta-descubierta (1983-1986)

Los fracasos contrarrevolucionarios, fundamentalmente en el campo político, determinaron el diseño de una estrategia que incorpora los elementos propios de una fuerza insurgente, capaz de generar bases sociales y con ella, la posibilidad de formar una retaguardia interna que le permita profundizar su accionar en el territorio, y ganar autonomía logística-operativa. Ello constituirá una base social y política de legitimación tanto interna como externa.

Las derrotas militares, por su parte, planteaban la necesidad de ampliar la dotación de combatientes; los recursos materiales ya existían.

CUADRO 4
FUENTES PRIVADAS DE AYUDA A LA CONTRA REVOLUCION

GRUPOS Y ORGANIZACIONES	TIPO DE AYUDA
1. Liga Mundial Anti-comunistas	Pertrechos no letales y equipo acuático.
2. La Comisión Costeña	Pertrechos no letales.
3. Reserva de defensa	Pertrechos no letales.
4. Ayuda civil militar	Pertrechos no letales, financiamiento, asesoría, participación directa.
5. Asociación de Comandos Aéreos	Pertrechos no letales.
6. Veteranos de Guerras Extranjeros	Pertrechos no letales, ayuda económica.
7. Fondo de Refugiados Nicaragüenses	Ayuda Económica.
8. Causa Internacional	Financiamiento.
9. Asociación Patriótica Nicaragüense	Ayuda Económica.
10. Conservative CAUCUS Inc.	Campañas de apoyo.
11. U.S. Defense Committee	Campañas de apoyo.
12. Soldier of Fortune	Reclutamiento mercenarios, asesoría.

FUENTES: Centro de Comunicación Internacional, *op. cit.* y "Estados Unidos Centroamérica". CINAS (México, D.F.), núm. 3, mayo-junio 1985.

Composición y base social de la contrarrevolución- De todas las fuerzas contrarrevolucionarias efectivas, la fuerza principal y negemónica (y que monopoliza la ayuda norteamericana), es el FDN.

Su cúpula de mando militar y parcialmente su articulación orgánica está conformada por ex-miembros de la guardia nacional de Somoza (46). El resto del mando y el grueso de sus tropas está constituido por campesinos. Completan este cuadro -marginalmente en términos cuantitativos- asesores extranjeros, mercenarios y nicaragüenses provenientes de otras capas sociales.

El sesgo político incorporado al esquema de guerra que las fuerzas del FDN comenzaron a desarrollar en sus áreas de operaciones a partir de 1983, les otorgó un éxito inicial.

Lograron desarrollar una incipiente base social en las zonas donde, por su lejanía y ausencia de una presencia militar sandinista constante, les permitía movilizarse con mayor facilidad. En estas zonas, comenzaron a situar sus principales fuentes de reclutamiento, como asimismo, las bases de sus redes de información y abastecimiento, las que paulatinamente empezaron a adquirir importancia (47).

Aunque sin proyecto político, la presencia contrarrevolucionaria logró capitalizar para sí frustaciones, descontentos y temores que se habían generado entre el campesino de esas remotas áreas. Factores económicos, derivados de la ruptura de sus redes de servicio, comercialización y abastecimiento; factores ideológicos, producto de la propaganda contrarrevolucionaria que emplea imágenes religiosas para distorsionar el proyecto sandinista; y simplemente por descontentos originados por la forma en que se llevó (o no se llevó) la transformación social al campo.

Las concepciones de la guerra que se manejaban hasta entonces por parte de las autoridades del EPS, habían determinado un empleo de las fuerzas y maniobras propias de un ejército regular, sin vinculación profunda y sostenida con la gente de las regiones, en las que además operaba esporádicamente y muchas veces en forma un tanto indiscriminada.

Las incursiones de la contrarrevolución, a pesar del sesgo político que tratan de dar a sus acciones, no están exentas del amedrentamiento terrorista; por el contrario, esta característica se mantiene como constante de su accionar. Una prueba ilustrativa de la nueva modalidad política del FDN la constituye el famoso manual producido por la CIA para estas fuerzas, conocido como *Manual de Operaciones Sicológicas* (48).

El repunte cualitativo y cuantitativo que experimentaron estas fuerzas durante 1983 y parte del 84, que se expresó en un mayor accionar militar y en la profundización y expansión territorial de sus acciones, no logró tampoco conseguir triunfos militares de importancia, ni liberar algún poblado importante, ni mucho menos obtener alguna presencia en las zonas más pobladas de occidente y en sus áreas urbanas.

También el FSLN y el EPS comprendieron mejor la situación y adecuaron su operar a las nuevas condiciones. Ello provocó una reversión de las tendencias contrarrevolucionarias previas. Comenzó a debilitarse el apoyo en las zonas donde previamente habían logrado alguno y militarmente sufrienron golpes importantes, por lo cual acentuaron su campaña de terror y secuestro para recomponer sus fuerzas, al grado de convertir esta práctica en su única base de sustentación.

La ayuda masiva de los Estados Unidos (que buscan desesperadamente una brecha para permitir avances en su estrategia) determinó que, de cuatro mil quinientos hombres que tenía en armas el FDN en 1982, alcanzaran a unos quince mil en 1984.

La organización y operatividad militar de la contrarrevolución -El salto cualitativo de la segunda etapa consolidó la estructura orgánica de las fuerzas militares del FDN, al intensificar la ayuda material, la asistencia técnica de la CIA y la masa de combatientes.

Orientados hacia una lucha fundamentalmente irregular, desarrollan una organización cuya unidad operativa básica es el comando regional destinado a asentarse y operar en una zona dada. Estructuran nueve comandos regionales, con dotaciones que fluctúan entre quinientos y mil hombres (49).

Cuentan además con comandos operativos, un tipo de fuerza especial destinada a tareas en todo el teatro. Para planes específicos, misiones y dislocación de fuerzas consideran otras unidades como las fuerzas de tarea, unidades tácticas y destacamentos.

CUADRO 5

CANTIDAD DE IRREGULARES DE LA CONTRARREVOLUCION POR ANO (1981-1985)

(Cifras estimadas)

ORGANIZACIONES CONTRARREOLUCIONARIAS	1981	1982	1983	1984	1985
F D N	N/D	4,500	12,000	15,000	10,000
A R D E	-	1,000	2,500	1,000	1,500
M I S U R A	N/D	N/D	N/D	N/D	1,000 a/2,000
M I S U R A S A T A	-	N/D	N/D	N/D	500 a/1,000
K I S A N	-	-	-	-	500 a/1,000
TOTAL ESTIMADO /a.	-	5,500	14,500	16,000	15,500

NOTAS: /a. Tomando en cuenta cifras más altas.

FUENTES: 1. "Estados Unidos-Centroamérica". CINAS, *op.cit* núm. 3, mayo, 1985.

2. Conferencia de Prensa del Vice-ministro de Defensa y Jefe del Estado Mayor, Gral. del EPS, Joaquín Cuadra Lacayo, Managua, Nicaragua, 14 de octubre, 1985.

3. "Kisan: Un conjunto unívoco". en *Barricada Internacional.* núm. 184, *op. cit.*

4. Ver además: "Congress and the Not-So-Secret War Against Nicaragua (A preliminary analisis)". Philip Brenner y W.M. Leogrande. Washington, DC., 1985, p. 4 (mimeo).

En la cúpula militar se organizan con una comandancia y estado mayor que comprende todas las funciones tradicionales, e incluyen hasta un tipo de fuerzas armadas, que es la fuerza aérea, con unidades de transporte (C-47), helicópteros (H-500 y UH-1) y aviones de apoyo de fuego (*Push and pull*). Sus bases permanentes, centros de instrucción, etc., se encuentran fundamentalmente en las zonas fronterizas del terrritorio hondureño, concentrándose frente a los departamentos nicaragüenses de Chinandega, Madriz y Nueva Segovia, en la zona occidental; y frente a Zelaya Norte en el extremo oriental (50). También en Tegucigalpa cuentan con instalaciones de apoyo.

La retaguardia táctica o inmediata de las unidades que operan dentro del territorio se sitúan en las propias zonas de guerra, lugares en donde incluso llegan a mantener campamentos de instrucción, hospitales y puestos de mando. En estas áreas montan redes de abastecimientos, buzones para armas, correos, etc.

Su retaguardia operativa o próxima se encuentra en sus bases en el territorio hondureño, en donde gozan del apoyo abierto de las fuerzas armadas locales y de la tolerancia más amplia de las autoridades políticas. Gracias a esto, la cuantiosa ayuda militar que fluye desde los Estados Unidos, llega a estos lugares desde donde es distribuida a las bases, normalmente en los medios de transporte del ejército hondureño. Desde esta retaguardia operativa, el abastecimiento es distribuido a los comandos regionales que se encuentren operando dentro de Nicaragua por vía aérea, terrestre y fluvial (51).

Las características táctico-operativas-La imposibilidad de lograr triunfos militares importantes se refleja en los planes operativos (campañas militares) desarrolladas en la segunda fase de su ofensiva, y en la frustación de los objetivos planteados en cada uno de ellos.

En marzo de 1983, con el Plan Siembra, se pretendió tomar la ciudad de Jalapa, centro urbano medio situado próximo a tres kilómetros aproximadamente de la frontera con Honduras, en el departamento de la Nueva Segovia. En septiembre del mismo año prepararon un dispositivo para tomarse las ciudades norteñas de Ocotal y Somoto, y a fines del mismo año, insisieron con una ofensiva contra Jalapa y pueblos aledaños.

El supuesto que sustentaba estos esfuerzos era el levantamiento que debía originarse en estos lugares en apoyo a las fueras contrarrevolucionarias. La situación que esto debía originar y el necesario despliegue militar masivo sandinista en la propia frontera hubieran creado condiciones propicias para que al menor incidente -real o ficticio- intervinieran las fuerzas hondureñas. Fallidos los supuestos ningún plan se cumple.

Desechada la prioridad operativa anterior, y frente a los avances que experimentaba el Ejército Popular Sandinista, los planes siguientes se destinaron a campañas contra organizaciones asociadas al Frente Sandinista en el campo, a través del secuestro y asesinatos, y la destrucción de la infraestructura económica. A partir de entonces, se trata de una guerra de desgaste, proyectada -a pesar de sus optimistas vaticinios- para un más largo plazo.

Así, en 1984 y 1985, se intensificaron los ataques a los objetivos

económicos. La contrarrevolución cuenta con el apoyo abierto de la CIA y del gobierno norteamericano para estas operaciones, por lo cual destacan su número y su grado de sofisticación técnica.

Sobresalen numerosos ataques aéreos a ingenios azucareros, puestos militares e infraestructura de comunicaciones. Los principales puertos nicaragüenses son minados, situación que afecta gravemente a barcos nicaragüenses y extranjeros. Numerosos medios de transporte incluyendo los medios fluviales que unen a la Costa Atlántica afectan la comunicación terrestre en varios sectores del país.

Las fuerzas del FDN que operan dentro del territorio nacional y que en los períodos de mayor actividad (83-84) alcanzaron -calculamos- alrededor de seis mil hombres, rehuyen el combate con las fuerzas de choque del EPS, salvo cuando deben romper algún cerco o requieren de acciones diversionistas para la infiltración de fuerzas o aliviar el acoso a alguna de sus fuerzas.

La constante presión de la administración Reagan para que, a través de alguna acción exitosa logren cierto grado de legitimización como fuerza efectivamente beligerante, les ha llevado a intentar emprender algunas acciones espectaculares, como fue la incursión de agosto de 1985 al poblado de La Trinidad, en Estelí, situado a más de cien kilómetros de la frontera con Honduras. Aunque exitosa como intento de infiltración a la profundidad, la operación significó prácticamente la eliminación de la unidad incursora (52).

Como forma táctica y de acuerdo a sus objetivos emplean la concentración y desconcentración de sus fuerzas. Para ello cuentan con un eficaz sistema de comunicaciones y cada vez se sirven más de la inteligencia provista por los sofisticados sistemas de exploración electrónica y aérea desplegados directamente por los Estados Unidos.

Enfrentadas, sin embargo, a las profundas transformaciones orgánicas y operativas del EPS, la desconcentración se transforma en una dispersión, acosados permanentemente por los Batallones de Lucha Irregular.

Los intentos de llevar la guerra a las ciudades, para marcar su presencia y aliviar sus regiones de operación en las montañas se vieron frustradas, pagando por el intento un alto precio.

Comprometida en una lucha irregular, la contrarrevolución no ha logrado articular una retaguardia local de significación en las zonas de guerra, ni mucho menos cuenta con referentes políticos en las ciudades. Ello le origina limitaciones de toda índole, siendo la principal la dependencia absoluta que tiene de la ayuda norteamericana para sobrevivir, hecho reconocido tanto por la administración Reagan como por los más conspicuos voceros del FDN (53).

Esta situación determina que la contrarrevolución nicaragüense asuma más la forma de fuerza expedicionaria que emplea métodos de lucha irregular, antes que una fuerza guerrillera insurgente.

4. CONSECUENCIAS: EL PROYECTO DE SUPERVIVENCIA

4.1. La militarización defensiva

4.1.1. Origen y doctrina del Ejército Popular Sandinista

El ejército de Nicaragua es el más joven de la región. Su creación, a partir del triunfo de la revolución, implicó la transformación de fuerzas y columnas guerrilleras en un ejército regular.

El criterio prevaleciente para su formación obedeció, por una parte, al afán de las nuevas autoridades por recomponer el aparato estatal, incluyendo las que serían sus fuerzas armadas. Esta necesidad se hacía evidente frente a la derrota total del ejército de la dictadura, cuyas fuerzas diezmadas habían huido, principalmente a Honduras, dejando tras sí instalaciones semidestruidas. Había que partir desde la nada.

Existía, sin embargo, una poderosa razón de fondo que exigía a la vanguardia dar prioridad a la pronta organización de su aparato militar: la percepción de que el peligro principal que debía enfrentar el proceso revolucionario era una agresión directa encabezada por los Estados Unidos.

Se abordaron, en consecuencia, dos tareas principales: la incorporación de las masas a la defensa y la estructuración de los órganos permanentes de la defensa, sus instituciones regulares: el Ejército Popular Sandinista y el Ministerio del Interior (MINT).

El cumplimiento de estos objetivos incorpora tres elementos reguladores. Uno, de carácter pragmático, es el constreñido marco económico disponible, producto del saqueo de la dictadura y de la guerra misma. Los otros dos son eminentemente políticos, producto tanto de la experiencia insurreccional como del propio proyecto revolucionario. De aquélla se deriva la concepción popular de defensa, y del proyecto revolucionario, el carácter netamente defensivo de su doctrina militar.

El resultado práctico es la decisión de desarrollar fuerzas armadas altamente profesionales y eficientes, en torno a las cuales se articularían las distintas formas de participación popular para la defensa.

Esta determinación se sustentó en la evaluación estratégica que se hizo después del triunfo, basada en los primeros indicios de la política norteamericana hacia la revolución. Se apreciaron entonces dos enemigos potenciales: el imperialismo norteamericano y las fuerzas reaccionarias de la región, y asimismo, aunque como peligro menor, la incipiente contrarrevolución que comenzaba a manifestarse en las bandas de ex-guardias somocistas que operaban desde Honduras.

Se concibió entonces la hipótesis inicial de guerra como defensiva y popular. Esta, de darse, tendría la forma de guerra regular en las direcciones y teatros principales, con manifestaciones marginales y complementarias de lucha irregular, representadas por las bandas contrarrevolucionarias.

El problema inicial que se enfrentó fue precisamente la transformación de las fuerzas guerrilleras y milicianas en un ejército nacional, regular y profesional. Ello implicó -para empezar- aglutinar bajo un sólo mando militar las diversas columnas y grupos, de por sí dispersos y tendientes al caudillismo. El proceso no estuvo exento de dificultades.

Por una parte, la mentalidad y estructura guerrillera se resistía tenazmente a las transformaciones que implican exigencias completamente nuevas a jefes y soldados en el terreno de la disciplina, formas y normas de vida, etc. Y, por otra parte, se enfrentaban serias carencias de recursos materiales necesarios para el montaje de un ejército regular (54).

Sin perjuicio de lo anterior y partiendo de las premisas básicas enunciadas más arriba, se inició el desarrollo sostenido del EPS. Esto comprendió la organización y consolidación de las armas fundamentales: infantería, artillería, blindados, ingenieros, fuerza aérea, marina, etc.

Paralelamente, y con el objetivo expreso de "contrarrestar la actividad terrorista y de vandalismo que realizaban las primeras agrupaciones armadas de la contrarrevolución" (55) se crearon las Pequeñas Unidades de Lucha Contra Bandas Somocistas (LCBS). Estas, como su nombre indica, eran pequeñas unidades independientes destinadas a la lucha irregular. Su dimensión y táctica se ajustaba a las características de la contrarrevolución en sus primeros pasos: bandas pequeñas dedicadas al vandalismo, al robo, asesinato de dirigentes, etc.

Mientras estas LCBS recorrían las montañas, las unidades permanentes del EPS se dedicaban a la preparación combativa, que les permitiera asimilar la moderna técnica de combate que se incorporaba al ejército.

Elemento importante a destacar como característica del proceso en análisis, y que no se repite en ningún otro ejército de la región, es la incorporación masiva y voluntaria de la población a las tareas de la defensa, a través de las milicias populares.

Completada la fase inicial de organización del ejército, que contiene la concepción de guerra regular a la que está destinado, se normó la participación popular a través de la Ley de Creación de las Milicias Populares Sandinistas (MPS) en febrero de 1980. En esta ley se establecen los mecanismos de articulación orgánica entre las fuerzas populares y las regulares. Más adelante, en octubre del mismo año, se reglamentó y estableció la voluntariedad de la participación, como asimismo, la ayuda material a que los milicianos tienen derecho.

A medida que el asedio contrarrevolucionario fue creciendo y las LCBS se mostraron insuficientes, se evidenció la necesidad de destinar más y mayores unidades militares para enfrentarlo. El esquema defensivo levantado sobre las hipótesis iniciales comenzó a sufrir variaciones. En el año 82 entraron a participar como base del sistema defensivo los Batallones de Infantería de Reserva (BIR), unidad básica militar compuesta por milicianos voluntarios, movilizados por seis meses.

La composición heterogénea de estas unidades de milicianos, su insu-

ficiente experiencia y limitada preparacion combativa evidenciaron una desventaja operativa en relación a las fuerzas de tarea somocistas, que se presentaban al teatro mejor preparadas y equipadas. Esta situación permitió a las fuerzas contrarrevolucionarias disputar la iniciativa, al emplear una acabada táctica de lucha irregular.

Ya en 1983, las operaciones contrarrevolucionarias habían adquirido el carácter de una guerra irregular en gran escala, con un extenso teatro de operaciones. Este escalamiento amenazó con sobrepasar las capacidades del pequeño ejército regular y de sus milicias no profesionales, conjunto que, aun con sus deficiencias y limitaciones, todavía logró neutralizar los planes del FDN.

La hipótesis de que las pequeñas bandas contrarrevolucionarias sólo jugaban un papel complementario marginal en preparación de la estrategia norteamericana de invasión, resultó superada por los acontecimientos. La agresión en sí estaba presente.

4.1.2. La movilización defensiva

La nueva etapa que se inició a fines de 1983, se profundizó en el 84 y consolidó en 1985, comprendió dos cambios importantes. Por una parte, se recuperó el sentido político de la guerra, principalmente en relación al papel del campesino en las zonas afectadas; y por otra, privilegió la forma irregular, masificándola y extendiéndola.

En cuanto a lo primero, se buscó dar coherencia a las acciones militares con un marco político económico mayor destinado a las zonas afectadas por la presencia contrarrevolucionaria. Este esfuerzo se inició con la propia reorganización de las estructuras del Frente, que le permitieron aunar la dirección político militar. Se revisaron los planes de asentamientos, las políticas agrarias, la reanudación de los servicios, etc.

Con afan se buscó la consolidación -un tanto descuidada- de la alianza con el campesinado sin tierra, impulsando su organización. La burocracia generada en torno a la reforma agraria comenzó a ser desmantelada y sensibilizada a través de la propia y activa participación campesina.

En resumen, a través del análisis y la autocrítica, se fortaleció la concepción de que la defensa requiere de acciones socioeconómicas dirigidas a consolidar políticamente las fuerzas de la revolución.

El complemento propiamente militar comprendido en la readecuación necesaria para enfrentar la escalada agresiva, es la creación de una gran capacidad ofensiva irregular. Para conseguir este propósito, entre agosto y octubre de 1983 se discutió y aprobó la Ley del Servicio Militar Patriótico (SMP), servicio de conscripción obligatoria por dos años para los jóvenes de dieciocho a veinticinco años.

La medida constituyó un salto cualitativo y cuantitativo de carácter indudablemente estratégico, destinado a revertir definitivamente el curso de la guerra. Al primer llamado, efectuado a comienzos de 1984, se enlistaron aproximadamente diez mil jóvenes. Los reclutas, después de un intensivo entrenamiento inicial de tres o cuatro meses, son

organizados en batallones de choque irregulares, de alta movilidad y poder de fuego, esencialmente ofensivos: los Batallones de Lucha Irregular (BLI).

La medida permitió nutrir al ejército de una masa de combatientes seleccionados, aptos para recibir un completo entrenamiento y capaces de acumular una rica y útil experiencia combativa. Aunque la medida no tuvo exenta de dificultades iniciales ni costos políticos y económicos, su impacto fue menor que el causado por la movilizacion de milicianos en los Batallones de Infantería de Reserva (BIR), la mayor parte de los cuales provenían del sector productivo.

Así, numéricamente y por su calidad, los BLI se constituyen "en cuanto al ejército, en su conjunto, las unidades principales para las maniobras del ejército contra la actividad de los mercenarios" (56).

La permanente amenaza de invasión, expresada no sólo en las maniobras militares continuas y masivas de las fuerzas armadas norteamericanas en Honduras y el litoral nicaragüense, sino en la creciente hostilidad política, diplomática y económica de Washington, ha determinado que la conducción superior no descuide la preparación ni equipamiento de las unidades regulares del ejército. Sin perjuicio de esta preparación y equipamiento para una guerra convencional, las unidades han desarrollado capacidades y se tecnifican para sostener la guerra irregular impuesta por la contrarrevolución. Muestra importante de lo anterior fue el equipamiento, a fines de 1984, de técnica aérea de transporte táctico y apoyo de fuego para las tropas, a través de los helicópteros MI-17 y MI-25.

Estos avances táctico-técnicos han sido complementados con los esfuerzos por asentar claramente en la conciencia de los combatientes, especialmente en los componentes de los BLI, el carácter revolucionario de su accionar, que debe expresarse en su comportamiento con el campesino de las zonas de guerra.

Se han hecho "campañas continuas de calificación a nuestros soldados" -dice el Comandante de Brigada Roberto Calderón, jefe de la V Región Militar-" en el sentido de evitar caer en el error de considerar a todos y cada uno de los elementos que habitan una comarca que ha sido afectada por la contrarrevolución, como enemigos políticos e ideológicos de la revolución" (57).

Esta comprensión se hace extensiva aun a los propios campesinos alzados, a quienes no se confunde con la contrarrevolución. Incluso se ha impreso una *Cartilla del soldado sandinista* que cada soldado lleva consigo, y donde se le indica cómo tratar y lo que se debe evitar en el trato con el campesino. Entre otras consideraciones, en ella se establece como primera obligación del soldado:

> ...imitar a los patriotas sandinistas, tanto en sus acciones implacables y audaces contra el enemigo, así como en el trato fraterno, justo y de plena identificación con la población campesina...

y recomienda:

Cuando veamos que de parte de algún combatiente se comete algún mal trato con la población campesina u otro tipo de violación a las normas de conducta de nuestro ejército, señalarlo en el momento y comunicarlo a los jefes.

Estos deberán sancionar ejemplarmente al culpable, ante el campesino,

o bien:

Respetar la propiedad privada, no destruir y evitar la destrucción de áreas cultivadas, cercas, ranchos y demás bienes, aunque estén abandonados.

Pagar los daños que causen involuntariamente a un precio justo.

Respetar en todo momento las creencias religiosas, cualesquiera que sean, así como los lugares donde se practican misas o asambleas. Tampoco se debe entorpecer estos actos. (58)

El análisis de la situación militar a lo largo de la guerra y la respuesta práctica que ha debido generarse frente a cada situación, ha posibilitado ir perfeccionando los conceptos doctrinarios de la defensa, que permitirán a la revolución popular sandinista enfrentar tanto a la guerra contrarrevolucionaria del FDN como a la siempre latente intervención norteamericana.

La doctrina militar (basada en la guerra popular) que se ha institucionalizado es la llamada *guerra nacional patriótica y popular* que comprende la estrategia de la resistencia activa y de extensión de la guerra ante una intervención norteamericana (59).

En esta concepción, el proceso de consolidación orgánica del ejército permanente se vislumbra como la consolidación de la columna vertebral del gran ejército de milicianos y reservistas del país.

En esta línea se ha fortalecido el sistema de defensa territorial, basado en la estructuración de una gran cantidad de Unidades Permanentes Territoriales (compañías y batallones) conformadas por milicias de cada zona y destinadas a enfrentar la actividad contrarrevolucionaria. Por su conformación, estas unidades están capacitadas para operaciones militares ofensivas y defensivas en su propio ámbito local. Estas actividades se hacen en complemento con las tropas permanentes del ejército, en particular los BLI.

Ultimamente se han creado Unidades Especiales de Lucha Contrainsurgentes, unidades mayores, de alta especialización y profesionales, que sirven de apoyo a las otras fuerzas.

En octubre de 1985 se estableció el Servicio Militar de Reserva (SMR). Con esta constitución se permite incorporar -gradualmente- a la población de entre veinticinco y cuarenta años al sistema de reserva militar, a través de períodos anuales de instrucción de treinta días. Con esto se rescata y mantiene la experiencia de los jóvenes desmovilizados del SMP, cuyo primer contingente se licenció a comien-

zos de 1986 (60).

Detrás de esta nueva forma miliciana, se persigue fortalecer en las zonas urbanas, especialmente en el Pacífico, una estrutura militar de defensa, mientras se mantiene la guerra en la región norcentral del país. Los resultados de este esfuerzo comienzan a verse con la maduración paulatina de las distintas medidas implementadas.

El teatro de operaciones empieza a ser ocupado por los BLI, en tareas de persecución de las fuerzas contrarrevolucionarias. Las operaciones en profundidad que éstas hacen amagando ciudades pretenden obligar al EPS a fijar sus tropas permanentes (BLI) en las aldeas pobladas, para aliviar el acoso que éstas mantienen en las zonas vitales para el FDN, en las áreas montañosas y fronterizas.

Este esfuerzo se ve frustrado a medida que las tropas territoriales van asumiendo las tareas de autodefensa e incluso iniciando ofensivas menores dentro de sus localidades. Esto permite mantener e incrementar la presión sobre las zonas donde mantenían operaciones con las unidades permanentes.

A lo largo del año 85 se van desarticulando los principales planes militares del FDN, y sus fuerzas, dispersas, tratan de mantener acciones menores con ataques a cooperativas campesinas, centros de salud rurales y emboscadas en carreteras, mientras el grueso de sus tropas huye del territorio hacia su santuario en Honduras.

Para los mandos del EPS, el juicio actual sobre el estado de la contrarrevolución es que han entrado en "un proceso irreversible de descomposición" (61).

4.2 Consecuencias políticas de la agresión

4.2.1 ¿Democracia participativa versus militarización defensiva?

Es ley histórica que toda revolución genere su contrarrevolución, no por cuestiones fatales, sino porque las clases derrotadas tratan por todos los medios de restablecer su dominación. Esto que ha sido válido con las revoluciones del pasado, lo es aún más con las revoluciones del presente que se enfrentan a un sistema imperialista, con mucha más experiencia y con muchos más recursos que en el pasado.

En este contexto la transición democrática de un país en revolución como la Nicaragua sandinista debe enfrentar una agresión que asume características muy especiales, la cual, por muy sofisticada que trate de presentarse, no deja de ser agresión.

Es decir: la transición revolucionaria en Nicaragua se desarrolla a la par de una agresión extranjera que asume la forma principal de agresión militar, cuya punta de lanza son las fuerzas contrarrevolucionarias asentadas en territorios fronterizos.

Es lógico que los tiempos de guerra no son los más aptos para desarrollar un modelo pleno de participación popular y democrática,

en un país en transición, en la periferia más subdesarrollada y pobre del sistema capitalista y en un área de fuerte dominio geopolítico del país más desarrollado del capitalismo.

Desde esta perspectiva es elemental que no se pueda analizar la participación popular en la transición sin incorporar la realidad de la agresión, la cual induce algunas limitantes económicas, ideológicas, sociales y políticas al desarrollo de un sistema político pluralista, debido a la priorización en la defensa de la revolución.

Más bien lo sorprendente en esta situación de guerra es que se están desarrollando organismos y estructuras democraticas, al calor de la lucha cotidiana por transformaciones profundas en todos los campos de la vida social nicaragüense, y aun cuando la agresión imponga límites y ritmos a veces contradictorios, los cambios se desarrollan a base de un *modelo de sobrevivencia*, que en definitiva trata de reafirmar la soberanía nacional frente al imperialismo.

Es incuestionable que el acto mismo de la insurrección en contra de la dictadura militar somocista, fue un acto de participación popular de las masas insurreccionadas contra el viejo poder, decrépito y profundamente corrupto.

Este acto de masas comprobó en la práctica que la revolución es una necesidad histórica de estos países, pues tiene profundas motivaciones y raíces sociales y políticas, más allá de cualquier formalización jurídica.

Creemos que es fundamental entender la esencia de este acto primigenio de las masas insurreccionadas, haciendo uso legítimo de su *derecho a la revolución*, para oponerlo a los intentos por convertir el derecho de autodeterminación en una formalidad jurídica, y tras de ello, querer instituir las elecciones como *única vía* a disposición de los pueblos para expresar su voluntad, en una región en donde las farsas electorales y los golpes de estado militares han sido una constante para burlar precisamente esa voluntad.

Pero también este acto de participación masiva del pueblo se hace por medio de la violencia armada de las masas; por lo cual el escenario de esta práctica sandinista es la guerra del pueblo, mediante métodos político militares. Este escenario de la práctica política sandinista se convierte en el de la guerra nacional y popular patriótica, frente a la agresión norteamericana de baja intensidad, en la etapa actual de la guerra.

Todo este proceso de guerra impacta tanto a dirigidos como a dirigentes, por lo cual es necesario examinar las formas de organización y dirección del poder sandinista, desde la vanguardia, pasando por el Estado y sus aparatos, hasta su concreción en la sociedad civil en diversas alianzas políticas, que conforman el modelo de democracia popular sandinista.

Es importante recordar que al triunfo de la revolución, el FSLN no era un partido, sino un frente político que se constituyó en destacamento de vanguardia y de dirección de las masas en su marcha hacia el derrocamiento del poder burgués somocista. Apenas tres meses antes del triunfo las tres tendencias del Frente lograban exitosamente su

unificación, terminando con la dispersión en la dirección de la guerra del pueblo.

Realmente las exigencias concretas (no la decisión teórica) para impulsar la creación de las estructuras partidarias, vinieron de la necesidad de responder más orgánicamente a la contrarrevolución en su primera fase de agresión, que desde el ascenso de Reagan a la administración norteamericana venía siendo impulsada en forma acelerada.

El joven poder sandinista enfrenta enormes tareas, como son reconstruir el país política, económica y socialmente, preparando simultáneamente su defensa. Para ello, el Frente cuenta con una pobre herencia material: las viejas estructuras somocistas, y un ejército -aunque victorioso- pero guerrillero.

La experiencia de la victoria militar determina que, para enfrentar estas tareas, la vanguardia muestre tendencias iniciales de centralización del poder.

Sin embargo, este poder responde a una alianza múltiple por lo cual la vanguardia debe responder a las distintas fuerzas sociales que van conformando el nuevo sistema sociopolítico de Nicaragua. A raíz de estas demandas se creó el Consejo de Estado (ver cuadro Nº 6), acción enmarcada en el principio del *pluralismo político* de la revolución sandinista y las denominadas organizaciones de masas.

Esto permite a la organización de vanguardia ir constituyendo estilos de dirección más flexibles, con mayor desconcentración de tareas y va configurando en ella una mayor capacidad de "lectura" de las demandas de aliados y bases sociales, reafirmando su condición de vanguardia.

Es indudable que en medio de una creciente agresión externa, sumada a la cantidad de problemas heredados en el marco del sub-desarrollo, y al cúmulo de tareas pendientes, con escasos recursos-especialmente los humanos para enfrentarlas, se da en la revolución un sesgo hacia lo externo, achacando hasta errores propios al imperialismo, lo cual repercute en el manejo de las amplias posibilidades de participación popular de los organismos de masas, que van naciendo al calor de la movilización para la transformación y la defensa de la revolución. (62)

Sin embargo, estas organizaciones de masas crecieron en forma vertiginosa durante los dos primeros años de la revolución, por impulso de la masiva participación popular en la insurrección y las posteriores campañas de alfabetización y de salud, etc.

Posteriormente, la movilización popular ha tenido su impulso en las amenazas de invasión directa a Nicaragua por tropas norteamericanas (cuyo clímax fue en noviembre del año 83), alrededor de los cortes de café y algodón entre los meses de noviembre y febrero y, en 1984, alrededor de la campaña electoral entre agosto y octubre .

El desarrollo y profundización de la guerra obligó al gobierno y al FSLN a enrolar en el servicio militar a grandes cantidades de jóvenes, lo cual incidió en las organizaciones de masas, que se constituyen en el semillero de los combatientes.

CUADRO 6

CONSEJO DE ESTADO
INTEGRACION DE LA I LEGISLATURA (1980)

CONCEPTO	NUMERO/MIEMBROS	ORGANIZACION U ORGANISMOS REPRESENTADOS
Partidos políticos	6	PLI-PSN-PPSC-MDN-PCD-PSC *
Empresa privada	5	Instituto Nicaragüense de Desarrollo, Unión de Productores de Nicaragua, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción.
Organizaciones políticas	9	FSLN-FPR (Frente Patrióti co de la Revolución)
Organizaciones de masas	9	Comités de Defensa Sandinista (departamentos y Costa Atlántica), Juventud Sandinista, Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinosa.
Organizaciones sindicales	10	CGT-CTN-CUS-CAUS-CST-ATC **
Organizaciones gremiales	4	ANDEN-UPN-CONAPRO-FETSALUD ***
Organizaciones religiosas	1	Clero
Fuerzas armadas	1	EPS (Ejército Popular Sandinista)
Educación superior	1	CNES (Consejo Nacional de la Educación Superior)
Organizaciones étnicas	1	MISURASATA (Organización de Misquitos, Sumos y Ramas)
Total	47	30 Organizaciones

FUENTES: 1. Consejo de Estado. Primera Legislatura (División y Prensa del Consejo de Estado), núm. 3, Managua, 1980.

2. MONEXICO V LEGISLATURA. (Revista del Consejo de Estado), núm. 8, Managua, 1985.

NOTAS:

* *PLI*=Partido Liberal Independiente ; *PSN*= Partido Socialista Nicaragüense; *PPSC*= Partido Popular Social Cristiano; *MDN*= Movimiento Democrático Nicaragüense; *PCD*= Partido Conservador Demócrata; *PSC*= Partido Social Cristiano.

** *CGT*= Confederación General de Trabajadores; *CTN*= Central de Trabajadores Nicaragüenses; *CUS*= Coordinadora de Unificación Sindical; *CAUS*= Central de Acción y Unificación Sindical; *CST*= Central Sandinista de Trabajadores; *ATC*= Asociación de Trabajadores del Campo.

*** *ANDEN*= Asociación Nacional de Educadores; *UPN*= Unión de Periodistas de Nicaragua; *CONAPRO*= Confederación Nacional de Profesionales; *FETSALUD*= Federación de Trabajadores de la Salud.

En consecuencia, la defensa limita en forma significativa las posibilidades de participación popular en otras tareas; pero, a la vez, contribuye al fortalecimiento de la conciencia antimperialista de la juventud enrolada. Como dice autocríticamente un dirigente de la revolución:

> ...los errores o fallas que hayan incidido en cierto repliegue de la participación popular en determinados aspectos, hay que atribuirlos a la dirección revolucionaria. Pero también hay que entender que estos errores son casi inevitales en una situación como la que vivimos con nuestra revolución acosada por un gobierno norteamericano particularmente agresivo... (63).

A nivel de la participación en el aparato estatal como en los demás, el factor geopolítico ha sido fundamental en el rumbo que ha tomado el pluralismo político en la revolución, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de elecciones presidenciales y parlamentarias en la transición.

La incorporación de elecciones en el modelo democrático sandinista parte del cumplimiento de la plataforma programatica de la revolución, pero también fue un componente estratégico de la alianza político-diplomática y de los acuerdos de apoyo económico con países de Europa Occidental y de América Latina.

Con las elecciones presidenciales (noviembre 1984), se logró responder a la agresión de la administración Reagan y se aisló su política contra Nicaragua en el ámbito internacional. En este sentido "la aprobación de las elecciones por los observadores europeos fue signo tanto de la limpieza y autenticidad del proceso como un juicio de Europa sobre la ilegalidad de la agresión norteamericana en contra de Nicaragua" (64).

Una de las experiencias nuevas, resultado de las elecciones, ha sido el surgimiento y desarrollo de un poder legislativo, claramente separado del ejecutivo y el judicial, y el desarrollo de nuevos modelos de administración estatal en el ejecutivo, que suponen una división

de éste entre Estado, partido y organizaciones de masas. Esta división del poder ejecutivo tiende a hacer más democrática la gestión estatal que las garantías formales de la democracia convencional. Además,

> el estilo de dirección colectiva y democrática (los nueve comandantes), la existencia de fuerzas sociales combinadas como fuerzas dirigentes y la naturaleza de la alianza con el sector privado, han resultado en la vitalidad de... el Estado el Partido y las organizaciones de masas (65).

CUADRO 7

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

PARTIDOS	TOTAL DE ESCAÑOS	%
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)	61	63.0
Partido Conservador Demócrata (PCD)	14	14.6
Partido Liberal Independiente (PLI)	9	9.4
Partido Popular Social Cristiano (PPSC)	6	6.3
Movimiento de Acción Popular Marxista Leninista (MAP-ML)	2	2.1
Partido Comunista de Nicaragua (PC DE N)	2	2.1
Partido Socialista Nicaragüense (PSN)	2	2.1
	96	100.0 %

FUENTES: "Nicaragua: Elecciones, derrota del abstencionismo". en *Pensamiento Propio* (INIES/CRIES, Managua) núm. 18 oct-nov. 1984, pág. 10.

Sin embargo, como se dijo, el escalamiento de la guerra contra Nicaragua ha impactado en las organizaciones de masas, que son la cantera de los combatientes. Ello ha debilitado la presencia de las organizaciones populares, especialmente en el ejercicio del poder local. En este sentido, los efectos de la agresión conspiran contra el fortalecimiento del poder de las masas en el Estado, aun cuando la programa-

da consulta nacional sobre la constitución de la República tiende a reactivar el interés de estas organizaciones (66).

> También en la medida en que la guerra ha obligado a la integración de los esfuerzos estatales en torno al Ministerio de Defensa, la organización partidiaria se ha identificado en forma creciente con el Estado...
>
> No obstante la tensión entre el partido y el Estado sigue siendo tan fuerte como hace dos anos y se prevé que el nuevo foro legislativo será escenario de la expresión pública de esa tensión (67).

lo cual se comprueba actualmente a través de discusiones sobre las atribuciones legislativas del Ejecutivo y, en especial, sobre el proyecto de constitución política.

4.2.2. Efectos en el bloque de alianzas de la revolución

La agresión externa, que no solamente es militar, sino fundamentalmente ideológica-política, ha buscado romper el bloque de alianzas de la revolución, las cuales, además de garantizar la existencia de una amplia base social de apoyo, constituyen las fuerzas motrices de la fase nacional antimperialista de la revolución. Cada uno de estos sectores presenta sus particularidades al interior del proyecto revolucionario, por lo cual los abordaremos separadamente.

La sociedad étnica

Puede afirmarse que la revolución sandinista se gestó en las montañas y tomó cuerpo fundamentalmente en la lucha urbana en los años setenta hasta culminar con la insurrección final en los meses de junio y julio de 1979, en las principales ciudades del Pacífico (Managua, León, Masaya) y del Norte (Estelí y Matagalpa). El hecho histórico de la insurrección popular estuvo ausente en todo el sector de la Costa Atlántica, que conforma más de la mitad del territorio de Nicaragua, aunque alberga solamente cerca del diez prociento de la población actual.

La población del Atlántico, compuesta por seis etnias (ver cuadro 8), fue desde la colonia el sector más marginado de este país. En primer lugar, por la colonización española, que no fue más allá del Pacífico, y cuya violencia colonizadora destruyó, además, las comunidades indígenas de esa zona.

En segundo término, la colonización inglesa del Atlántico data de fines del siglo XVII, cuando se instituyó el Reino de la Mosquitia como un protectorado inglés, que permitió afianzar el control mercantil inglés sobre el mar Caribe. Este protectorado terminó en 1894 con la llegada al poder de los liberales, quienes constituyeron el Estado Nacional de Nicaragua. Sin embargo, las posibilidades de integrar económicamente a la Costa Atlántica al país, fueron postergadas indefinidamente con la invasión norteamericana en (1909) frustrando a la par el desarrollo autónomo del ado-nación nicaragüense, dando inicio al proceso de constitución de un Estado neocolonizado por los

CUADRO 8

ETNIAS EN LA COSTA ATLANTICA NICARAGUENSE

	ETNIAS	POBLACION	%	IDIOMAS
1.	Mestizos	182,377	64.5	Español
2.	Misquitos	66,994	23.8	Misquito-español-inglés
3.	Criollos	25,723	9.1	Inglés-Español
4.	Sumos	4,851	1.7	Sumo-Misquito
5.	Garífonas	1,487	0.5	Garífona
6.	Rama	649	0.2	Rama
	TOTAL	282,081	100.0%	

FUENTE: "Misquitos: entre la guerra y la autonomía" en *Pensamiento Propio*, (INIES/CRIES, Managua), núm. 26, septiembre 1985, pág. 31.

Estados Unidos, que cristalizó en el régimen somocista, el cual se mantuvo durante cuarenticinco años.

En pocas palabras se puede definir la política de la dictadura burgués somocista hacia la Costa Atlántica como la de un total desprecio por las minorías indígenas y de un total incomunicación y aislamiento entre las dos regiones. Es una hegemonía expresada al revés: no haciendo nada por la integración del Atlántico al modelo de dominio económico y político del Pacífico, convirtiéndola en un enclave político económico.

Históricamente, pues, se fueron afirmando y ahondando las diferencias económicas, sociales, políticas, culturales y hasta lingüísticas entre las dos regiones. Al triunfo de la revolución sandinista ésta se encontró con una total desarticulación entre el enclave minero y pesquero del Atlántico y el resto de la economía nacional.

En principio la revolución trató de articular ambas regiones a través de una visión economicista del problema, y a la par trasladando las pautas culturales y organizativas del Pacífico en forma muy mecánica, pasando por encima de la cultura y formas organizativas de las etnias del Atlántico. Tal y como explica un dirigente sandinista:

> Los cuadros y dirigentes del FSLN, en sus más de veinte años de lucha y hasta el día del triunfo no acumularon experiencia en el tratamiento de las etnias. No existían

> medios de comunicación con la Costa Atlántica. La mayoría conocimos el Atlántico después del triunfo... (68).

Este desconocimiento dio lugar a errores de la revolución en su alianza con los grupos indígenas, lo cual provocó su deterioro y el aprovechamiento de las contradicciones por la administración norteamericana.

A partir de este momento (1981), la Central de Inteligencia norteamericana, comenzó a organizar, entrenar y armar a los indígenas (especialmente misKitos), en contra de la revolución.

En principio, el sandinismo trató de dar una solución militar a un problema de raíces culturales, político-ideológicas, lo cual ahondó más las contradicciones, especialmente por el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas del Río Coco hacia tierra adentro, bajo criterios de seguridad.

A partir de la experiencia acumulada a través de la aplicación de criterios erróneos, la revolución sandinista ha iniciado un proceso muy complejo de revisión profunda de la cuestión étnica bajo una óptica más integral, lo cual condujo a la modificación de la política de la revolución hacia las comunidades indígenas que pasa por reconocer que estos pueblos no son contra-revolucionarios. Un dirigente sandinista dice al respecto:

> Con esta nueva visión la revolución desarrolló acciones políticas entre los pueblos y comunidades con el objetivo de encontrar soluciones pacíficas. Se decretó la amnistía, se produjeron conversaciones entre el gobierno y los alzados en armas y sobre todo, se inició el proyecto que recoge la reivindicación histórica de la autonomía...(69).

A mediados de 1985 se inició el proceso de consulta sobre la autonomía, se creó una Comisión Nacional de Autonomía, se elaboró el documento base sobre *Principios y políticas de la autonomía* y posteriormente los pueblos y comunidades de la Costa Atlántica eligieron delegados para las comisiones regionales y zonales que se han abocado a la tarea del estudio y discusión del documento base.

¿En qué consiste el proyecto de autonomía? En el documento la autonomía se define como "el efectivo ejercicio de los derechos históricos de los pueblos indígenas y de las comunidades de la Costa Atlántica, dentro del marco de la unidad nacional y de los principios y políticas de la Revolución Popular Sandinista" (70).

Se trataría de la creación de regiones autónomas en las cuales los pueblos y comunidades habitantes ejercerán sus derechos históricos y tomarán sus decisiones en forma autónoma en áreas señaladas por las leyes. Además, se dicta la igualdad de condiciones para todas las etnias, negando toda discriminación racial.

En fin, se plantea la elección autónoma de los representantes de cada etnia, en asambleas regionales, que elegirán también su ejecutivo regional, representante de la región ante el gobierno central.

La sociedad campesina

La importancia estratégica de este sector en la revolución sandinista fue condensada por el general Sandino en su conocida frase "Sólo los obreros y campesinos irán hasta el final". Conociendo la importancia estratégica de la alianza obrero-campesina, el programa sandinista en su parte agraria se volcó en beneficio del campesinado durante 1979-80, pero sin distribución de tierras, la cual fue postergada para solidificar la alianza con el sector privado.

Esta postergación, junto con prejuicios muy fuertes en relación al "campesino atrasado" de montaña adentro (zonas fronterizas con Honduras especialmente), por parte de los encargados de fortalecer la base económica y político-ideológica de este sector, trajo como consecuencia el deterioro de la alianza.

Ello permitió a la contrarrevolución conseguir una cierta base de apoyo en el campesinado, que era consecuencia del descontento con el gobierno, pero que nunca llegó a generar una base social fuerte para la contrarrevolución.

Paradógicamente es la guerra la que ha llevado al sandinismo a buscar la recomposición de esta alianza, y la búsqueda de formas de participación de las mismas comunidades campesinas en sus problemas, pero ahora partiendo de la satisfacción de su "sed de tierra" y el consiguiente apoyo técnico-financiero, dentro de los límites impuestos por la agresión. Pero lo más importante de esta rectificación es que el FSLN destina militantes calificados que se integran a la lucha política- ideológica de la sociedad campesina de montaña adentro, convertida hoy en zona de guerra (71).

El sector privado

Es conocido que uno de los pilares del modelo sandinista es la existencia de una economía mixta, y que en términos porcentuales casi el sesenta por ciento de los principales medios de producción está en manos privadas.

Pero esta realidad cuantitativa está sustentada en el principio de la revolución sandinista de que el sector privado debe organizar su participación en el modelo económico de la revolución: es decir, que responda más a la "lógica de las mayorías que a la lógica de rendimientos para el capital" (72).

El control del Estado sandinista sobre el sistema financiero y el comercio exterior, ha permitido reencauzar hacia el fortalecimiento del modelo sandinista, la capacidad empresarial, técnica y administrativa, de la antes poderosa oligarquía-burquesía agro-exportadora, la cual ha sido convertida en "burguesía administrativa".

La revolución ha categorizado políticamente a la burguesía que se quedó "administrando" sus negocios, en burguesía patriótica y burguesía vendepatria. La primera estaría conformada por dos fracciones: la fracción del gran capital, que es la más rica de todas y que aceptó el principio de la revolución, a cambio de garantizarles un nivel de ganancia que es su mejor incentivo para no colaborar con la agresión norteamericana. La otra fracción de la burguesía patriótica es la

llamada *burguesía chapiolla* (burguesía provinciana), la más numerosa y que produce la mayor parte de productos agrícolas de agroexportación y consumo interno (carne, café, productos lácteos).

La alianza con estas fracciones se ha considerado estratégica para la revolución, puesto que su apoyo atrae el apoyo de sus trabajadores (colonos y campesinos pobres). Esta burguesía media y pequeña del agro está organizada, junto a campesinos pobres y medios, en la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), lo cual les garantiza una fuerte presencia a nivel del Estado.

La tercera fracción de la burguesía nicaragüense es la denominada burguesía antipatriótica (aproximadamente un tercio de esta clase) y que en su mayoría se ha adherido a la política de agresión norteamericana de descapitalización de las empresas y de politización de su corporación gremial, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) Limitados en su otrora poder empresarial irrestricto, han dejado de invertir y de producir "por falta de clima" y se suman cada vez más abiertamente al apoyo de la política norteamericana hacia Nicaragua. Este sector se ha expresado por medio del periódico La Prensa, y ha sido afectado por la censura del gobierno debido al estado de emergencia; es una censura natural en una situación de guerra, pero que ha sido y es magnificada por la prensa internacional, especialmente la manejada por los consorcios periodísticos norteamericanos y los empresarios (dueños de periódicos) de América Latina, especialmente los aglutinados en la Sociedad Interamericana de Prensa.

Esta fracción de la burguesía es la que más se ha prestado a los intentos de la administración norteamericana para construirle un frente interno a la contrarrevolución, papel que no logró consolidarse con este grupo de empresarios y que paulatinamente fue pasando a manos de sectores de la iglesia católica jerárquica.

Los cristianos con la revolución y la iglesia jerárquica

Este fenómeno de la alianza del sandinismo con los cristianos, surge de la participación de las comunidades de base cristianas y "delegados de la palabra" en la lucha contra el somocismo y especialmente en la insurrección final.

Después del triunfo esta alianza fue sellada con la incorporación masiva de los cristianos, en especial de la iglesia popular al proyecto sandinista, al considerar la no existencia de contradicción entre éste y su fe religiosa. Los altos niveles de libertad religiosa y la apertura sin precedentes del FSLN al hecho religioso, son expresión de esta alianza.

Se puede afirmar, en general, que la mayoría de sacerdotes y ministros tienden a favorecer el proceso sandinista; sin embargo, a medida que la política norteamericana se hacía más agresiva contra el sandinismo, la jerarquía de la iglesia católica comenzó a mostrarse abiertamente antisandinista. Las acciones de este sector estuvieron enfiladas desde un inicio a romper la alianza sandinismo-cristianismo; por ejemplo, ya desde junio de 1981 los obispos dieron un ultimatum a los sacerdotes revolucionarios dentro del gobierno para que abandonaran sus cargos o renunciaran a su calidad de sacerdotes. El ataque a los

sectores aliados del sandinismo se volvió recurrente, especialmente en las homilías del antes arzobispo y hoy Cardenal Miguel Obando, denunciando y condenando a los "falsos profetas" que ejercen labor pastoral sin el consentimiento del arzobispo.

Otro aspecto estratégico de la revolución que se constituyó desde 1983 en la posibilidad de derrotar a la contrarrevolución armada, el Servicio Militar Patriótico, se convirtió en uno de los ejes de ataque del Cardenal Obando, por ejemplo haciendo llamados a los jóvenes a emplear sus manos para "bendecir y no para empuñar las armas".

Un tercer aspecto en donde el Cardenal Obando y la jerarquía ha insistido desde mediados de 1984, es el de levantar las banderas de la reconciliación con las fuerzas contrarrevolucionarias, en forma totalmente coincidente con la postura norteamericana.

Esta función del sector más importante de la jerarquía católica es congruente con la estrategia de baja intensidad, en donde se privilegia la lucha ideológica (guerra sicológica) que propendería a la disputa de legitimidad y base social al proyecto sandinista, asumiendo el liderazgo político religioso del Cardenal, después del fracaso con la empresa privada (COSEP) y los partidos políticos de derecha (Coordinadora Democrática) por alcanzar ese liderazgo. Además, ello significa el reconocimiento de la incapacidad militar de las fuerzas contrarrevolucionarias (73).

En el marco de la GBI, la guerra de desgaste exige un poderoso soporte interno para impulsar un proyecto político alternativo, que logre capitalizar activamente el descontento popular generado por errores cometidos por la conducción sandinista, en la gestión de problemas delicados como el desabastecimiento, el servicio militar, etc.

En consecuencia, el verdadero oponente político-ideológico del mensaje del Cardenal Obando no sería la iglesia popular, sino el debilitamiento de su alianza con el FSLN y en definitiva la deslegitimación del proyecto sandinista.

Como conclusión de esta parte podríamos decir que la confrontación con ciertos sectores y el reacomodo y fortalecimiento de las alianzas con otros, es determinado en todos los aspectos "por la lógica global de la defensa frente a la agresión militar norteamericana. La flexibilidad para mantener (las) alianzas es quizás la característica principal del nuevo estilo de conducción..." del FSLN (74).

4.3 Los costos sociales

Sin lugar a dudas, el costo social más alto que la revolución ha tenido que sobrellevar en los últimos años es el daño infringido a los hogares nicaragüenses como producto directo de la agresión.

Con los datos que hemos recopilado de diferentes fuentes, podemos agregar un cuadro que muestra, con la frialdad de las cifras, una cuantificación de las víctimas directas de la agresión, cifras que -a nuestro juicio- nunca van a mostrar la magnitud real del dolor impuesto a las familias de Nicaragua.

CUADRO 9

COSTOS SOCIALES DE LA AGRESION MILITAR CONTRA NICARAGUA

CONCEPTO	NUMERO DE AFECTADOS	
1. Costos humanos en general (1980-1986)		
Muertos	3,999	
Heridos	4,542	
Secuestrados	3,191	
Huérfanos	6,329	
Desplazados de guerra	250,000	/a.
Desplazados de guerra	300,000	/b.
2. Costos humanos específicos /c. (Muertos, heridos, secuestrados, 1980-1986)		
Ninos	912	
Jóvenes	2,193	
Adultos y ancianos	9,227	
Brigadistas de salud	27	
Maestros populares	246	
2.1 Cooperantes europeos /d. (1983-1985)		
Muertos	5	
Secuestrados	14	
2.2 Técnicos y profesionales /e. (1983-1984)		
Muertos	133	
Heridos	44	
Secuestrados	96	
2.3 Obreros agrícolas y cooperativistas (1983-1984)		
Muertos	733	

FUENTES: 1. Centro de Comunicación Internacional, *op.cit.*

2. *Pensamiento Propio* (INIES/CRIES), núm. 22, *op.cit.* pág. 34.

3. Agencia Nueva Nicaragua. Boletín Semanal (ANN,NI), núm. 9, febrero-marzo, 1986.

4. Wheelock Román, Jaime. *Entre la crisis y la agresión: La Reforma Agraria Sandinista.* Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1985.

5. Nicaragua-MIDINRA. Plan de Trabajo, Balance y Perspectivas 1985. Managua, 1985.

6. *Ibid.*

NOTAS: /a. Según fuente de INFORPRESS CA.

/b. Según fuente de INSSBI.

/c. Datos relativos a los costos humanos en general.

/d. Se incluyen dos asesinados en 1986 y los ocho alemanes liberados en junio de este año.

/e. Las víctimas brigadistas de salud, técnicos y profesionales incluyen un porcentaje alto de internacionalistas.

El carácter de la guerra, la orientación que le da el agresor, se manifiesta en los niños y jóvenes asesinados, en los brigadistas de salud y maestros populares asesinados por el único delito de tratar de llevar la salud y la alfabetización al interior de la montaña.

En un país donde cada técnico y profesional es un elemento casi irremplazable, transformarlos en objetivos militares constituye una concepción de guerra incalificable.

También la infraestructura social es golpeada por la agresión. Sólo en el lapso indicado fueron destruidos veinte centros de salud y catorce escuelas, a las que hay que agregar las 359 que debieron ser abandonadas, y los 840 colectivos de educación de adultos obligados a cerrar.

Por su parte, el fenómeno de los desplazados de guerra es más complejo de lo que aparenta y presenta variados y graves problemas.

La emigración inorgánica desde el campo a la ciudad, causada directa e indirectamente por la guerra, ha provocado en el período posterior del triunfo revolucionario un catastrófico aumento poblacional en Managua. De aproximadamente quinientos mil habitantes en 1979, hoy sobrepasa el millón de personas, las cuales crean una presión insostenible sobre los limitados servicios urbanos, como el agua, por ejemplo, que debe ser racionada dos días a la semana.

Por otra parte, las exigencias político-militares impusieron a las autoridades efectuar un reasentamiento de la población ubicada en las zonas de guerra. El plan se concibió no sólo "para despoblar un prefijado teatro de operaciones", dejando el territorio apto para el despliegue de maniobras militares sin costos de vida civiles, como para restar una potencial base social a la contrarrevolución. También se mantuvo presente efectuar un gigantesco reordenamiento poblacional que facilitara el impulso de obras sociales y la prestación de servicios. Esto se justificaba por la gran dispersión campesina, que además de impedir su defensa, ponía serio obstáculo al ensanchamiento de los beneficios de la revolución.

Las causas, si se quieren juntas, no mitigan el golpe familiar que significa abandonar buena parte de la acumulación de una vida -quemándolas, para evitar su uso por el enemigo- y salir del terruño con un puñado de enseres...

El plan concebido por el gobierno nicaragüense contempla el

CUADRO 10

COSTOS MATERIALES DE LA AGRESION A NICARAGUA (1980-1985)

CONCEPTO	Número	TIPO DE DANO
Centros de salud	20	Destruidos
Unidades, centros y puestos de salud	99	Abandonados por agresión
Escuelas	48	Destruidas
Escuelas	502	Cerradas por agresión
Colectivos de Educación de adultos	840	Cerrados por agresión
Recursos forestales (pinos)	44,000 hectáreas	Quemadas; pérdidas por 22 millones de dólares
Barcos (pesca y madera)	20	Quemados; hundidos por minas
Centros mineros (Zelaya Norte)	zonas de guerra	Atacados; pérdidas por 4 millones de dólares y 22 mil onzas de oro
Infraestructura, maquinarias y servicios.	zonas de guerra	Destruídos; pérdidas por 35 millones de dólares

FUENTES: 1. Valpy Fitzgerald, *op. cit.*

2. Centro de Comunicación Internacional, *op. cit.*

3. "Informe a la Asamblea Nacional" del Presidente de Nicaragua Comandante Daniel Ortega en **Barricada**, Managua, 22 de febrero de 1986, pág. 3.

reasentamiento de alrededor de cincuenta mil familias (unas trecientas mil personas) en un lapso que va desde 1982 hasta 1986, concentrándose el esfuerzo mayor en los dos últimos años.

El drama de los huérfanos de guerra es otra lacerante herida social. ¿Cuántos huérfanos de guerra hay en Nicaragua? Posiblemente nunca llegue a conocerse la magnitud real de este problema. Aparte de las

cifras citadas a comienzo del capítulo, pueden también citarse como indicativos importantes, aunque también limitados, el número de pensiones que bajo este reglon entrega el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar (INSSBI): 7,582 pensiones a huérfanos de guerrra (75).

Las limitaciones de la información son obvias. Aparte de los hijos de combatientes, la población civil mayormente afectada -campesinos de regiones remotas- difícilmente está registrada en el INSSBI, por lo que es probable que una gran parte de los huérfanos y niños abandonados por causa de la guerra no están necesariamente cubiertos por esa cifra.

> Aun con un presupuesto cercano a los 200 millones de córdobas al año para el programa de huérfanos de guerra, el INSSBI apenas cubre una pequeña parte de las necesidades, pues los problemas más urgentes de estos niños, son los mismos de todos los niños de las familias nicaragüenses: desnutrición, enfermedades, vestuarios, viviendas, falta de trabajo para la madre viuda. En fin, problemas que no pueden solucionarse asistencialmente, sino que dependen de soluciones integrales (76).

LOS DERECHOS HUMANOS

En la problemática del respeto a los derechos humanos en la Nicaragua sandinista es conocida la total discrepancia existente entre los informes del Departamento de Estado norteamericano (los llamados "libros blancos") y los informes de los organismos internacionales, que en los ultimos años pasan la veintena (77).

A este respecto son muy reveladores los reportes de 1985 de Americas Watch y Amnistía Internacional, sobre los derechos humanos en Nicaragua. En lo que sigue incluimos las conclusiones del documento de la organización privada norteamericana Americas Watch (la cual no puede ser acusada de parcialidad), porque, por un lado es una denuncia de la manipulación de los derechos humanos contra Nicaragua por la administración norteamericana y una contrastación de las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, con investigaciones hechas desde 1982 por este organismo en Nicaragua.

AMERICAS WATCH

Reagan: retórica y realidad

Al examinar el tratamiento que hace la administración Reagan de los derechos humanos en Nicaragua, concluimos que:

1. *Lejos de ser el "eje moral" de la política hacia Nicaragua, el tema de los derechos humanos se ha utilizado para justificar una política de confrontación;*

2. *Con ese fin, los informes sobre los derechos humanos han sido distorsionados en los Country Report (informes por país) que el Departamento de Estado ha publicado sobre Nicaragua, en los*

folletos informativos sobre Nicaragua diseminados por la Casa Blanca, y en los discursos y declaraciones públicas de oficiales de alto rango, y más notablemente, en los propios comentarios del presidente acerca de ese país;

3. Semejante manipulación de los derechos humanos para justificar la injerencia militar, representa en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, una degradación sin precedentes de la causa de los derechos humanos;

4. De particular preocupación es la constante -e incorrecta- utilización por parte de la administración del término totalitario para caracterizar a Nicaragua.

Con respecto a las condiciones actuales de los derechos humanos en Nicaragua, hemos examinado las declaraciones de la administración en las áreas donde son más contundentes (y también hemos comparado los hechos con las declaraciones del gobierno de Nicaragua, cuando fue posible), y encontramos que:

1. No existe una política de tortura, asesinato político, ni desapariciones en Nicaragua. Mientras que estos abusos han ocurrido, principalmente en 1981 y 1982, el gobierno ha tomado acciones en algunos casos para investigar y castigar a los responsables, aunque seguimos exhortando que se investiguen a fondo las desapariciones de 70 miskitos entre 1982 y 1983 y las muertes (que suman de 21 a 42) en los incidentes ocurridos en Leimus y Walpa durante 1981 y 1982.

2. La administración ha desvirtuado la suspensión de la libertad de prensa en Nicaragua y ha intentado crear la impresion de que los sandinistas han eliminado libertades existentes anteriormente. Por otro lado, persisten problemas serios de censura y se debería suspender la censura por completo, o mantenerla sólo en la medida estrictamente necesaria para enfrentar la emergencia

3. El tema de la persecución religiosa en Nicaragua no tiene fundamento, aunque es evidente que el conflicto político entre la iglesia católica y el gobierno abarca casos abiertos de abuso, como lo fue la expulsión de diez sacerdotes extranjeros. No existe una política de antisemitismo ni son perseguidos los cristianos -católicos ni protestantes- por ejercer la religión.

4. Los miskitos, quienes han sido el símbolo predilecto de la administración sobre la supuesta crueldad sandinista, sufrieron serios abusos en 1981 y 1982. Desde entonces, la trayectoria del gobierno en las relaciones con los miskitos ha mejorado de manera dramática e incluye una amnistía, gestiones de negociación y los inicios de un proceso de repatriación, mientras que el tratamiento de la contra hacia los miskitos y otros indígenas se caracteriza por una creciente violencia.

5. Las elecciones nacionales celebradas en Nicaragua en 1984, a pesar de sus deficiencias, representaron un avance sobre la experiencia nicaragüense en el pasado y un paso favorable hacia el pluralismo y dieron como resultado una importante

representación de los partidos de oposición en la Asamblea Constituyente. Se debe instar a Nicaragua a tomar medidas adicionales para avanzar en un proceso democrático.

6. *No hay evidencia para sustentar las declaraciones de la administración que de no intervenir Estados Unidos en Nicaragua, se produciría un éxodo de "gente de a pie" (hacia territorio estadounidense).*

7. *Las afirmaciones anteriores no intentan desconocer ni disminuir de alguna manera la importancia de los abusos que han sucedido en Nicaragua. Un periódico, como La Prensa, proclama de manera abierta su carácter opositor, pero sufre una fuerte censura previa; algunos líderes de asociaciones de empresarios y de sindicatos han padecido encarcelamiento por actividades pacifistas; fueron expulsados diez sacerdotes extranjeros de Nicaragua por haber tomado parte en una manifestación pacífica que el gobierno consideró ilegal; salvo por las elecciones de 1984, no se les ha permitido a los partidos políticos celebrar asambleas al aire libre, y en varias ocasiones se han utilizado las turbas supuestamente controladas por el gobierno o el Frente Sandinista para intimidar a los que expresan puntos de vista de la oposición. Tal vez lo más perturbador desde el triunfo de la revolución en 1979, lo constituyen las relaciones engranadas entre el Frente Sandinista y el estado, así que, por ejemplo, es el ejército popular sandinista el que defiende el estado, y las organizaciones dirigidas por los sandinistas que seleccionan dos de los tres integrantes de los tribunales que enjuician a los acusados de una variedad de ofensas contra la seguridad.*

En lo que respecta a la práctica de los derechos humanos por parte de la contra, hemos examinado las afirmaciones de la administración sobre el carácter moral de estos insurgentes y encontramos que, al contrario, los contras han participado de manera sistemática en el asesinato de presos y personas desarmadas, incluso personal médico y de rescate; en ataques selectivos contra civiles y ataques indiscriminados; en tortura y otros ultrajes contra la dignidad humana, y en secuestros y hostigamientos de refugiados. Comprobamos que los abusos más violentos de los derechos humanos hoy en Nicaragua los cometen los contras y que la política que sostiene la administración de Reagan en apoyo a los contras es, por ende, una política claramente hostil a los derechos humanos.
(78).

4.4. Los costos económicos

Tal y como se planteó en el capítulo correspondiente, si bien la agresión militar se inicia prácticamente con la revolución, no es sino hasta 1983 cuando aquélla incorpora a su concepción estratégica el ataque frontal a objetivos económicos, como complemento a las medidas

que venía implementando la administración norteamericana en ese terreno.

Este salto cualitativo tiene su contrapartida material. Desde el punto de vista operativo, las acciones contrarrevolucionarias dirigidas a objetivos económicos aumentan en un 260 por ciento en comparación al año anterior (Ver cuadro 2). Esto determina que por el sólo concepto de la agresion militar en ese año, considerando tanto el daño a la infraestructura (capital) como a la producción, las pérdidas ascienden US$ 221.8 millones, es decir, 543.6 por ciento en relación con los daños causados en este renglón en 1982. (Ver cuadro 11)

Aunque esta tendencia fue frenada en el año 1984 en cuanto a daños directos, como producto de la mayor efectividad de las fuerzas armadas sandinistas (los ataques a objetivos económicos aumentaron sólo en un 18 por ciento) las perdidas infringidas en el rubro producción fueron cuantiosas, alcanzando un valor de US$ 206.7 millones, equivalente a más de la mitad del valor de las exportaciones de un año. En parte este fenómeno se explica por el gran despliegue militar y la cantidad de maniobras que afectan directamente la zona de cultivos, principalmente la del café.

Para 1985 continúa el descenso de la efectividad militar contrarrevolucionaria, estimándose los daños directos de la agresión militar en US$ 121 millones. Esta tendencia, producto de la derrota estratégica de la contrarrevolución que se perfila con mayor nitidez durante 1985 explica en parte la mayor agresividad del gobierno de Reagan en el terreno propiamente económico, aplicando medidas extremas como el bloqueo comercial.

CUADRO 11

ACCIONES DE LA CONTRARREVOLUCION HACIA LA POBLACION CIVIL (1981-1985)

CONCEPTO	1981	1982	1983	1984	1985 (1er. semestre)	TOTAL 81-85
1. Secuestro a Población Civil /a	2	20	40	109	61	232
2. Emboscadas vehículos civiles y del Estado /b.	5	17	78	147	98	345

FUENTE: Centro de Comunicación Internacional, *op.cit.*

NOTAS: /a. Se consigna el número de secuestros y no de las personas secuestradas. Esto se consigna en otro cuadro.

'/b. Se consigna número de emboscadas y no personas afectadas.

Agregando los valores de los daños económicos directos provocados por la agresión militar durante los primeros cinco años, se alcanza la cifra de US$ 601.3 millones, lo que corresponde casi al valor de dos años de las exportaciones totales de Nicaragua.

CUADRO 12

COSTOS ECONOMICOS DE LA AGRESION A NICARAGUA

(en millones $)

CONCEPTO	1980	1981	1982	1983	1984	DAÑOS ESTIMADO GLOBAL (80-84)	(1985)
1. Agresión militar directa	1.4	9.6	40.8	221.8	206.7	480.3	121.0
(Daños materiales, al capital, a la producción)							
1.a Daños a exportaciones	0.9	3.5	6.1	65.3	102.8	178.6	50.0
1.b Daños consumo interno	-	-	15.0	32.1	56.9	104.0	73.0
2. Costos derivados (Déficit balanza de pagos y fiscal)	-	2.8	31.4	221.2	496.2	751.6	108.0
3. Agresión financiera directa						511.0	58.0
					SUB-TOTALES	2,025.5	410.0
					TOTAL (80 - 85)	2,772.5	

FUENTES: 1. Valpy Fitzgerald, **op. cit.**

2. **Envío**, Instituto Histórico Centroamericano, (Managua), núm. 51, septiembre, 1985., pág. 2 ss.

3. "Informe a la Asamblea Nacional" del Presidente Daniel Ortega en *Barricada*, (Managua), 22 de febrero 86.

A estos costos producidos directamente por la agresión a través de los daños materiales a la infraestructura económica es preciso agregar otros, los que considerados en conjunto, relativos al tamaño de la economía nicaragüense, son verdaderamente enormes. La propia actividad de la defensa, que ha debido escalarse paralelamente al incremento de la agresión, absorbe una ingente cantidad de recursos humanos y materiales que de otra forma pudieran haber sido destinados a mejorar el nivel de vida de la población o a avanzar en los planes de desarrollo económico previstos para el período, y que han debido postergarse.

El presupuesto dedicado a servicios sociales ha debido ser drásticamente reducido, lo que no ha evitado que el déficit fiscal aumente a niveles muy inflacionarios. Como la defensa se basa en una movilización masiva de infantería, el gasto de elementos importados es mínimo. "El incremento del déficit se refleja enteramente en la demanda interna y el impacto macroeconómico, en una situación de oferta restringida, ha sido inevitablemente inflacionario. Es decir, el pueblo está pagando un impuesto inflacionario de guerra" (79).

Los efectos de estas restricciones se manifiestan prácticamente en un congelamiento cuantitativo y hasta cierto deterioro cualitativo en los servicios de salud, educación, transporte, etc. Abastecer a las fuerzas armadas implicó -por ejemplo- para el año 1985 destinar el treinta por ciento de la capacidad fabril del calzado y diecinueve por ciento de la capacidad de producción de textiles y vestuarios; un sesenta por ciento de la producción de materiales de construcción y un dieciocho por ciento de la producción metal mecánica (80).

La profunda austeridad que debe imponerse como respuesta a la economía de defensa implica priorizar en función a la subsistencia y a lo inmediato. Ello implica que, mientras dure la guerra no se podrán construir escuelas, hospitales, viviendas, ni se podrán extender los servicios públicos.

En el plano de la agresión financiera, producto tanto del bloqueo norteamericano como de la congelación de préstamos inducida por la administración de Reagan en las instituciones financieras internacionales, sólo en 1985 Nicaragua dejó de percibir un total de US$ 23 millones.

Medido a un año de su aplicación, los daños causados por el bloqueo, arrojan un balance elocuente. El comercio nicaragüense con el resto del mundo se vio afectado en un catorce por ciento, y su efecto directo alcanza unos 93.3 millones de dólares, cifra que no contempla los efectos indirectos del mismo.

Sólo el sector productivo tuvo una pérdida de 34.6 millones de dólares, afectando principalmente a los rubros: azúcar, banano, carne, productos del mar, etc. (81).

Frente a dificultades económicas y restricciones materiales de tal magnitud, impuestas por una agresión como la que sufre Nicaragua, resulta prácticamente heroico sostener una estrategia de desarrollo como la que la revolución concibió para combatir las raíces de la pobreza y dependencia nacional. A pesar de ello y conforme al proyecto original, se reafirman una y otra vez los principios de la economía

CUADRO 13

EFECTOS ECONOMICOS DE LA AGRESION A NICARAGUA

BLOQUEO ECONOMICO

(en millones de $)

CONCEPTO	APROBADOS (81-84)	APROBADOS (1985)	DESEMBOLSO REAL (81 - 84)	CALCULO AGRESION FINANCIERA BLOQUEO (81-85)
1. Préstamos EU/Nic. (3 proyectos)	96.4	—	36.4	65.0
2. Préstamos Multilaterales. BID.	246.5	58.0	144.5	160.0
3. Préstamos BIRF.	140.0	—	19.0	121.0
4. Multilateral. BIRF.	386.0	—	163.0	223.0

TOTAL BLOQUEADO:
(millones de $) 569.0
=======

FUENTES: 1. Valpy Fitzgerald, **Op. Cit.**

2. *Pensamiento Propio* (INIES/CRIES, Managua), núm. 22, abril 1985, pág. 24.

3. *Inforpress* Centroamericana, Guatemala, núm. 633, marzo 1985, págs. 3-4.

mixta y el no alineamiento; fortaleciendo los sectores estatal y cooperativo en lo interno y logrando balancear las relaciones económicas de los distintos campos económicos, en lo externo (82).

Finalmente, entre la diversidad de los efectos negativos que produce la agresión al modelo y sus posibilidades de desarrollo, es pertinente destacar el impacto de la guerra sobre los recursos humanos.

Por una parte, está la huida de la población a las ciudades y la movilización militar de la juventud masculina. Este efecto altera

directamente la producción agropecuaria, eje del desarrollo en Nicaragua. Por otra, está la salida de profesionales y técnicos al exterior, originada por el temor a la guerra y por la búsqueda de mejores horizontes económicos. Y finalmente el hecho de que generaciones de jóvenes deben interrumpir sus estudios para cumplir con sus obligaciones con la defensa. Todos estos elementos distorsionan gravemente el presente pero, lo que es peor, comprometen riesgosamente el futuro.

Cuantificar simplemente en términos monetarios una agresión de tan vasto alcance resulta difícil y hasta ineficaz, toda vez que los costos de oportunidad en un proceso de profundos cambios sociales no sólo tienen que ver con rendimiento y utilidades, sino con transformaciones de fondo, las que por ser tales, comprometen no solamente el bienestar, sino las esperanzas y aspiraciones de todo un pueblo.

5. CONCLUSIONES: ALTERNATIVAS PARA LA PAZ (83)

5.1. Consecuencias regionales de la política norteamericana

En primer lugar, hay que concluir que la política norteamericana hacia Centroamérica y en especial hacia Nicaragua no ha logrado sus objetivos. No se ha conseguido desestabilizar a punto del colapso a la revolución sandinista, lo cual es objetivo central de esa política.

La agresión creciente sí ha producido enormes costos humanos, económicos y políticos en toda la región. En El Salvador el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Duarte no lograron conseguir los objetivos contrainsurgentes que se propusieron, y el esquema de la alianza militares-Democracia cristiana cada vez entra en mayores contradicciones.

En Honduras y Guatemala a pesar de los recientes procesos electorales no se ven las posibilidades de avanzar sustantivamente en un proceso de estabilización política y económica; en el primero, por la desestabilización militar provocada por la presencia norteamericana (en maniobras) y la presencia de la contrarrevolución armada. En el segundo, porque el pacto militares-PDC se ha hecho sobre bases muy frágiles, tal y como lo ha reconocido el mismo Vinicio Cerezo.

También los intentos por cooptar Contadora a través de una alianza entre los países centroamericanos para aislar a Nicaragua, no han obtenido los resultados esperados, aunque sí se ha conseguido debilitar al grupo negociador.

En segundo término, la presencia militar y política norteamericana en la región ha agudizado los problemas existentes y creado nuevos problemas, especialmente los derivados de la militarización de Centroamérica.

En Costa Rica, las bases del Estado democrático se estremecen y debilitan por efectos del conflicto centroamericano y el papel que Estados Unidos quisiera asignarle a este país en su proyecto de reversión

del modelo sandinsita. En El Salvador se polarizan aún más las fuerzas internas, por la imposición de un paquete económico de factura FMI.

Contra Nicaragua se utilizan todos los medios de la guerra sicológica al alcance de la administración Reagan, lo cual desgasta y tensiona aún más las fuerzas internas, sean o no sandinistas.

Frente a ese cuadro de problemas y contradicciones es fundamental la sobrevivencia del grupo negociador de Contadora, el cual trata de buscar una salida no militar a la crisis centroamericana. Esto es lo que le da su vigencia a Contadora, porque responde a necesidades objetivas. Su ausencia en la crisis podría hacer estallar un conflicto regional de impredecibles consecuencias para Latinoamérica. En este sentido Contadora es un verdadero *test* latinoamericano en la defensa de la autodeterminación del continente; es un *test* entre una posición bolivariana y una imposición monroista.

Es, pues, imperativo para los pueblos de Centroamérica, de América Latina, de sus gobiernos y de la comunidad internacional, evitar el estallido de la confrontación regional y la intervención directa norteamericana, coordinando esfuerzos por crear una voluntad política negociadora que lleva a un acomodo mutuo de los diversos intereses en pugna.

Estados Unidos tiene que aceptar como un hecho objetivo la ruptura histórica que se ha dado en su "patio trasero". Ello pasa por aceptar la negociación con los sandinistas, por permitir las negociaciones internas en El Salvador, por desmilitarizar Honduras y desistir en la utilización del prestigio costarricense para destruir el modelo sandinista.

De no existir esa voluntad política de la administración norteamericana, corresponde a Contadora, a las Naciones Unidas, a la Comunidad Económica Europea y a la comunidad internacional, hacer los mejores esfuerzos por la defensa del predominio del Derecho Internacional en la solución política del conflicto centroamericano.

En todo caso, cualquier alternativa de negociación deberá partir de que se trata de redefinir las formas de la presencia norteamericana en la región. La sobrevivencia supone la convivencia mutuamente tolerada de dos enfoques diferentes de organización de la sociedad; pero el problema de cuál es la mejor forma de organizar internamente las sociedades no puede ser punto de negociación, pues ello compete a los pueblos de esta región. Lo negociable son las formas de convivencia para la sobrevivencia pacífica de estos países, a partir de la reartículación de la presencia de los Estados Unidos en la región.

5.2 El proyecto sandinista como alternativa (84)

Después de más de seis años de iniciado el ensayo sandinista, es imperativo plantearlo como una hipótesis aún vigente, de ordenamiento de las sociedades dependientes de Centroamérica, El Caribe y aun Latinoamérica.

Los esfuerzos de la nación nicaragüense por su sobrevivencia, frente a una agresión que se da en todos los terrenos por la administración

directamente la producción agropecuaria, eje del desarrollo en Nicaragua. Por otra, está la salida de profesionales y técnicos al exterior, originada por el temor a la guerra y por la búsqueda de mejores horizontes económicos. Y finalmente el hecho de que generaciones de jóvenes deben interrumpir sus estudios para cumplir con sus obligaciones con la defensa. Todos estos elementos distorsionan gravemente el presente pero, lo que es peor, comprometen riesgosamente el futuro.

Cuantificar simplemente en términos monetarios una agresión de tan vasto alcance resulta difícil y hasta ineficaz, toda vez que los costos de oportunidad en un proceso de profundos cambios sociales no sólo tienen que ver con rendimiento y utilidades, sino con transformaciones de fondo, las que por ser tales, comprometen no solamente el bienestar, sino las esperanzas y aspiraciones de todo un pueblo.

5. CONCLUSIONES: ALTERNATIVAS PARA LA PAZ (83)

5.1. Consecuencias regionales de la política norteamericana

En primer lugar, hay que concluir que la política norteamericana hacia Centroamérica y en especial hacia Nicaragua no ha logrado sus objetivos. No se ha conseguido desestabilizar a punto del colapso a la revolución sandinista, lo cual es objetivo central de esa política.

La agresión creciente sí ha producido enormes costos humanos, económicos y políticos en toda la región. En El Salvador el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Duarte no lograron conseguir los objetivos contrainsurgentes que se propusieron, y el esquema de la alianza militares-Democracia cristiana cada vez entra en mayores contradicciones.

En Honduras y Guatemala a pesar de los recientes procesos electorales no se ven las posibilidades de avanzar sustantivamente en un proceso de estabilización política y económica; en el primero, por la desestabilización militar provocada por la presencia norteamericana (en maniobras) y la presencia de la contrarrevolución armada. En el segundo, porque el pacto militares-PDC se ha hecho sobre bases muy frágiles, tal y como lo ha reconocido el mismo Vinicio Cerezo.

También los intentos por cooptar Contadora a través de una alianza entre los países centroamericanos para aislar a Nicaragua, no han obtenido los resultados esperados, aunque sí se ha conseguido debilitar al grupo negociador.

En segundo término, la presencia militar y política norteamericana en la región ha agudizado los problemas existentes y creado nuevos problemas, especialmente los derivados de la militarización de Centroamérica.

En Costa Rica, las bases del Estado democrático se estremecen y debilitan por efectos del conflicto centroamericano y el papel que Estados Unidos quisiera asignarle a este país en su proyecto de reversión

del modelo sandinsita. En El Salvador se polarizan aún más las fuerzas internas, por la imposición de un paquete económico de factura FMI.

Contra Nicaragua se utilizan todos los medios de la guerra sicológica al alcance de la administración Reagan, lo cual desgasta y tensiona aún más las fuerzas internas, sean o no sandinistas.

Frente a ese cuadro de problemas y contradicciones es fundamental la sobrevivencia del grupo negociador de Contadora, el cual trata de buscar una salida no militar a la crisis centroamericana. Esto es lo que le da su vigencia a Contadora, porque responde a necesidades objetivas. Su ausencia en la crisis podría hacer estallar un conflicto regional de impredecibles consecuencias para Latinoamérica. En este sentido Contadora es un verdadero *test* latinoamericano en la defensa de la autodeterminación del continente; es un *test* entre una posición bolivariana y una imposición monroista.

Es, pues, imperativo para los pueblos de Centroamérica, de América Latina, de sus gobiernos y de la comunidad internacional, evitar el estallido de la confrontación regional y la intervención directa norteamericana, coordinando esfuerzos por crear una voluntad política negociadora que lleva a un acomodo mutuo de los diversos intereses en pugna.

Estados Unidos tiene que aceptar como un hecho objetivo la ruptura histórica que se ha dado en su "patio trasero". Ello pasa por aceptar la negociación con los sandinistas, por permitir las negociaciones internas en El Salvador, por desmilitarizar Honduras y desistir en la utilización del prestigio costarricense para destruir el modelo sandinista.

De no existir esa voluntad política de la administración norteamericana, corresponde a Contadora, a las Naciones Unidas, a la Comunidad Económica Europea y a la comunidad internacional, hacer los mejores esfuerzos por la defensa del predominio del Derecho Internacional en la solución política del conflicto centroamericano.

En todo caso, cualquier alternativa de negociación deberá partir de que se trata de redefinir las formas de la presencia norteamericana en la región. La sobrevivencia supone la convivencia mutuamente tolerada de dos enfoques diferentes de organización de la sociedad; pero el problema de cuál es la mejor forma de organizar internamente las sociedades no puede ser punto de negociación, pues ello compete a los pueblos de esta región. Lo negociable son las formas de convivencia para la sobrevivencia pacífica de estos países, a partir de la rearticulación de la presencia de los Estados Unidos en la región.

5.2 El proyecto sandinista como alternativa (84)

Después de más de seis años de iniciado el ensayo sandinista, es imperativo plantearlo como una hipótesis aún vigente, de ordenamiento de las sociedades dependientes de Centroamérica, El Caribe y aun Latinoamérica.

Los esfuerzos de la nación nicaragüense por su sobrevivencia, frente a una agresión que se da en todos los terrenos por la administración

norteamericana, le permiten presentarse como una alternativa basada en los principios del pluralismo político, economía mixta y un genuino no alineamiento, frente a las "democracias restringidas", convertidas en verdaderos protectorados económicos por los Estados Unidos y fuertemente alineados a la política exterior norteamericana.

Los principios fundamentales en que se basa la revolución sandinista no son invento nicaragüense, sino el resumen y concretización particular del aprendizaje sandinista de la experiencia acumulada por los pueblos del mundo que han luchado y luchan por su independencia nacional (política, económica, diplomática) y por hacer llegar los beneficios de la riqueza nacional a la mayoría de sus ciudadanos.

En primer lugar, al plantear un modelo de *economía mixta*, integrado por un sector privado, un sector de propiedad estatal y un sector cooperativizado, la revolución sandinista ha articulado un balance de fuerzas económicas y sociales cuyo objetivo es poner las bases para la superación estructural de la injusticia social, política y económica.

Esta correlación económica es el cimiento sobre el que descansa, en segundo lugar, el principio del *pluralismo político*. La existencia de un *pluralismo económico* es pues la posibilidad lógica para la creación, desarrollo y profundización de un verdadero pluralismo político, que articule una correlación de fuerzas políticas con hegemonía popular, es decir favorable al proceso de producción-redistribución de la riqueza nacional en base a una lógica de las mayorías.

Estos dos principios básicos de la revolución popular sandinista a lo interno, se expresan a lo externo en la lucha por la soberanía, independencia y autodeterminación nacional y cuya concreción, en tercer lugar, es el principio de un *genuino no alineamiento*.

Este principio responde a una auténtica posición patriótica del sandinismo, la cual hunde sus raíces en la historia de intervenciones extranjeras de que fue objeto Nicaragua desde el siglo pasado.

Pero también el *no alineamiento* se corresponde con la actual correlación de fuerzas internacionales, que es favorable al ensayo sandinista y desfavorable a la política norteamericana de aislamiento y destrucción de la revolución. En especial, responde también a la voluntad política sandinista por ligarse más estrechamente con América Latina, situación posibilitada actualmente por la democratización de la mayoría de estos países.

A nivel centroamericano, el sandinismo ha planteado la posibilidad de iniciar un proceso de integración regional a largo plazo. Esta alternativa económica y política está fundamentada en su historia común, especialmente en la existencia de una base productiva estructural común, sustentada en los productos de agroexportación que representan un setenta por ciento del *producto regional centroamericano*, pero orientados por formas regionales de complementariedad y no de competitividad, como hasta hoy funciona (85).

En este sentido el *pluralismo* a nivel regional supone la superación del proyecto de *economías dependientes* -que fácilmente se trocan en protectorados económicos atados a la voluntad política y militar de

la metrópolis imperialista- renovado actualmente a través de las propuestas del Informe Kissinger e implementadas por medio de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Parecería que las "repúblicas bananeras" -siguiendo esta lógica- se transformarían en algo así como repúblicas de la AID, permanentemente subsidiadas y políticamente sometidas.

Por el contrario, el *pluralismo regional* supone el respeto a los diversos niveles y formas de autodeterminación política y económica de los estados centroamericanos, y que, respetando la diversidad, establezca una vinculación horizontal con cobertura regional, superando el proyecto de dependencia vertical proimperialista que ha sido la causa principal de la polarización permanente y de la elevación y agravación de las tensiones y conflictos entre los pueblos centroamericanos.

A nivel de América Latina el sandinismo propone una diversificación de las relaciones internacionales; nuevas formas de cooperación e integración de los países de la cuenca del Caribe en el marco de un proyecto de integración latinoamericana. Esto se presentaría con nuevas posibilidades reforzadas por los actuales procesos de democratización en Brasil, Argentina, Uruguay, etc.

Pero, además, este proyecto regional alternativo, democrático, pluralista y con un fuerte carácter popular, ofrece un potencial económico que despertaría el interés de Europa, los países no alineados, los países de la cuenca del Pacífico, incluyendo a los Estados Unidos dentro de este nuevo enfoque, y los países socialistas.

La salida democrática y pacífica a la crisis regional puede ser un motor impulsor de nuevas relaciones internacionales, basado en la necesidad de diversificar y romper las relaciones de dependencia de la región y que evite el estallido de un conflicto que podría tener consecuencias nefastas en la búsqueda de la paz mundial (86).

NOTAS:

1. **The Military Balance 1983-1984.** The International Institute for Stategic Studies, London, 1983. (Sin incluir el número de paramilitares que según cálculos diversos llegan a 1,111,500 efectivos).

2. De 1981 a 1985 han participado más de 75,000 militares norteamericanos en maniobras, sólo en Honduras. Fuente: **Invasion: A Guide to the U.S. Military Presence in Central America**, (AFSC), Philadelphia, 1985. **El Balance Militar en Centro América**, Consejo de Asuntos Hemisféricos, Washington, Febrero 1985; **Datos sobre personal militar estadounidense en Centro América.** Centro de Información sobre la Defensa (monitor de la defensa), Washington, 1985, pág. XIII; **The New York Times,** 30 de marzo, 1985, pág. 1.

3. NARMIC: National Action/Research on the Military Industrial Complex, Philadelphia, 1985, NARMIC-AFSC. Centro de Investigación sobre la Militarización de los Cuáqueros.

4. Fuentes: Departamento de Estado Norteamericano. **Documento de Referencia: el aumento militar nicaragüense y su apoyo a la insurrección en Centro América**, Washington, julio, 1984; **The Wall Street Journal**, 4 de marzo de 1985.

5. La Contra-Revolución: desarrollo y consecuencias (Datos básicos 1980-1985), Centro de Comunicación Internacional, Managua,págs. 14-15.

6. Ver: Josh Cohen and Joel Rogers. **Inequality and Intervention: The Federal Budget and Central America.** South End Press, Boston, 1986, págs. 70-72.

7. Fuente: "La Crisis en Centroamérica: Orígenes, Alcances y Consecuencias", CEPAL, México, septiembre 1983, p.18, (mimeo).

8. Entrevista a Elliot Abrams por periodistas británicos el 17 de enero de 1986 en **Boletín de Noticias**, del Servicio Informativo y Cultural de los EEUU, USIS, Embajada de Estados Unidos en Managua, 28 de enero 1986, pág. 2. (El boletín circula semanalmente en Managua).

9. **The Report of the President's National Bipartisan Commission on Central America (Kissinger Report).** MacMillan Publishing Co.,New York, 1984.

10. **Ibid**, cap. VII.

11. **El Debate Norteamericano: Cinco propuestas sobre Centroa América**, D. Barry y J. Sol. Cuadernos de **Pensamiento Propio** (INIES/CRIES), Managua. Serie Ensayos 9, agosto 1984, pág.57.

12. Ver **Report of the Committee on Arms Control and Foreign Policy**, Representatives Leach and Miller with Senator Hatfield,(U.S. Congress, Washington, February 1985), sobre ayuda a ElSalvador, en donde se demuestra documentalmente este aserto.

13. H.W. Schlaudeman, "Central America - We can afford to do noless", en **Caribbean Action**, Washington D.C., Otoño 1985, pág.6.

14. **Ibid.**

15. "Sustaining a Consistent Policy in Central America: One YearAfter The National Bipartisan Commission Report" Departament of State, Special Report no. 124, Washington, April, 1985.

16. ESF (Fondos de Apoyo Económico) la solicitud de esos fondos es presentada al Congreso por el Pentágono, pero administrados por AID. "El Pentágono dice que esos fondos se utilizan para resolver problemas económicos, complementando así -e intensificando- la asistencia militar ya contratada". Admiten que uno de los objetivos claves de la política exterior es garantizar el acceso continuo a las fuerzas militares de los países receptores. En otras palabras, que al recibir fondos ESF, tales países serán más receptivos para asumir los intereses de seguridad estadounidense. Tomado del capítulo sobre "Ayuda Externa de EEUU hacia Centroamérica", que formará parte de una publicación por Deb Preusch y otros, The Resource Center, Albuquerque, Nuevo México, págs. 4 y 5.

17. "Sustaining a Consistent Policy ....", Department of State, **op.cit.**

18. Ejemplos: A finales de 1983 AID inició un proyecto (Desarrollo de Infraestructura de la Zona Norte de Costa Rica) con la asignación de veinte millones de dólares para la construcción de una carretera amplia en la zona rural a lo largo de la frontera con Nicaragua. En Honduras $ 7.8 millones de dólares han sido canalizados para proyectos de reasentamiento de la población miskito fronteriza con Nicaragua.

19. "Committee Approves Latin Police Aid" en **Washington Post,** 6 de diciembre, 1985, p. 35; "Administration to Get Half of Counterterrorism Funds it Sought", **Los Angeles Times,** 22 de noviembre, 1985, p. 31.

20. Cohen y Rogers, **Op. Cit.**

21. Robert Kupperman y William J. Taylor, Jr, "Low-Intensity Conflict: the Strategic Challenge", en Hudson y Druzel (eds.), **American Defense Annual, 1985-1986,** Lexington, Mass., D.C. Heath and Company, 1985.

22. Discurso de apertura en la conferencia sobre "Guerra de Baja Intensidad", 14 de enero, 1986, en Fort McNair, Washington, D.C.

23. "Aproximación al conflicto centroamericano desde la perspectiva de la GBI", **Op. Cit.**, p. 8.

24. Vilas M, Carlos. **La Revolución Sandinista.** Editorial Legasa, Buenos Aires, 1984, pág. 21. Ver también José Luis Coraggio y Carmen Diana Deere **La transición difícil:la autodeterminación de los pequeños países periféricos**, edición en proceso copatrocinado por CRIES, Managua, 1986.

25. Ver: Pax Christi Internacional, "Derechos Humanos. Informe de la Misión Nicaragua", mimeo, octubre 81, citado por A.M. Ezcurra, **Agresión Ideológica contra la Revolución Sandinista,** Ediciones Nuevomar, México, 1983, págs. 29-30.

26. Bermúdez, Lilia y Córdoba, Ricardo. "América Central: La estrategia militar norteamericana y el proceso de militarización (1980-1984)", CINAS, Cuadernos de trabajo número 4, México, 1985. pág. 21.

27. "U.S. Military Involvement" en **Central America 1985:** Basic Information and Legislative History on the U.S. -Central American Relations. Coalition for a New Foreign and Military Policy and The Commission on US-Central American Relations. Washington, Clements Printing, February, 1985.

28. Arancibia, Juan. "Cambios y contradicciones en las fuerzas armadas de Honduras". INSEH, agosto 1985 (mimeo).

29. Vargas, Jorge. "La militarización y la reestructuración nacional de Costa Rica" en **Centroamérica: La guerra de baja intensidad,** Cuaderno de **Pensamiento Propio,** CRIES, Managua, (Serie Avances tres), 1986, pág. 102.

30. Nairn, Allan. "Endgame" en **NACLA,** XVIII (3), May-June 1984, p. 47.

31. Position of the Government of Nicaragua with Regard to the New Contadora Draft Treaty of September 12, 1985. (Traducción de los autores). El texto mimeografiado fue presentado por la cancillería nicaragüense el 8 de noviembre de 1985.

32. **Ibid,** pág. 7.

33. Tercer discurso sabatino en el mes de marzo de Ronald Reagan, citado por **Barricada,** Managua, 23 de marzo 1986, págs. 1-2.

34. Brenner Philip and M. Leo Grande. "Congress and the Not-so-Secret War Against Nicaragua: A Preliminary Analysis". (Mimeo), p. 2.

35. Departamentos de Defensa y Estado de los EEUU: "La conexión soviético-cubana en la América Central y el Caribe", reproducido en: **Boletin de Noticias** del Servicio Informativo y Cultural de los EEUU, Embajada de los EEUU, Managua, 28 de marzo de 1985.

36. Comisión Económica para América Latina (CEPAL) "Nicaragua: repercusiones económicas de los recientes acontecimientos políticos", E/CEPAL/G. 1091 (septiembre 1979), págs. 14, 44, 48.

37. A pesar de que en mayo de 1979 el F.M.I., apoyado por Estados Unidos, hizo un préstamo al gobierno de Somoza por US$ 65 millones, dos meses más tarde, para el triunfo, los sandinistas sólo encontraron tres millones de dólares en las arcas fiscales.

38. De los $ 283 millones de dólares asignados, $ 128 millones se destinan a Honduras, setenta a Costa Rica, cincuenta a Jamaica, treinta y cinco a Honduras y nada a Nicaragua.

39. Sholk, Richard, "U.S. Agression Against Nicaragua", ponencia presentada al XI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, México, septiembre-octubre 1983.

40. "Study Charges U.S with Bias in IMF Votes", artículos de primera página del **"Asian Wall St. Journal"**, New York, 6 de mayo, 1983, (traducción de los autores).

41. Washington, D.C., 30 de enero de 1985, (traducción de los autores).

42. **Ibid.**

43. Fontaine, R., Bouchez, F. y otros. "Las relaciones interamericanas: Escudo de la seguridad del Nuevo Mundo y espada de la proyección del poder global de los EEUU" (conocido como el "Documento de Santa Fe"). Washington, mayo 1980.

44. "Nicaragua Denuncia Agresiones que Sufre desde el Territorio de Honduras 1980-1982". Ministerio del Exterior, Managua, mayo 1982, pág. 39.

45. Brenner, Philip and Leo Grande, M. **Op. Cit.**, pág. 3.

46. El jefe militar del FDN es el ex-Coronel de la Guardia Nacional Enrique Bermúdez; jefe logístico, ex-teniente Armando López I. (Alias Policía López); jefe de inteligencia, ex-teniente G.N. Rodolfo Ampié (Alias El Invisible); jefe de operaciones, ex-teniente G.N. Denis Pineda Cárcamo (Alias Benny); jefe de personal y cuadros, ex-teniente G.N. Harold Duarte Pichardo (Alias El Venado). A éstos se agrega una larga lista de ex-oficiales, clases y soldados de la antigua Guardia Nacional. Ver el libro de Reed Brody, **Contra Terror in Nicaragua.** South End Press, Boston, 1985, págs. 136-143; también el libro de Christo pher Dickex, **With the Contras.** Simon and Schuster, New York, 1985, págs. 153-160.

47. Las zonas de operación se sitúan en la franja noroeste y en la frontera agrícola, que abarca una franja del centro del país en su medio norte. Comprende los sectores orientales de los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales: Zona con baja densidad poblacional, dispersa, que tiene unidades agrícolas muy pequeñas.

48. "Manual de Sabotaje y Guerra Psicológica de la CIA para Derrocar al Gobierno Sandinista". Editorial Fundamentos, s.l., 1983, pág. 39.

49. Estos comandos son: Nicarao, Segovia, Diriangen, Rafaela Herrera, Jorge Salazar, San Jacinto, José D. Estrada, Andrés Castro y Juan Castro.

50. Las principales bases en Honduras son: Cacamuya, La Lodoza, Las Vegas, Banco Grande y RusRus e Ilaya en la zona Atlántica. En Costa Rica están en las Vueltas, Verdún, Conventillo y los Chiles.

51. "Aviones militares que salen desde Honduras son coordinados por un sistema de navegación laser, permitiendo que los contras que operan dentro de Nicaragua reciban abastecimientos nocturnos lanzados desde aviones C-130 que usan el sistema de extracción de paracaídas de baja altitud, una avanzada técnica probada por primera vez en Vietnam y conocida sólo por unos cuantos pilotos. La CIA, operando desde bases de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, contrata pilotos para las riesgosas misiones, pagando treinta mil dólares por misión". Entrevista de Nairn Allan con ex-oficiales norteamericanos en Washington, mayo 1984, en Nairn Allan, **Op. Cit.** pág. 44.

52. De la fuerza incursora inicial, estimada aproximadamente en mil hombres, del Comando José D. Estrada, tiene cerca de 300 bajas. La retirada se convierte en desbandada. Se emplea la aviación (MI-25).

53. Sobre este punto ver entrevista a Alfonso Robelo publicada por **La**

Prensa Gráfica, San Salvador, 18 de febrero, 1986.

54. Comandante de la Revolución Humberto Ortega. "El pueblo en Armas Garantiza la Victoria". Conferencia del 7 de febrero, 1985, publicada por la Dirección Política del EPS, Nicaragua.

55. "Las Pequeñas Unidades de Lucha Contra Bandas" en **Segovia**, (Dirección Política del EPS), Managua, núm. 4, noviembre-diciembre 1985, pág. 49.

56. "Conferencia de Prensa del Ministro de Defensa, Comandante Humberto Ortega, con ocasión de fin de año". (Dirección Política del EPS), Managua, enero 1986, pág. 14.

57. Entrevista del Comandante Roberto Calderón, jefe V Región Militar, septiembre 1985, (inédita).

58. Entrevista del Comandante Javier Carrión, Jefe III Zona Militar, octubre 1985, (inédita). La "Cartilla del Soldado" es una libreta de orientaciones.

59. "Conferencia de Prensa del Ministro de Defensa, Comandante Humberto Ortega, en ocasión de fin de año", **Op. Cit.**, pág. 9.

60. "Discurso del Ministro de Defensa, Managua, 18 de octubre 1985" texto en **Segovia**, (Dirección Política del EPS), núm. 3, octubre 1985, p. 13.

61. "Conferencia de Prensa del Ministro de Defensa..." **Op. Cit.** pág. 1.

62. Por ejemplo, el caso de los CDS (Comité de Defensa Sandinista), cuya célula fue la experiencia paramilitar de los comités de defensa civil en la insurrección, lo cual le imprime en sus primeros años una orientación que oscila entre el democratismo y el autoritarismo que dan lugar al oportunismo.

63. Entrevista al Comandante Tomás Borge, en Bolentín **de Pensamiento Propio**, (INIES/CRIES) Managua, núm. 24, junio-julio 1985, pág. 8.

64. Ver: P. Marchetti. "Guerra, participación Popular y transición al socialismo". Ponencia al VI Congreso Nicaragüense de Ciencias Sociales, agosto 1985, pág. 34, (inédito).

65. **Ibid**, pág. 35.

66. Esta consulta nacional, que se inició a mediados de mayo, se hace a través de cabildos abiertos, concebidos como asambleas populares, dirigidas por la Asamblea Nacional y organizados sobre criterios sectoriales y territoriales, lo cual no excluye los cabildos propios de cada partido representado en la asamblea. Ver "La Constitución: nuestro compromiso con el futuro", informe del presidente de la Asamblea y de la comisión constitucional sobre el proyecto de constitución en **Barricada**, 27 de febrero de 1985.

67. P. Marchetti, **Op. Cit.**, pág. 36.

68. "La Mosquitia, Exposición del Comandante Omar Cabezas", en Boletín de **Pensamiento Propio**, (INIES/CRIES) Managua, núm. 24, junio-julio 1985, pág. 41.

69. T. Borge, "La Democracia en Nicaragua", suplemento cultural Nuevo Amanecer, en **El Nuevo Diario**, Managua, 15 de marzo 1986, pág. 2.

70. Citado por T. Borge, **supera.**

71. En la línea de fortalecimiento de la alianza con el campesinado, el 15 de marzo de 1986 se reunió el máximo órgano de consulta de la Dirección Nacional del FSLN (la Asamblea Sandinista) en esa ocasión "... se ratificó la política de unidad nacional con todos los sectores patrióticos del campo la cual descansa en la unidad revolucionaria de los trabajadores y los campesinos", en **Barricada**, 16 de marzo 1986, pág. 1. "Entre otros aspectos, se debatió la profundización de la reforma agraria, el carácter voluntario del proceso de cooperativización, el ordenamiento en los esfuerzos productivos y la defensa militar, y la línea organizativa para fortalecer un poderoso movimiento campesino de base". **Ibid.**

72. Ver: Xabier Gorostiaga: "Los Dilemas de la Revolución Popular Sandinista a tres años del triunfo", Cuadernos de **Pensamiento Propio** (INIES-CRIES), Managua, Serie Debates 1, 1982.

73. En esta perspectiva se ubicaría la ayuda a la contra que en estos momentos se discute en el congreso estadounidense. Ella se destinaría a proseguir la guerra de desgaste contra la revolución (ver capítulo sobre Agresiones Diplomáticas).

74. P. Marchetti, **Op. Cit.**, pág. 44.

75. Bertin, Javier, "Nicaragua: los desconocidos de la guerra" en **Pensamiento Propio** (INIES-CRIES), Managua, núm. 27, octubre 1985, pág. 23.

76. **Ibid**, pág. 25.

77. Centro de Documentación de CRIES. Listado IV Derechos Humanos. Managua, 1986.

78. Informe de la organización Americas Watch "Derechos Humanos en Nicaragua: Reagan, retórica y realidad". Washington, julio de 1985. Traducción de **Barricada Internacional**, núm. 191, 13 de febrero de 1986.

79. Fitzgerald, Valpy, "Una evaluación del costo económico de la agresión del gobierno estadounidense contra el pueblo de Nicaragua", exposición ante el Congreso de la Latin American Studies Association, Albuquerque, abril 1985, pág. 16, (mimeo).

80. Ortega, Daniel, "Informe a la Nación", en **Barricada**, Managua, 22 de febrero 1986, pág. 3.

81. Entrevista al Ministro de Comercio Exterior de Nicaragua en **Barricada**, Managua, 8 de mayo de 1986, pág. 5.

82. Ortega, Daniel, **Op. Cit.**, pág. 3.

83. Se retoman las ideas principales planteadas por Xabier Gorostiaga, en: "Para entender a Centroamérica", Boletín de **Pensamiento Propio** (INIES/CRIES), Managua, núm. 28-29, noviembre-diciembre 1985, págs. 3-4.

84. Ver: Discurso de Bayardo Arce: "Nicaragua ante la crisis internacional". en **Sandinismo y Política imperialista**, Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1985, págs. 39-45.

85. Ver libro editado por George Irvin y Xabier Gorostiaga **Towards an Alternative for Central America and The Caribbean"**, Sidney-Boston, George Allen and Unwin, London, 1985, que recoge un análisis estructural de la crisis y de las alternativas regionales, y los trabajos de la CRIES en busca de una alternativa regional.

86. "Centroamérica 1979-1985", en **Envío** (Especial), Instituto Histórico Centroamericano, Managua, enero-febrero 1986.

TITULOS PUBLICADOS

Los dilemas de la Revolución Popular Sandinista a tres anos del triunfo, Xabier Gorostiaga. Serie Debates, número 1, octubre 1982.

Acumulación planificada y distribución del ingreso en pequenas economías socialistas periféricas E.V.K. Fitzgerald. Serie Debates, número 2, octubre 1982.

Por la Paz en Centroamérica. (recopilación de documentos contra la intervención). Serie Documentos, número 1, noviembre 1982.

Estado militar y lucha revolucionaria en Guatemala, Gabriel Aguilera Peralta. Serie Ensayos, número 1, noviembre 1982.

La crisis económica centroamericana: cuál crisis? Edelberto Torres Rivas. Serie Ensayos, número 2, noviembre 1982.

Integración en el Caricom, Eugenio Espinoza M. Serie Avances, número 1, noviembre 1982.

El F.M.I. y la política contrainsurgente en El Salvador, Salvador Arias Penate. Series Ensayos, número 3, febrero 1983.

De alfabetizando a maestro popular: la post-alfabetización en Nicaragua, Rosa María Torres. Serie Ensayos, número 4, abril 1983.

Algunos rasgos hegemónicos del somocismo y la revolución sandinista, Amalia Chamorro. Serie Ensayos, número 5, junio 1983.

Una política alternativa para Centroamérica y el Caribe, (resumen y conclusiones del seminario-taller realizado en el Institute of Social Studies, de la Haya, del 6 al 25 de junio de 1983). Serie Documentos, número 2, septiembre 1983.

An Alternative Policy for Central America and the Caribbean, (summary and conclusions of a policy workshop held in The Hague, 6-25 June 1983). Series Documents, number 2, September 1983.

El sandinismo en Estados Unidos, (declaraciones de Daniel Ortega, Tomás Borge, Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal a la revista Playboy). Serie Entrevistas, número 1, diciembre 1983.

Geopolítica de la crisis regional, Xabier Gorostiaga. Serie Ensayos, número 6, enero 1983.

Cambiando el rumbo, (Bosquejo para la Paz en Centroamérica y el Caribe), Políticas Alternativas para el Caribe y Centroamérica, PACCA. Serie Documentos, número 3, mayo 1984.

Revolución y democracia en Nicaragua, José Luis Coraggio; Derecho y Revolución: La Legalidad Revolucionaria, Manuel Gaggero. Serie Ensayos, número 7, mayo 1984.

Educación y democracia en la Granada revolucionaria, Rosa María Torres, Serie Ensayos, número 8, mayo 1984.

Canadá: de la conformidad a la acción, Centro para Alternativas a la Política Canadiense en el Caribe y Centroamérica. CAPA. Serie Documentos, número 4, junio 1984.

Nicaragua revolucionaria: bibliografía 1979-1984 Centro de Documentación INIES. Serie Bibliografías, número 1, julio 1984.

El debate norteamericano: cinco propuestas sobre Centroamérica, Deborah Barry y Jorge Sol. Serie Ensayos, número 9, agosto 1984

Crecimiento con equidad (Cuba 1959-1984), Claes Brundenius. Serie Ensayos, número 10, septiembre 1984.

El café en Nicaragua, Los pequeños productores de Matagalpa y Carazo, Alicia Gariazzo. Serie Avances, número 2, diciembre 1984.

Estrategia del desarrollo industrial en Nicaragua, 1979-1984, Claes Brudenius. Serie Ensayos, número 11, enero 1985.

La concentración económica en El Salvador, Manuel Sevilla. Serie Debates, número 3, febrero 1985.

Los CEP: educación popular y democracia participativa en Nicaragua, Rosa María Torres. Serie Ensayos, número 12, enero 1986.

Centroamérica: la guerra de baja intensidad, J.R. Castro, D. Barry, G. Aguilera, INSEH, J. Vargas y Raúl Leis. Serie Avances, número 3, febrero 1986.

84. Ver: Discurso de Bayardo Arce: "Nicaragua ante la crisis internacional", en **Sandinismo y Política imperialista**, Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1985, págs. 39-45.

85. Ver libro editado por George Irvin y Xabier Gorostiaga **Towards an Alternative for Central America and The Caribbean"**, Sidney-Boston, George Allen and Unwin, London, 1985, que recoge un análisis estructural de la crisis y de las alternativas regionales, y los trabajos de la CRIES en busca de una alternativa regional.

86. "Centroamérica 1979-1985", en **Envío** (Especial), Instituto Histórico Centroamericano, Managua, enero-febrero 1986.

TITULOS PUBLICADOS

Los dilemas de la Revolución Popular Sandinista a tres anos del triunfo, Xabier Gorostiaga. Serie Debates, número 1, octubre 1982.

Acumulación planificada y distribución del ingreso en pequenas economías socialistas periféricas E.V.K. Fitzgerald. Serie Debates, número 2, octubre 1982.

Por la Paz en Centroamérica. (recopilación de documentos contra la intervención). Serie Documentos, número 1, noviembre 1982.

Estado militar y lucha revolucionaria en Guatemala, Gabriel Aguilera Peralta. Serie Ensayos, número 1, noviembre 1982.

La crisis económica centroamericana: cuál crisis? Edelberto Torres Rivas. Serie Ensayos, número 2, noviembre 1982.

Integración en el Caricom, Eugenio Espinoza M. Serie Avances, número 1, noviembre 1982.

El F.M.I. y la política contrainsurgente en El Salvador, Salvador Arias Penate. Series Ensayos, número 3, febrero 1983.

De alfabetizando a maestro popular: la post-alfabetización en Nicaragua, Rosa María Torres. Serie Ensayos, número 4, abril 1983.

Algunos rasgos hegemónicos del somocismo y la revolución sandinista, Amalia Chamorro. Serie Ensayos, número 5, junio 1983.

Una política alternativa para Centroamérica y el Caribe, (resumen y conclusiones del seminario-taller realizado en el Institute of Social Studies, de la Haya, del 6 al 25 de junio de 1983). Serie Documentos, número 2, septiembre 1983.

An Alternative Policy for Central America and the Caribbean, (summary and conclusions of a policy workshop held in The Hague, 6-25 June 1983). Series Documents, number 2, September 1983.

El sandinismo en Estados Unidos, (declaraciones de Daniel Ortega, Tomás Borge, Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal a la revista Playboy). Serie Entrevistas, número 1, diciembre 1983.

Geopolítica de la crisis regional, Xabier Gorostiaga. Serie Ensayos, número 6, enero 1983.

Cambiando el rumbo, (Bosquejo para la Paz en Centroamérica y el Caribe), Políticas Alternativas para el Caribe y Centroamérica, PACCA. Serie Documentos, número 3, mayo 1984.

Revolución y democracia en Nicaragua, José Luis Coraggio; Derecho y Revolución: La Legalidad Revolucionaria, Manuel Gaggero. Serie Ensayos, número 7, mayo 1984.

Educación y democracia en la Granada revolucionaria, Rosa María Torres, Serie Ensayos, número 8, mayo 1984.

Canadá: de la conformidad a la acción, Centro para Alternativas a la Política Canadiense en el Caribe y Centroamérica. CAPA. Serie Documentos, número 4, junio 1984.

Nicaragua revolucionaria: bibliografía 1979-1984 Centro de Documentación INIES. Serie Bibliografías, número 1, julio 1984.

El debate norteamericano: cinco propuestas sobre Centroamérica, Deborah Barry y Jorge Sol. Serie Ensayos, número 9, agosto 1984

Crecimiento con equidad (Cuba 1959-1984), Claes Brundenius. Serie Ensayos, número 10, septiembre 1984.

El café en Nicaragua, Los pequeños productores de Matagalpa y Carazo, Alicia Gariazzo. Serie Avances, número 2, diciembre 1984.

Estrategia del desarrollo industrial en Nicaragua, 1979-1984, Claes Brudenius. Serie Ensayos, número 11, enero 1985.

La concentración económica en El Salvador, Manuel Sevilla. Serie Debates, número 3, febrero 1985.

Los CEP: educación popular y democracia participativa en Nicaragua, Rosa María Torres. Serie Ensayos, número 12, enero 1986.

Centroamérica: la guerra de baja intensidad, J.R. Castro, D. Barry, G. Aguilera, INSEH, J. Vargas y Raúl Leis. Serie Avances, número 3, febrero 1986.

Nicaragua: país sitiado pretende ser la primera aproximación a un tema difícil y nuevo en las ciencias sociales de la región. Ubicar la guerra y la creciente militarización de nuestros países dentro de la profunda crisis, transformaciones e inicios de construcción de una transición difícil a una nueva sociedad, un nuevo hombre y una nueva región centroamericana.

Indudablemente que la agresión, dirigida y financiada por la gran potencia vecina, y la defensa de su autodeterminación y sobrevivencia en un país pequeno y pobre, devastado por cuarenta y cinco anos de dictadura, tres anos de guerra insurreccional y cuatro de guerra contrarrevolucionaria, producen un conjunto de dramáticos efectos económicos y sociales y un casi infinito dolor social, en un país que ni la naturaleza ha dejado reposar en más de medio siglo.

...Este trabajo de CRIES busca iniciar en Nicaragua un conjunto de estudios que colegas centroamericanos han realizado en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. El caso de Nicaragua es el más sencillo y a la vez el más complicado de analizarse, por conllevar la tensión entre lo nuevo que nace y lo viejo que se quiere reconstituir; entre las distorsiones y contradicciones producto de la agresión y, a la vez, las nuevas posibilidades de profundizar la participación y creatividad popular, en una lucha por la dignidad nacional y la sobrevivencia económica.